



ANTEPROYECTO DE LEY DE FAMILIAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La familia es una institución esencial dentro de nuestra sociedad y una de las principales protagonistas de los cambios que ha vivido la ciudadanía a lo largo de las últimas décadas. La presente ley busca extender el apoyo, avanzando en el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución Española, que insta a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias.

Esta ley se alinea, además, con el deber de protección de las familias recogido en numerosos tratados internacionales y europeos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 16.3 el derecho de la familia a “la protección de la sociedad y del Estado”.

De la misma forma, la Carta Social Europea establece en su artículo 16 que “la familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo”.

En el mismo sentido, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala también la garantía de “la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social”, recogida en su artículo 33.1.

En este mismo sentido, la presente ley también da cumplimiento a las reiteradas recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea ha hecho a España sobre la protección del conjunto de familias de nuestro país. Así ha sido, por ejemplo, en las recomendaciones a nuestro país realizadas en los semestres europeos de 2019 y 2020, donde se señaló la necesidad de mejorar el apoyo a las familias españolas. Además, es uno de los compromisos adquiridos como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde nuestro país se comprometió a aprobar una nueva ley de protección de las familias y de reconocimiento de su diversidad.

Concretamente, con la entrada en vigor de esta ley se cumple con el hito 316, que se enmarca dentro del Componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”, en la Reforma 3 recogido en el Anexo revisado de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España de julio de 2021, que persigue los siguientes objetivos: a) el reconocimiento jurídico de los diversos tipos de estructuras familiares existentes; b) la determinación de las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho según sus características y niveles de ingresos; y c) la reducción de la pobreza infantil teniendo en cuenta los resultados de una evaluación del impacto redistributivo.

II

Esta ley adecua nuestro ordenamiento jurídico a nuestras obligaciones internacionales como país, pero también a las transformaciones demográficas y sociales que se han producido en las últimas décadas, en las que las familias españolas han experimentado muchos cambios en su tamaño y en su composición. El avance del feminismo, de los derechos LGTBI o la creciente demanda de cuidados por el progresivo envejecimiento de la población constituyen cambios significativos que ponen de manifiesto nuevas demandas a las que el legislador debe dar respuesta.



Esta diversidad en las realidades familiares explica que existan necesidades particulares asociadas a los diferentes modelos. Cabe recordar que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece el principio de igualdad material, algo que mandata al legislador a impulsar las medidas oportunas para corregir las desigualdades y garantizar que los miembros de todas las familias queden en una situación de igualdad en el acceso a derechos sociales, económicos o de cualquier otra índole.

Tal y como ha interpretado el propio Tribunal Constitucional, el concepto de familia no queda limitado a las familias de origen matrimonial. La interpretación que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho del artículo 8 del Convenio Europeo también apunta a un concepto más amplio de familia, algo a lo que los poderes públicos deben dar una respuesta que asegure la igualdad de derechos de los distintos tipos de familia y la protección de la diversidad familiar.

En este sentido, esta ley garantizará el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias y su protección, ya sea legal, económica, en términos de crianza y cuidado, de apoyo a través de servicios sociales, de salud y bienestar, de educación, cultura y ocio o con respecto a las tecnologías de la información.

III

Esta diversidad ha generado una enorme riqueza para nuestro país, y el deber de las Administraciones Públicas es también evolucionar y garantizar su protección. Ya no existe la familia, sino las familias, en plural. Hoy es habitual ver familias formadas por parejas de hecho, familias formadas por una sola persona progenitora, familias formadas por personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, familias en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores, familias adoptivas o acogedoras, familias procedentes de otro Estado o territorio, o en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, o familias entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes. Las políticas públicas deben garantizar que todas las familias son iguales en derechos y que cada una de ellas recibe el apoyo y la protección social que necesita.

La creciente diversidad familiar no solo es un avance y un valor a proteger, sino que además hay que asegurar que las niñas, niños y adolescentes se encuentran igualmente protegidos con independencia del tipo de familia en el que crezcan. Dicha protección se ajusta, además, a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a la familia como el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y su bienestar.

Por eso, del mismo modo que esta ley reconoce su igualdad en la diversidad, se fomentan medidas de apoyo a situaciones familiares específicas, ya sean relativas a situaciones de vulnerabilidad económica, la constitución de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, como las familias numerosas, las formadas por una sola persona progenitora, familias donde haya personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, familias formadas por personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, familias en las que se producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples, adoptivas o acogedoras, familias en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores, familias residentes en el medio rural, familias procedentes de otro Estado o territorio, o en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, familias entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes u otras situaciones que requieran medidas específicas.

IV

En términos económicos, nuestro país ha sufrido una infrafinanciación histórica en políticas específicas para las familias, hecho que ha influido decisivamente en su situación y en cómo se ha configurado nuestro Estado del bienestar. Actualmente, de acuerdo con los datos de Eurostat



sobre protección social, España invierte cuatro puntos porcentuales menos de PIB en gasto social total respecto a la media de los países de la Unión Europea, y un punto menos específicamente en protección a la familia y la infancia. Por tanto, esta legislación acerca a nuestro país a un nivel de protección de nuestras familias homologable al del resto de países de la Unión Europea.

Pero no es solo una cuestión de inversión, sino también de diseño. Hasta este momento, han predominado las prestaciones de carácter contributivo y los beneficios fiscales, lo que ha desembocado en la limitación de la capacidad del Estado del bienestar de reducir la desigualdad. La ausencia de un sistema de prestaciones universales dirigidas a familias con niños, niñas y adolescentes similar al de otros Estados de la Unión Europea hace que en España las prestaciones monetarias tengan un efecto insuficiente en la reducción en la intensidad de la pobreza infantil y la promoción de la igualdad de oportunidades. De hecho, la protección que reciben es menor que la del resto de población.

Esta falta de protección que viene a paliar este texto legislativo ha tenido efectos en el bienestar social de la infancia. La alta incidencia de riesgo de pobreza infantil es anómala con respecto al nivel de renta de nuestro país. La OCDE en su informe *“Evolving family models in Spain. A new national framework for improved support and protection for families”* (2022), en su condición de Libro Blanco para la reforma de la protección a las familias en nuestro país, alerta de que la pobreza infantil es muy alta en España en comparación con la mayoría de los demás países de la OCDE, con casi uno de cada cinco niños (19,3%) viviendo en pobreza relativa de ingresos en comparación con un promedio de la OCDE de 12,9%.

Por ello, esta ley también establece medidas de protección económica a las familias, entre las que destaca la renta crianza, una prestación con el objetivo de garantizar un nivel de vida adecuado a los niños y niñas de nuestro país. Dicha prestación se extenderá a las familias con niños y niñas menores de 3 años.

V

Por razones de sistematicidad, la presente norma, asimismo, tiene la finalidad de transponer al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

La Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, se asienta y es expresión de los principios de igualdad de género y de equilibrio entre vida familiar y vida profesional que se reafirman en los principios 2 y 9 del pilar europeo de derechos sociales. Es, asimismo, fruto de la evolución de la propia Unión Europea en el contenido y alcance de los derechos de conciliación, siendo la tercera de las directivas sobre esta materia: su antecedente remoto fue la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, una directiva sobre permisos parentales que se basaba tan solo en la configuración de derechos de ausencia de las personas con responsabilidades de cuidado y que ni reflejaba las consecuencias de género de las cuestiones de cuidado ni, en consecuencia, preveía medios efectivos para promover la corresponsabilidad. Este camino sería iniciado con la siguiente directiva sobre la materia, la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE.

Sin embargo, es con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, con la que la conciliación de responsabilidades pasa a un lugar central. El propio título ya ilustra el nuevo contenido, que va más allá del establecimiento de permisos y otorga una relevancia especial a la adaptación de condiciones de trabajo,



introduciendo con rotundidad la dimensión de la corresponsabilidad, como se advierte en numerosos aspectos, tanto en los considerandos como en el articulado. Esta directiva establece un nuevo marco que requiere seguridad en el conocimiento y en el ejercicio de los derechos sobre el tiempo de trabajo relacionados con los derechos de cuidado de menores y dependientes, por lo que enlaza con la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, y con la Directiva (UE) 2019/1152, de 20 de junio de 2019.

La Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, tiene, por tanto, como objetivo dar respuesta a una realidad social concreta: eliminar cualquier desventaja o merma en términos de mejora y progreso que pueda afectar a las carreras profesionales de las personas que se ocupan de manera informal de las tareas de cuidado de familiares o dependientes.

La directiva da respuesta adecuada a la situación de doble atención a las responsabilidades familiares y a las de trabajo en el marco y conforme a unas exigencias concretas como son relaciones laborales más igualitarias y la aplicación efectiva del principio de no discriminación por razón de sexo. Dispone que los puestos de trabajo deben adaptarse a las distintas vicisitudes derivadas de la crianza de menores y cuidado de dependientes y mayores, y establece unas condiciones efectivas para que haya un reparto real de tareas y un ejercicio corresponsable, garantizando, en su caso, el carácter intransferible y retribuido de determinadas interrupciones de la actividad laboral.

En definitiva, la transposición de la directiva enriquece las mejoras y aportaciones del Real Decreto -ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, superando los tópicos de la doble jornada femenina o los largos permisos, en pro de las fórmulas de trabajo flexible y acotamiento de las ausencias laborales lo que permite avanzar en la igualdad real en el ámbito laboral, a través del verdadero reconocimiento del derecho de conciliación como parte del elenco de derechos de toda persona trabajadora.

Finalmente, esta norma establece también un Marco estatal de apoyo a los primeros 1.000 días, orientado a garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan condiciones mínimas de bienestar durante su primera etapa de vida. Se incluyen, a este respecto, disposiciones relativas a la garantía de un entorno saludable, seguro y accesible, el acceso a un sistema sanitario y educativo universal, de calidad e inclusivo, el acceso a una alimentación saludable y sostenible, el apoyo para el desarrollo de habilidades y competencias parentales y garantía del equilibrio de la vida profesional y privada para las personas adultas responsables de la crianza.

VI

Por todo lo expuesto, esta ley sirve de marco de referencia para las políticas familiares en todo el Estado, en favor de una mayor coordinación y coherencia normativa, pero también del establecimiento de una protección mínima en todo el territorio español. Por tanto, se otorgan criterios comunes a la red de políticas y programas estatales, regionales y locales en todas las áreas de políticas que inciden en las familias, todo ello con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y las entidades locales, y velando en todo momento por la coordinación y el trabajo conjunto de todas las Administraciones Públicas.

Para ello, se clarifican las definiciones y características básicas de los distintos tipos de familias. Este texto legislativo ofrece, por tanto, apoyo continuo a las familias, tanto a los hijos e hijas para los que se reservan medidas desde el nacimiento a la edad adulta como a las personas adultas responsables de la crianza.

VII



La ley se estructura en cuatro títulos, diecinueve capítulos, sesenta y ocho artículos, cuatro disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, y diecisiete disposiciones finales.

El título I incluye las disposiciones generales, en el que los artículos plantean las definiciones y valores fundamentales. Así, se establece como objeto del texto el reconocimiento jurídico de la diversidad de familias de nuestra sociedad, así como el marco para una política integral de apoyo a las familias, orientada a mejorar su bienestar y su calidad de vida. También se concreta el ámbito de aplicación del texto y se precisan las definiciones y criterios básicos empleados en la normativa a los efectos de la protección dispensada por esta ley.

Este título también explicita los valores fundamentales y principios rectores que deben guiar las políticas públicas, como son la perspectiva de género, la universalidad, la promoción, prevención y protección de los derechos humanos o la accesibilidad universal.

El título II está dedicado a medidas generales de apoyo a todas las familias. De esta manera, las Administraciones Públicas deberán asegurar la protección social y económica de las familias, atendiendo a sus circunstancias particulares, en especial en situaciones de vulnerabilidad.

En materia de protección jurídica, se establecen medidas como la regulación y reconocimiento de relaciones familiares no basadas en el matrimonio, de acuerdo con lo que se establezca en desarrollo de lo previsto en la disposición final decimotercera

En el caso de la protección económica se reconoce la adaptación del sistema de Seguridad Social a la diversidad familiar, y se establece que las familias con menores de 3 años, en los términos previstos en esta ley, tienen derecho a una prestación económica de apoyo a la crianza, ya sea en forma de deducción fiscal con posibilidad de cobro anticipado ya sea en forma de prestación complementaria específica en el ingreso mínimo vital.

También se establecen medidas de apoyo en la crianza y el cuidado, instando al Gobierno a desarrollar un marco estatal de acompañamiento y apoyo a “los primeros 1.000 días” para garantizar un buen comienzo en la vida de todos los niños y niñas de nuestro país.

Así mismo, se contemplan medidas sobre servicios sociales de apoyo a las familias, a su salud y bienestar, a su derecho a la atención temprana y la promoción de la salud mental, a la vivienda, la educación, cultura y ocio o el uso de las TIC en el ámbito familiar, en este último caso, inspirados en las previsiones de la Carta de Derechos Digitales adoptada por el Gobierno en 2021 como un marco de referencia de las políticas públicas en los entornos digitales.

El título III recoge medidas específicas de protección a algunos tipos de situaciones familiares. Así, las familias en situación de vulnerabilidad con menores a cargo dispondrán de una protección especial. También se promoverá su derecho a la vivienda y se tomarán medidas en el ámbito educativo como, por ejemplo, facilitar la elección del centro que mejor haga posible la conciliación o estableciendo exenciones y bonificaciones de las tasas o precios públicos.

Además, se contemplan medidas específicas para aquellas situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora, con sus hijos e hijas, que se encuentran en más de un 80% formado por madres solas con sus hijos e hijas. Para dicho colectivo la ley asegura que sus integrantes no queden en situación de desventaja, reconociendo su derecho a contar con un título acreditativo de validez estatal y una acción protectora específica, incluyendo además la equiparación de las que cuentan con dos hijas o hijos como familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, entre otras medidas.

Para las familias con personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, las Administraciones Públicas pondrán en marcha medidas oportunas para promover la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a los apoyos, los bienes y servicios públicos que



necesiten.

También se garantizará la igualdad de trato y oportunidades de las personas integrantes de aquellas situaciones familiares con personas pertenecientes a colectivos LGTBI en el acceso y disfrute de todo tipo de prestaciones públicas, beneficios sociales y servicios, y se adoptarán medidas dirigidas a la prevenir la discriminación en los distintos contextos de estas familias por razón del sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales de quienes las integren.

Las situaciones familiares en las que se producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples serán consideradas como colectivo de especial protección por las dificultades que pueden presentarse al tener varias hijas o hijos a la vez.

Se reconoce, entre otros, el derecho a asesoramiento y apoyo a las familias adoptivas y acogedoras y se contemplan medidas específicas en los ámbitos educativo, sanitario y social.

También se reconocen las situaciones familiares en que existen hijos o hijas de uniones anteriores, a las que se les otorga protección social y económica, teniendo en cuenta siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Esta ley también mandata a las Administraciones Públicas el deber de garantizar a las familias residentes en el medio rural su derecho a acceder a los recursos y servicios de atención a sus necesidades, así como a promover medidas para fomentar la corresponsabilidad en el reparto de los cuidados y en el acceso de las mujeres al mercado laboral, reforzando así la cohesión social y territorial.

Igualmente, se contemplan especificidades para las situaciones familiares con miembros procedentes de otro Estado o territorio, como el apoyo para atender las dificultades que se deriven de la separación o precisando que las políticas migratorias deben tener en cuenta los lazos familiares. Igualmente contiene previsiones en relación a las familias españolas en el exterior y las de emigrantes retornados.

Finalmente, se contemplan medidas para otros colectivos con necesidades singulares, como la población reclusa o institucionalizada.

El título IV está dedicado a la coordinación, cooperación y participación social en las políticas familiares. La ley insta a las Administraciones Públicas a integrar la perspectiva familiar en sus decisiones y actuaciones sectoriales. Además, establece la coordinación y cooperación en políticas familiares a través de diferentes órganos, como la Comisión Interministerial de Familias, o el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia; por su parte, el Consejo Estatal de Familias y el ya existente Consejo estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia serán órganos de participación social en las políticas que les afectan.

La parte final de la norma está compuesta por cuatro disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y diecisiete disposiciones finales.

La disposición adicional primera prevé que el desarrollo de las medidas, derechos, garantías, servicios y apoyos que se contemplan en la presente ley queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias de las Administraciones Públicas competentes.

La disposición adicional segunda indica que las referencias que el ordenamiento jurídico haga a las familias numerosas se entenderán realizadas a las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, cuya denominación modifica esta ley.



La disposición adicional tercera contiene la previsión de analizar, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, la extensión de hasta los 26 años de edad en la fecha del fallecimiento del causante la posibilidad de ser beneficiario de la pensión o prestación de orfandad del sistema de Seguridad Social.

La disposición adicional cuarta prevé la elaboración, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, de un instrumento de valoración que sirva de referencia para unificar criterios diagnósticos en el ámbito de los Servicios Sociales.

La disposición transitoria primera establece el mantenimiento de la vigencia de aquellas adaptaciones de jornada que estuvieran aplicándose en la fecha de entrada en vigor de esta ley. En este último caso se explicita que será de aplicación lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 34.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como la aplicación de la normativa vigente en el momento de la solicitud de aquellas que aún no hayan sido resueltas en el momento de entrada en vigor de esta norma.

La disposición transitoria segunda prevé la posibilidad de continuar con los permisos de los que se estuviese haciendo uso, sin que ello afecte en ningún caso al disfrute íntegro del permiso parental.

La disposición transitoria tercera se refiere al mantenimiento de la vigencia de los actuales títulos de familia numerosa hasta la fecha en que les correspondiera su renovación o extinción, siempre que por efecto de las modificaciones introducidas en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, no les correspondiese quedar clasificadas en una categoría diferente, en cuyo caso se deberá expedir un nuevo título de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza en la nueva categoría donde se clasifiquen. Asimismo, y, en consecuencia, en esta disposición se regula también el régimen aplicable a las familias numerosas que hasta este momento tuvieran reconocida la categoría general pero que quedan clasificadas como de categoría especial según lo previsto en la nueva redacción dada en la disposición final novena.

En las disposiciones finales de la norma se modifican varios textos legales con el objeto de adaptar su contenido a las previsiones contenidas en esta ley.

Así, en la disposición final primera se incluyen las modificaciones al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con el objeto de incorporar las modificaciones necesarias para introducir la figura de la pareja de hecho en diversas previsiones de este texto legal, como por ejemplo a efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1, de modo que no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena, entre otras modificaciones. Por otra parte, se introducen mejoras en algunas prestaciones, como por ejemplo la extensión del subsidio no contributivo de maternidad a supuestos hasta ahora excluidos, como el acogimiento, la guarda con fines de adopción y la adopción.

La disposición final segunda prevé la modificación de los artículos 108.2 y 122.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, para garantizar su coherencia con las modificaciones planteadas, respectivamente, en los artículos 53.4 y 55.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

En la disposición final tercera se incluyen todas las modificaciones necesarias en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para dar cumplimiento al mandato de transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la



que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Debe tenerse en cuenta que el conjunto de derechos reconocidos por la directiva se superpone a unos sistemas normativos internos que han ido construyendo reglas al servicio de la conciliación entre la vida laboral y familiar, de carácter diverso y complejo por razón de su disfrute, de su duración o de su propia naturaleza jurídica. Interesa por tanto señalar que, en el cumplimiento del mandato de transposición a nuestro ordenamiento interno, se han adoptado aquellos cambios considerados imprescindibles y se ha atendido, cuando ha sido necesario y en la medida adecuada, a la denominada “cláusula pasarela”. Tal y como se señala en los considerandos de la directiva, esta permite que los Estados miembros puedan tener en cuenta cualquier período de ausencia del trabajo relacionado con la familia a que pueda acogerse la persona trabajadora en el ámbito nacional y que supere los estándares mínimos previstos en la citada directiva, siempre que se respeten los requisitos mínimos para los permisos que recoge y que no se reduzca el nivel general de protección garantizado a los trabajadores.

De manera que, en cada caso, las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores responden a un doble propósito: de un lado se evita penalizar o duplicar los sistemas de protección frente a las situaciones descritas- crianza de los hijos e hijas, cuidado de mayores y dependientes- y de otro, con el límite necesario, introducir los requisitos mínimos de cada permiso y las mejoras que no resultan absorbibles.

Así, la disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo a los siguientes extremos:

Se modifica el artículo 4.2, referente a los derechos de las personas trabajadoras en la relación laboral, especificando que el trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de sus derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida familiar y laboral será constitutivo de discriminación por razón de sexo. De este modo se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que establece la obligación de que los Estados miembros configuren mecanismos para que no sufran perjuicio alguno ni trato discriminatorio las personas que ejerzan sus derechos de conciliación. Esta formulación es consecuente con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 8 de mayo de 2019, C-486/18, asunto Praxair) y del Tribunal Constitucional (STC 79/2020, de 2 de julio de 2020) en las que se ha establecido que, sobre la base de una mayor afectación femenina, la discriminación por ejercicio de derechos de conciliación puede ser constitutiva de discriminación indirecta por razón de sexo.

También se opera una modificación en el artículo 34.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto ya se modificó por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, a efectos de incrementar el ámbito del derecho a la adaptación de la jornada de las personas con dependientes a cargo, pero requiere de ajustes puntuales a efectos de que se acomode totalmente a las previsiones del artículo 9 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre fórmulas de trabajo flexible.

Se modifica el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su letra a), para recoger otras formas de convivencia de manera similar a como se amplía el ámbito subjetivo de la directiva y la relación de familiares recogida en el artículo 3.1.e), así como en su letra b), a efectos de transponer al ordenamiento español el permiso de cuidadores previsto en el artículo 6 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. Así, se amplía el número de días y también el ámbito subjetivo de este permiso,



incorporando a las personas convivientes sobre las que se llevará a efecto el cuidado efectivo, término más adecuado que el de cuidado directo para atender suficientemente el tenor literal de la transposición, dando cumplimiento de este modo a lo establecido en el artículo 3.1.c) de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, acerca del abanico de las posibles personas beneficiarias trascendiendo el ámbito de las unidades familiares de convivencia. Por lo demás, el precepto se completa para incluir en la cobertura a la pareja de hecho.

Se introduce, por su parte, una nueva letra b bis) para separar del anterior el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuya causa es diversa, lo que aconseja esta nueva distribución sistemática.

Se introduce un nuevo artículo 37.9 en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para transponer al ordenamiento español el artículo 7 de la Directiva 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que requiere que los Estados miembros establezcan permisos en aquellos casos de fuerza mayor familiar que requieran la presencia de la persona trabajadora. Se establecen como retribuidas las horas equivalentes a cuatro días al año, sin perjuicio de lo que al respecto pudieran establecer los convenios colectivos.

La Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, establece en su artículo 5.5 que debe motivarse el aplazamiento del disfrute de los permisos parentales cuando el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el buen funcionamiento de la empresa, debiendo justificarlo por escrito. Es por ello que se modifican los artículos 37.4 y 6, y 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para que, en caso de coincidencia en la misma empresa del disfrute de ambas personas progenitoras de los permisos de lactancia, reducción de jornada o excedencia -todos ellos permisos o periodos de ausencia relacionados con la familia- la empresa deba aportar un plan de disfrute alternativo si concurren razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la misma, dando así cumplimiento a las exigencias del citado precepto.

También se modifican los artículos 37.6 y 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para matizar el derecho a la reducción de jornada y excedencia para cuidado de dependientes por afinidad. El reconocimiento de estos derechos que van conectados a periodos largos de duración en los que la persona sufre perjuicios en sus ingresos y puede sufrir perjuicios en sus expectativas profesionales debe tener una escrupulosa redacción que evite la perpetuación de roles y que promueva la corresponsabilidad. Dado que suele ser más frecuente que sean las mujeres las que acceden a estas situaciones para el cuidado de sus familiares políticos y es poco frecuente que suceda, al contrario, procede que se limite, en principio, el derecho a la reducción de jornada y a la excedencia al cuidado de los familiares por consanguinidad. Es una corrección necesaria para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado familiar que requiere la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. Ello, no obstante, y a efectos de evitar la desprotección, se incluye el parentesco de afinidad para el acceso a estos derechos de cuidado cuando no existieran parientes por consanguinidad de la persona que lo requiere. Se trata de situaciones que, por sus características, requieren este ajuste, lo que no sucede en el caso del permiso contemplado en el artículo 37.3. b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que, por ser de corta duración y por referirse a situaciones excepcionales que implican cierta gravedad o urgencia, procede reconocer tanto a familiares consanguíneos o afines, dado que en estos casos se debe favorecer que el cuidado se extienda y se reparta entre el máximo número posible de personas. Atendiendo a los objetivos de la directiva en torno a la igualdad y a la mayor utilización de los permisos por parte de los trabajadores varones, la modificación anterior es congruente y en absoluto supone un retroceso en el nivel general de protección.



Se introduce una modificación en el artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de manera que el otro progenitor pueda anticipar en diez días el comienzo del disfrute del permiso, flexibilidad que resulta coherente con el objeto de cuidado de la madre biológica durante este periodo.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 5 y 8 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, se regula, a través de la introducción de un nuevo artículo 48 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, un permiso parental específico que se ocupa del cuidado de los hijos e hijas, o de los menores acogidos por más de un año, y hasta la edad de 8 años.

Se modifican los artículos 53.4 y 55.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para asegurar el pleno ajuste de nuestro ordenamiento jurídico al artículo 12 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, en lo relativo a la protección contra el despido derivada del disfrute de permisos de conciliación, recogiendo el disfrute de todos los derechos de conciliación, incluyendo los nuevos, entre las causas de nulidad.

Asimismo, se introduce una disposición transitoria decimoquinta en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la aplicación gradual del nuevo permiso parental retribuido previsto en el artículo 48 bis, cumpliéndose así con las exigencias de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, según la cual para el cumplimiento de la retribución económica correspondiente a las ocho semanas del permiso parental, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2 en relación con el 8.3 de la citada directiva, los Estados Miembros cuentan un plazo de transposición que termina el 2 de agosto de 2024.

En la disposición final cuarta se reforma el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de forma que para los funcionarios públicos se amplía la duración de los permisos vinculados al nacimiento, adopción, acogimiento de menores en paralelo a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, entre otros aspectos.

En la disposición final quinta se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, a fin de ampliar, incluyendo tanto al cónyuge como a las parejas de hecho registradas, los supuestos en que es posible beneficiarse del derecho a la excedencia por agrupación familiar y por cuidados familiares, en términos que no contempla la actual normativa militar.

La disposición final sexta modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, de forma acorde con las modificaciones llevadas a cabo en esta ley en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a fin de reconocer determinados supuestos de prestación por parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal o guarda con fines de adopción múltiples, haciendo extensibles dichos supuestos al ámbito de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

La disposición final séptima modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con el objetivo de igualar los derechos y deberes de la pareja de hecho con los de los cónyuges.

La disposición final octava modifica diversos aspectos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a fin de dar nueva regulación a las deducciones por maternidad, ampliando sus potenciales beneficiarias,



a fin de mejorar la protección económica a la crianza.

Por otro lado, la disposición final novena modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, cumpliendo así el mandato legal contenido en la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia. Como novedades, la ley pasa a denominarse “Ley de Protección a las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza” y, de esta manera, se extiende la protección al incluir un nuevo concepto legal de familia con especial necesidad de apoyo: se añade a las personas tutoras, acogedoras o guardadoras; en los supuestos equiparados se fija el grado de discapacidad en el 33% en lugar del vigente 65% y se incluye a las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora con dos hijas o hijos. Se regulan también los supuestos de custodia compartida, para que puedan coexistir dos títulos en casos de ruptura de la convivencia y se pueda figurar en dos unidades familiares, y se equiparan las parejas de hecho a las matrimoniales en el trato legal, de forma que podrán figurar conjuntamente en el título.

En general, se incorpora una nueva regulación más beneficiosa de las categorías en que se clasifican las familias, con ampliación de supuestos y modificación de umbrales: así, en la categoría especial, para familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, se reduce el número de hijos/as exigidos para acceder de 5 a 4 hijas/os, y de 4 a 3 en caso de parto múltiple; se añade a las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora con dos o más hijas/hijos, así como cuando la persona progenitora tenga reconocida una discapacidad o incapacidad para trabajar o sea persona en situación de dependencia. Además, en coherencia con la reducción en el número de hijos/as, las unidades familiares con tres hijos pueden acceder a la categoría especial por la vía de ingresos reducidos (no superación en cómputo anual del 150 por ciento del IPREM vigente, como nuevo umbral, incluidas las pagas extraordinarias). En la categoría general se englobarían el resto de unidades familiares.

La disposición final décima modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a fin de posibilitar la extensión de las bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se prevean para familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza a otros casos equiparados.

En la disposición final décimo primera se modifica la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 para que, con cargo al Fondo que actualmente garantiza el pago de alimentos a los hijos e hijas menores de edad, se incluyan también otros supuestos protegidos, como son los hijos mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia.

En el mismo sentido, la disposición final décimo segunda modifica el Real Decreto 1618/2007 sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, con el objetivo de adecuar el texto a lo establecido en la presente ley, además de flexibilizar las condiciones de acceso para potenciar el carácter protector del Fondo.

En la disposición final décimo tercera se establecen los plazos específicos para determinadas modificaciones normativas. Así, se prevé que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley el Gobierno deberá remitir a las Cortes un proyecto de ley para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 y 55 de esta Ley en relación con las parejas de hecho y las situaciones familiares en que existan hijos o hijas de uniones anteriores respectivamente

Por último, las disposiciones finales décimo cuarta, décimo quinta, décimo sexta y décimo séptima contienen los títulos competenciales, la referencia a la incorporación de derecho de la Unión Europea, el desarrollo reglamentario y las previsiones sobre la entrada en vigor de la norma.

En la elaboración de esta ley se han observado los principios de necesidad, eficacia,



proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la norma proyectada es fundamental para poder articular un marco general y coherente de protección social y económica de las familias en su diversidad, que supere la actual fragmentación y falta de equidad del conjunto de normas estatales en la materia. Así, existen diferentes normativas sectoriales con distinto alcance en cuanto a su ámbito subjetivo, con diferencias en cuanto a la propia definición de unidad familiar o de tipología de familias, o los requisitos que deben acreditar para acceder a determinados beneficios (a efectos de becas educativas, ayudas a la vivienda, rentas mínimas, bonos sociales de energía, prestaciones por desempleo, etc.).

Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, nuestro país presenta una clara insuficiencia en el nivel de protección social y económica a las familias, especialmente a las que tienen personas menores a cargo, que tiene su reflejo en la gran diferencia existente entre el gasto destinado a familia e infancia en términos de PIB en España (1,3% en 2019) frente a la media de la Unión Europea (2,3% en 2019). El hecho de que buena parte de la protección económica a las familias se vehicule a través de beneficios fiscales en el IRPF (mínimos familiares exentos, tributación conjunta, deducciones por razones familiares) limita su ámbito subjetivo a las unidades familiares que tributan, es decir, a las que cuentan con renta suficiente para poder tributar y aplicarse esos beneficios, dejando fuera a las familias con rentas inferiores al mínimo establecido, que precisamente son las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad desde el punto de vista económico.

Hay que señalar, nuevamente, que de manera reiterada la Comisión Europea ha venido instando a España a mejorar el apoyo a las familias en sus Recomendaciones-País cada año y que, sobre esa base, se está desarrollando un proyecto de apoyo a las reformas estructurales financiado por la Comisión Europea para promover un nuevo marco nacional de apoyo y protección a las familias en España, que ha contado con la asistencia técnica de la OCDE. Así, en el informe final, se recoge un diagnóstico sobre la protección familiar en nuestro país, una serie de buenas prácticas comparadas de otros países de la UE y la OCDE y, finalmente, un conjunto de recomendaciones para orientar la reforma, que en buena medida han contribuido a fundamentar y apoyar el enfoque y contenido de este proyecto normativo.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esta ley contiene la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos señalados, no existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Cumple igualmente esta ley con los principios de seguridad jurídica y eficiencia, ya que es coherente con el ordenamiento jurídico nacional e internacional, cumpliendo con los mandatos que señalan la obligación de los Estados de proteger a las familias, a través de un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, facilitando la actuación y toma de decisiones de los poderes públicos intervinientes en la materia, regulando de forma unificada y conjunta la protección a las familias.

Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido en las diferentes fases de su tramitación, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por otra parte, el contenido ha sido objeto de consulta pública, además en lo que afecta a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, se sometió a audiencia e información pública. Durante el trámite de audiencia, se ha consultado a las organizaciones sindicales y patronales más representativas. Durante la tramitación de la norma se ha recabado, asimismo, el dictamen del Consejo Económico y Social. De igual manera, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y con el comunitario habiéndose recabado el correspondiente dictamen del Consejo de



Estado.

TÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto y finalidad.*

1. La presente ley tiene por objeto el pleno reconocimiento de la diversidad de modelos familiares que coexisten en nuestra sociedad, así como el establecimiento del marco y las bases para una política integral de apoyo a las familias, orientada a la mejora del bienestar y la calidad de vida de sus integrantes.
2. Es objeto de esta ley asimismo la protección social y económica de las familias y de sus integrantes, de conformidad con lo establecido en la Constitución española y en los tratados internacionales de los que España sea parte.
3. La finalidad de esta ley es la definición de los principios generales de acción a favor de las familias como institución social esencial y establecer nuevas medidas de apoyo y promoción a las familias.

Artículo 2. *Ámbito de aplicación.*

1. La presente ley se aplicará a las familias domiciliadas en territorio español, cualquiera que sea la nacionalidad del integrante de la misma, sin perjuicio de lo regulado en la legislación de extranjería y las competencias que en las materias abordadas en esta ley ostenten las comunidades autónomas.

Las personas de nacionalidad española residentes fuera del territorio nacional tendrán derecho a la protección prevista en esta Ley, en el marco establecido en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

2. Son integrantes de las familias a las que se refiere el apartado anterior:
 - a) Las personas unidas entre sí por matrimonio o que constituyan una unidad familiar, sus ascendientes, las que de ellas dependan por filiación, tutela, curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica análogas, guarda o acogimiento, siempre que formen un núcleo estable de convivencia.

Se considerará que dos personas adultas han constituido una unidad familiar cuando se trate de una pareja de hecho que conste registrada como tal en un registro público.



- b) Las personas individuales junto con sus ascendientes, las que de ellas dependan por filiación, curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad análogas, tutela, guarda o acogimiento, siempre que formen un núcleo estable de convivencia.
3. Las prestaciones y medidas derivadas de la presente ley podrán aplicarse también a las unidades familiares de pareja conviviente no registrada con descendencia común, las personas que vivan solas, o en núcleos de convivencia no familiares cuando así se prevea expresamente.

Artículo 3. Definiciones.

1. A efectos de esta ley, se considera como familia la derivada del matrimonio o de la convivencia estable en pareja, o de la filiación y las familias formadas por un progenitor solo con sus descendientes.
2. A estos efectos, se entenderá como:
 - a) «Núcleo estable de convivencia»: aquel en el que dos o más personas comparten de forma habitual y continuada el mismo domicilio, en los términos establecidos en el artículo 2.2. No obstante, se entenderá que la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas justificadas, incluyendo los supuestos de fuerza mayor o privación de libertad, no rompe la convivencia, salvo en los casos de privación de libertad por condena por delito de violencia de género o doméstica con pena de alejamiento.
 - b) «Personas unidas en matrimonio»: dos personas unidas por vínculo conyugal por cualquiera de las formas matrimoniales reconocidas legalmente.
 - c) «Parejas de hecho»: las resultantes de la unión estable de dos personas unidas por una relación afectiva análoga a la conyugal, en los términos y con los requisitos legalmente establecidos, cuando conste registrada como tal en un registro de carácter público de parejas de hecho.

Artículo 4. Valores fundamentales y principios rectores.

1. Las políticas de apoyo a las familias se basarán en los siguientes valores fundamentales:
 - a) Reconocimiento del papel de las familias como agentes de solidaridad, educación, cuidado, transmisión de valores cívicos y éticos y derechos humanos fundamentales y como ámbito privilegiado para el desarrollo personal, social, emocional y afectivo, especialmente de la infancia.
 - b) Respeto a la libertad de decisión y elección sobre la constitución o no de una familia y su organización.
 - c) Respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todos los miembros de la familia, cualquiera que sea su edad y grado de autonomía.
 - d) Tratamiento igualitario que tenga en cuenta la diversidad familiar.
 - e) Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y



reconocimiento del derecho de conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito familiar, y de la corresponsabilidad empresarial y social.

- f) Reconocimiento del valor social de la maternidad y la paternidad y de la necesidad de asegurar el ejercicio de la parentalidad positiva en la crianza de niñas, niños y adolescentes y también en beneficio de sus madres, padres o personas responsables y de toda la sociedad.
 - g) Reconocimiento del interés superior de niñas, niños y adolescentes y del ejercicio de sus derechos sin sufrir discriminación por cuál sea su modelo de familia.
 - h) Protección especial a las familias con situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social y/o necesidades de apoyo, así como a sus miembros más vulnerables.
2. Los principios rectores de las políticas públicas de apoyo familiar serán los siguientes:
- a) Libertad.

Se reconocerá siempre la libertad de organización de la vida familiar y de la convivencia en el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas que integran cada familia, en el marco de la Constitución y la normativa internacional, particularmente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa vigente.

- b) Perspectiva de género, no discriminación y fomento de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades.

Se incorporará la perspectiva de género y la interseccionalidad, lo que implica reconocer en las políticas públicas las desigualdades existentes en el ámbito familiar derivadas de la discriminación por motivos de sexo, género y otros factores de discriminación

Se reconocerá y respetará la igual dignidad de hombres y mujeres, se garantizará la efectiva igualdad de sus derechos y se fomentará su corresponsabilidad en la vida familiar, particularmente en el mantenimiento, cuidado y educación de hijas e hijos, ascendientes y personas a su cargo.

Se promoverá la igualdad de trato y de oportunidades de las mujeres y los hombres en el acceso al mundo laboral y el reconocimiento y ejercicio de los derechos de conciliación y en el disfrute corresponsable de los mismos en la asunción de las tareas familiares, mediante actuaciones que faciliten la conciliación efectiva de la vida personal, familiar y laboral.

Se reconocerá a niñas, niños, adolescentes, y personas con discapacidad su dignidad y se promoverá el ejercicio pleno de los derechos y responsabilidades que tienen reconocidos en la normativa internacional y en nuestro ordenamiento jurídico.



Igualmente se reconoce la dignidad y derechos de las personas mayores en el seno de las familias, con el objetivo de evitar situaciones de maltrato, discriminación o abuso por causas de la edad, promoviendo simultáneamente el derecho de estas personas a recibir cuidados y a garantizar su plena autonomía en la toma de decisiones que les afectan.

Se garantizará el respeto y la no discriminación a la diversidad familiar, cualquiera que sea su composición y tamaño o la naturaleza de las relaciones de pareja y filiación sobre las que estuviera fundada cada unidad familiar, prestando, en virtud del principio de equidad, una mayor protección a las familias que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad o necesidad.

c) Universalidad.

Las políticas de apoyo y protección a las familias se orientan al conjunto de los diversos modelos familiares sin discriminación alguna.

d) Responsabilidad pública.

Los poderes públicos tienen la responsabilidad de dar apoyo y protección a las familias. Las Administraciones Públicas garantizarán la articulación, regulación y aplicación efectiva de lo previsto en la Constitución Española, los acuerdos internacionales refrendados por el Estado Español y la aplicación del conjunto de medidas previstas en la presente ley y las que las desarrollen.

e) Transversalidad.

Las políticas de apoyo a las familias llevadas a cabo por las Administraciones Públicas abarcarán todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida y actividad de las familias.

f) Participación.

Se promoverá la participación de las familias, directamente y a través de las organizaciones familiares y otras organizaciones representativas, en todos los ámbitos de la sociedad y de manera singular en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas que les afectan.

g) Promoción y protección de los derechos humanos.

Se reconocerá y apoyará el papel de las familias como agente de solidaridad generacional y de transmisión de los valores humanos fundamentales recogidos en la Constitución Española, a la vez que se garantizarán los derechos humanos de quienes componen las familias, y especialmente su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir que la falta de recursos impida la creación o el desarrollo de las familias.

Se facilitará a los miembros de las familias el desempeño de sus responsabilidades y el ejercicio de sus derechos.

Se articularán las medidas necesarias para prevenir situaciones de desasistencia, indefensión, abandono o desprotección y exclusión social que



puedan afectar a las familias que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

De manera singular, se promoverán recursos para prevenir, disminuir o encauzar los conflictos. Así mismo, se identificará y se dará respuesta a la violencia en las relaciones familiares, con especial atención a la violencia de género en el ámbito familiar, así como a la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Se asegurará la protección jurídica, social y económica de la familia y de sus integrantes, especialmente de los más vulnerables.

TÍTULO II

Medidas generales de apoyo a las familias

Artículo 5. *Protección de las Administraciones Públicas a las familias.*

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán la protección jurídica, social y económica de las familias a través de medidas de apoyo general que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades de todas ellas, atendiendo a sus circunstancias particulares, en especial cuando concurren situaciones de vulnerabilidad.

CAPÍTULO I

Protección a las familias no basadas en el matrimonio, información sobre relaciones familiares y de pareja y atención a conflictos familiares

Artículo 6. *Regulación y reconocimiento de relaciones familiares no basadas en el matrimonio.*

1. Las Administraciones Públicas garantizarán que las y los descendientes tengan acceso y disfrute a todos los derechos y beneficios que les correspondan con independencia del estado civil de sus progenitores.
2. Se creará un Registro Estatal de Parejas de Hecho como registro centralizado de las parejas de hecho que hayan sido previamente inscritas en los registros específicos establecidos en las comunidades autónomas y entidades locales y de aquellas otras parejas que se determine legalmente.

Artículo 7. *Derecho a la información jurídica sobre relaciones familiares y de pareja, y de manera especial sobre régimen jurídico y económico del matrimonio o pactos en caso de parejas de hecho.*

A fin de que puedan tomar una decisión informada y por tanto con mayor libertad, las Administraciones Públicas competentes deberán facilitar información y orientación, a aquellas personas que deseen formar una familia, sobre los derechos y deberes que conlleva, y de manera especial en relación con el régimen jurídico y económico del matrimonio o sobre los posibles pactos que pueden establecerse en el caso de convivencia no matrimonial como pareja de hecho, atendiendo a la normativa vigente en cada territorio, así como las responsabilidades



derivadas de la maternidad o la paternidad.

Artículo 8. *Atención a conflictos familiares en situaciones de ruptura familiar y de violencia.*

1. Las Administraciones Públicas competentes apoyarán a las familias en la gestión de sus conflictos, poniendo a su disposición medios adecuados para la solución o gestión de los mismos, lo que podrá incluir el apoyo a través de procesos voluntarios y extrajudiciales de mediación, salvo en los casos en que legalmente esté prohibida.
2. Las Administraciones Públicas pondrán todos los medios a su alcance para detectar situaciones de violencia en el ámbito familiar, y para darles la respuesta adecuada, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de violencia de género, violencia contra la infancia, contra las personas LGTBI y contra las personas con discapacidad o ensituación de dependencia.
3. Las Administraciones Públicas competentes deberán garantizar una oferta pública adecuada de puntos de encuentro familiar y otros servicios para apoyar el derecho de acceso y comunicación de las personas menores con sus progenitores, familiares y allegados, especialmente durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar.
4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán medidas adecuadas y eficaces para garantizar el pago de alimentos reconocidos e impagados a hijas e hijos, establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

En particular, las Administraciones Públicas competentes garantizarán de oficio el conocimiento, por parte de las familias destinatarias, del derecho de las personas beneficiarias de este derecho a acceder al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Respecto a las personas menores de edad se adecuarán los anticipos de forma que cubran los impagos de la pensión a la que tengan derecho, en la cuantía y duración que reglamentariamente se prevea, hasta su mayoría de edad, así como en los casos de personas mayores de edad con un grado de discapacidad no inferior al 65% o en situación de dependencia de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

CAPÍTULO II

Protección económica a las familias

Artículo 9. *Adaptación del sistema de Seguridad Social a la diversidad familiar.*

1. La acción protectora del sistema de Seguridad Social sobre las personas comprendidas en su campo de aplicación y sobre los familiares o asimilados que tengan a cargo, garantiza su extensión de manera similar a todos ellas con independencia del modelo familiar que los relacione.
2. La consideración de la existencia de responsabilidades familiares a la hora de



determinar el derecho a las prestaciones económicas, familiares y de asistencia social de la Seguridad Social, así como su cuantía se realiza de manera similar para los distintos modelos familiares en los términos previstos en la normativa vigente.

3. El sistema de Seguridad Social se configurará de manera que evite o compense discriminaciones indirectas por razón de sexo, particularmente en el ámbito del trabajo a tiempo parcial.
4. En particular, el sistema de Seguridad Social garantizará una protección social específica a las familias con personas con grandes necesidades de apoyo, considerando a estos efectos a aquellas que cuenten con la valoración prevista en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Artículo 10. *Prestación por crianza.*

1. Las familias con personas menores de 3 años de edad a cargo tienen derecho a una prestación económica de apoyo a la crianza, en los términos previstos en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 11.6 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, teniendo en cuenta que solo es posible percibir dicha prestación por una sola vía, de modo que si cualquiera de los progenitores percibe en relación con el mismo descendiente el complemento de ayuda para la infancia previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, no se tendrá derecho durante el tiempo en que este se perciba a la deducción por maternidad prevista en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
2. La finalidad de esta prestación es contribuir a garantizar un nivel de vida adecuado a todas las personas menores de 3 años de edad ayudando a sus progenitores, tutores, acogedores o guardadores a sufragar los gastos asociados a la crianza.
3. La cuantía mensual de la prestación económica de apoyo a la crianza será de 100 euros mensuales por cada persona menor de 3 años de edad.

CAPÍTULO III

Apoyo en la crianza y cuidado. Conciliación y corresponsabilidad

Artículo 11. *Principios en materia de conciliación entre la vida familiar y profesional y corresponsabilidad.*

Para hacer efectivo el derecho a la conciliación a su vida personal, familiar, profesional y laboral, de acuerdo con su normativa específica de todas las personas trabajadoras y a ejercer de forma corresponsable estos derechos, las Administraciones Públicas competentes establecerán e impulsarán la adopción de medidas específicas que permitan la conciliación y promuevan la corresponsabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado, garantizando las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres con el fin de que todas las personas puedan atender sus responsabilidades familiares, progresar profesionalmente y desarrollarse en todos los ámbitos vitales.



Artículo 12. Marco estatal de apoyo a los primeros 1.000 días.

1. El Gobierno, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas competentes, desarrollará un marco estatal de acompañamiento y apoyo a “los primeros 1.000 días” para garantizar un buen comienzo en la vida a todas las niñas y niños de nuestro país, que incluya de forma integrada y coherente medidas, entre otros, en los siguientes ámbitos:
 - a) Garantía de un entorno saludable, seguro y accesible para desarrollar la crianza, incluyendo, entre otros aspectos, la promoción de entornos físicos y emocionales saludables y libres de contaminación y el desarrollo de herramientas de medición y evaluación de los factores de riesgo y protección en el desarrollo de niñas y niños en este periodo.
 - b) Garantía de acceso a un sistema sanitario, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente, y educativo universal, de calidad e inclusivo, que incluya, entre otros aspectos, y conforme a lo contemplado en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, la evaluación de riesgos desde el embarazo, el asesoramiento genético, la planificación familiar, la detección y atención temprana de dificultades del desarrollo, o la mejora de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios de cuidado y educación infantil.
 - c) Acceso a una alimentación saludable y sostenible, con especial atención a la nutrición de la madre antes y durante el embarazo, la promoción de la lactancia materna, y la prevención de la malnutrición infantil en la primera infancia.
 - d) Acceso a recursos, información y apoyo a las familias para desarrollar de la forma más positiva posible las habilidades y competencias parentales, en clave de accesibilidad universal, incluyendo entre otras medidas, la orientación y seguimiento socio sanitario individualizado, incluso a domicilio, actividades grupales de formación o información, asistencia on-line o la atención a la salud mental materna y paterna.
 - e) Garantía del equilibrio de la vida profesional y privada para las personas adultas responsables de la crianza, garantizando la adaptación del trabajo a la situación familiar y plena adecuación de los periodos de permisos para el cuidado y la crianza, tanto en el ámbito público como en el privado.
2. Las Administraciones Públicas competentes deberán prestar apoyo específico a las familias que viven en circunstancias de vulnerabilidad para combatir el impacto de la pobreza o la exclusión o de otras circunstancias como la discapacidad o la dependencia, en el desarrollo y bienestar de niñas y niños, incluyendo apoyo económico y asistencia socio sanitaria y psicoeducativa específica.

Artículo 13. Empleo y responsabilidades familiares.

1. Las Administraciones Públicas promoverán las actuaciones necesarias para que las personas, en particular las mujeres, no se vean obligadas a abandonar sus trabajos, ni sus carreras profesionales por razones de cuidado. Así mismo, se promoverán actuaciones de sensibilización y fomento del reparto corresponsable de estos derechos.
2. Las personas progenitoras que desarrollen actividades profesionales por cuenta



propia serán igualmente beneficiarias de medidas dirigidas a facilitar la compatibilidad de su actividad profesional con la atención a las responsabilidades familiares, especialmente en caso de nacimiento y cuidado de menores.

Artículo 14. Servicios de apoyo al cuidado y atención de familiares.

1. Las Administraciones Públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, suficientes y asequibles con equidad y calidad y que garantice su carácter educativo, con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de la gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro. Todos los centros habrán de estar autorizados por la Administración educativa correspondiente y supervisados por ella.
2. Se desarrollará, en colaboración con las comunidades autónomas, un marco estatal de referencia para la ordenación de otros servicios de atención y cuidado a la primera infancia que garantice la calidad de los mismos, una oferta pública adecuada y el cumplimiento de los derechos de niñas y niños y sus familias.
3. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco de la colaboración interadministrativa, promoverán la extensión de la oferta de servicios de atención socioeducativa, actividades de ocio, tiempo libre y culturales de niñas, niños y adolescentes en periodos no lectivos, especialmente para quienes se encuentren en las situaciones familiares previstas en los capítulos I, II y II del título III.
4. Las familias en las que convivan personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia tienen derecho a medidas de apoyo para su cuidado y atención. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas oportunas para desarrollar este derecho, en el marco del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y del sistema público de servicios sociales, entre otros.
5. Las personas que figuran como cuidadoras de personas dependientes beneficiarias de una Prestación Económica por Cuidados en el Entorno Familiar, tendrán derecho a servicios de seguimiento, apoyo y respiro que deberán incorporarse al Programa Individual de Atención (PIA) correspondiente a dichas prestaciones en el marco de del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Artículo 15. Racionalización de horarios.

Se promoverá por parte de las Administraciones Públicas medidas para fomentar la aplicación de horarios racionales y flexibles, que puedan contribuir a favorecer la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar, tanto en el sector público como en el privado.

Artículo 16. Medidas de sensibilización y fomento de la igualdad y la corresponsabilidad familiar.



1. Las Administraciones Públicas competentes llevarán a cabo actuaciones destinadas a mejorar la sensibilización y la difusión de buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad laboral, familiar y personal, promoviendo la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres y la atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes y de las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
2. De manera singular, se potenciará el distintivo “Igualdad en la empresa” y se podrán establecer otros incentivos a empresas y otras entidades privadas que desarrollen prácticas acreditadas favorables a la atención de las responsabilidades familiares de las personas trabajadoras y se sometan periódicamente a una evaluación sobre las mismas.

CAPÍTULO IV

Servicios sociales de apoyo a las familias

Artículo 17. *Desarrollo de servicios y programas sociales de apoyo a las familias.*

1. A fin de asegurar la cobertura de las necesidades sociales y la calidad de los servicios y programas sociales dirigidos a las familias, especialmente las que cuentan con hijas o hijos o personas menores o con discapacidad o en situación de dependencia a su cargo y las que se encuentren en situación de vulnerabilidad, las Administraciones Públicas competentes, en el marco de la colaboración interadministrativa, impulsarán:
 - a) la elaboración conjunta de un catálogo de referencia de prestaciones y servicios a las familias.
 - b) la definición de criterios de calidad en el acceso, ordenación y evaluación de estos servicios, incluyendo los perfiles profesionales de atención a las familias.
 - c) el reconocimiento del derecho a los servicios de intervención familiar que aborden de forma preventiva e integral las situaciones que pueden generar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno de origen, mediante programas de preservación y reintegración familiar.
 - d) el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de un plan de apoyo a la parentalidad positiva con el objetivo de proporcionar a las familias un entorno seguro para la crianza y el ejercicio de las responsabilidades parentales, mediante el apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, así como para apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, a fin de que puedan desarrollar adecuadamente su rol parental o tutelar y fomentar el buen trato, atendiendo al interés superior de niñas, niños y adolescentes y que permita su pleno desarrollo en todos los órdenes.



Este plan deberá atender a la perspectiva de género facilitando, entre otros aspectos, el desarrollo de capacidades y habilidades emocionales, sociales y afectivas, la necesaria corresponsabilidad en la distribución de las responsabilidades de cuidados, e incorporando la prevención de la violencia de género. Así mismo se atenderá a la perspectiva de diversidad familiar y sexual.

- e) la creación de centros integrados de apoyo familiar, que sirvan de referente para el desarrollo de programas y servicios de apoyo al ejercicio de las responsabilidades parentales.
2. La Administración General del Estado colaborará con las administraciones autonómicas y locales para el mantenimiento y desarrollo de servicios sociales y programas de apoyo a las familias, tanto en la atención primaria como especializada, a fin de promover de forma prioritaria proyectos de intervención social y prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, que podrán incluir:
- a) Proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación, vivienda y de empleo, así como el acompañamiento y trabajo social con las familias.
 - b) Proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo, incluyendo servicios de apoyo que complementen a los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de niñas y niños a una atención y desarrollo adecuados.
 - c) Servicios de intervención y apoyo familiar, considerados como el conjunto de actuaciones profesionales dirigidas a facilitar la convivencia y la integración social de las familias abordando situaciones de crisis, riesgo o vulnerabilidad familiar, facilitándose habilidades básicas, de mediación y de conducta a los miembros de la familia o unidades de convivencia que tengan dificultades para atender adecuadamente las necesidades básicas de autonomía, manutención, protección, cuidado, afecto y seguridad de sus integrantes, y que deberán tener carácter inclusivo.

Entre estos servicios se incluirán:

1º. Orientación e intervención socio familiar, entendida como actuaciones profesionales de ayuda psicoeducativa y social para el tratamiento y resolución de las necesidades sociales y familiares de las personas, las familias, los grupos de población, así como la comunidad de pertenencia. Incluye actuaciones dirigidas a la promoción del ejercicio de la crianza positiva, y otras medidas de orientación y apoyo específicas ante situaciones de conflicto familiar, dificultad psicosocial, riesgo de exclusión social y dinámicas de maltrato en el seno de la familia.

2º. Mediación familiar y puntos de encuentro familiar, destinada a la gestión de conflictos entre los miembros de una familia en los procesos de separación o divorcio y otros supuestos de



conflictividad familiar donde esté indicada, y no se identifique violencia de género, y en las que las relaciones de las personas menores de edad con algún progenitor o miembro de su familia se encuentran interrumpidas o son de difícil desarrollo.

3º. Atención socioeducativa a las personas menores, considerada como un conjunto de atenciones fuera del horario escolar como complemento de la escolarización obligatoria con el objeto de atender a las dificultades educativas específicas de las personas menores de edad, mejorando su calidad de vida y su integración socioeducativa. Incluye entre otras actividades, talleres educativos y culturales y otros espacios de ocio.

- d) Servicios de apoyo profesional y de respiro para personas que asumen la función cuidadora de personas en situación de dependencia en el seno de las familias que, además, detecten y mitiguen los riesgos de claudicación por sobrecarga.
3. Se prestará especial atención al desarrollo de programas de apoyo a familias en cuyo seno se produce violencia con especial atención a situaciones de violencia de género en el ámbito familiar, violencia contra la infancia, que incluyan actuaciones de prevención y detección, servicios de atención y tratamiento a las víctimas, así como atención a la violencia filioparental.

CAPÍTULO V **Salud y bienestar**

Artículo 18. *Actuaciones para la protección a la salud de las familias.*

1. Las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria, de conformidad con lo previsto en la legislación sanitaria vigente, orientarán sus actuaciones a la garantía del acceso universal a la salud, que incluye, además de la asistencia sanitaria, la intervención en los determinantes de la salud, entendiendo por tales los factores sociales, económicos, laborales, culturales, alimenticios, biológicos y ambientales que influyen en la salud de las personas y la promoción de la equidad para garantizar las mismas oportunidades y resultados de salud a todas las familias, reduciendo las desigualdades que puedan existir en este ámbito.
2. A los efectos del apartado anterior, y de acuerdo con lo previsto en la legislación sanitaria vigente, las Administraciones Públicas competentes en materia de salud pública promoverán acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de las familias, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva.
3. De manera singular, conforme a lo previsto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se promoverán estilos de vida saludables en las familias en materia de alimentación, higiene, actividad física, bienestar emocional, uso racional de medicamentos, tabaquismo y exposición al humo de segunda mano, prevención del consumo de riesgo de alcohol o prevención de lesiones no intencionales, y específicamente en materia de trastornos alimenticios. Asimismo, se adoptarán medidas específicas para afrontar el



impacto de las adicciones, con o sin sustancia, en el seno familiar.

4. Del mismo modo, se deberá garantizar la orientación y planificación familiar y el apoyo en materia de salud sexual y reproductiva.
5. Las administraciones competentes deberán garantizar el derecho de madres, padres o, en su caso, personas responsables de la tutela o acogimiento de personas menores, a los servicios de preparación y acompañamiento bio-psicosocial al nacimiento y a la crianza, especialmente en los primeros años de vida.
6. Las Administraciones Públicas competentes, y conforme a los procedimientos establecidos en el ámbito sanitario, avanzarán hacia la armonización en el conjunto del Estado del programa de vacunas y prestaciones socio-sanitarias infantiles.

Artículo 19. Derecho a la atención temprana.

Las Administraciones Públicas garantizarán el derecho subjetivo de las personas menores de edad y sus familias a tener acceso universal a una atención al desarrollo infantil temprana, gratuita y de calidad, y no limitada a la primera infancia, y que garantice la continuidad asistencial durante toda la vida.

Artículo 20. Salud mental en el ámbito familiar.

1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán medidas y programas para promover la salud mental y apoyar a las familias con integrantes con problemas de salud mental, igualmente prevendrán el desarrollo de los mismos en contextos que favorezcan el desencadenante de estos problemas, como la vulnerabilidad, la violencia, las adicciones u otros factores económicos, sociales o sanitarios, considerados desde una perspectiva de género y con especial atención a las personas mayores, la infancia y el sinhogarismo.
2. Los poderes públicos deberán facilitar a las personas con problemas de salud mental, sus familias y su entorno afectivo la toma de decisiones en relación con los mismos y en particular:
 - a) Garantizarán a las personas con problemas de salud mental su derecho de elegir conforme a los derechos, voluntad y preferencias de la propia persona tal y como se estipula en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, establecerán medidas de apoyo a las familias para que dichos derechos estén garantizados.
 - b) Gozarán del derecho a recibir atención a la salud mental, sin perjuicio de otro tipo de atención terapéutica, para proteger su salud y bienestar general y siempre según lo previsto en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
 - c) Deberán recibir medidas de apoyo y los servicios necesarios por parte de la administración competente para paliar y prevenir las dificultades derivadas de la aparición de un problema de salud mental en el seno de la familia y que favorezcan la convivencia familiar y/o restauren vínculos sanos.



CAPÍTULO VI Vivienda

Artículo 21. *Planes y programas en materia de vivienda.*

1. Los planes y programas en materia de vivienda deberán incluir medidas destinadas a facilitar el acceso y atención a las necesidades habitacionales de las familias que presenten especiales dificultades o necesidades singulares, entre ellas:
 - a) las familias formadas por una persona menor de 29 años y sus descendientes o por dos personas menores de 29 años unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, y sus descendientes, así como las personas que estén bajo su tutela, guarda o acogimiento o curatela representativa o medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad análogas.
 - b) las familias que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los capítulos II, III, IV y VI del título III.

2. Entre las medidas deberán contemplarse:
 - a) El incremento del límite de ingresos computables para el acceso a viviendas protegidas.
 - b) La adjudicación de viviendas protegidas, estableciendo una superior puntuación en los baremos aplicables o, en su caso, un cupo reservado de viviendas en las promociones públicas.
 - c) El acceso preferente a préstamos cualificados concedidos por entidades de crédito públicas o privadas.
 - d) El apoyo a la adecuación de la vivienda a necesidades y realidades específicas o al acceso a viviendas adecuadas a dichas necesidades.

Artículo 22. *Urbanismo con perspectiva familiar y de género.*

De conformidad con el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, las políticas públicas relativas a la regulación y ordenación del suelo garantizarán la cohesión social y la igualdad de trato y de oportunidades entre todas las personas, sin perjuicio de lo establecido por las administraciones competentes. A tales efectos, tendrán en cuenta la perspectiva familiar y de género, las situaciones de dependencia y vulnerabilidad y los requerimientos que garanticen espacios y entornos habitables para la infancia, la juventud, las familias y las personas mayores, mediante los correspondientes informes de valoración de impacto convivencial y de género.

CAPÍTULO VII Educación, Cultura y Ocio Familiar

Artículo 23. *Acceso a recursos y medidas de apoyo en materia educativa.*



1. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán medidas para garantizar que todas las personas responsables de educar a niñas, niños y adolescentes tengan acceso a recursos materiales, sociales, psicológicos y culturales adecuados y deberán orientar su acción a eliminar las barreras que impidan el acceso a estos recursos.
2. En particular, deberán tender a la universalización de los apoyos necesarios para que las personas menores de edad de familias vulnerables puedan ejercer plenamente y en condiciones de equidad su derecho a la educación obligatoria, incluyendo programas de becas, libros de texto, material escolar, comedor, transporte escolar o actividades extraescolares.
3. Igualmente, en las etapas y ciclos educativos no obligatorios, especialmente en la educación infantil, las Administraciones Públicas competentes deberán invertir los recursos suficientes para evitar las desigualdades de acceso, armonizando criterios de admisión, precios públicos, bonificaciones, becas de comedor y exenciones de cuota que puedan garantizar la gratuidad, al menos a aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
4. En el caso de las personas menores de edad con discapacidad u otras situaciones de vulnerabilidad, las administraciones competentes asegurarán la atención temprana y facilitarán los apoyos educativos que garanticen el derecho a la educación, favoreciendo y facilitando la escolarización, el apoyo y el refuerzo educativo, en los casos en los que sea necesario, así como el apoyo y el asesoramiento a sus familias.
5. En todos los casos de menores en riesgo de abandono escolar temprano, las Administraciones Públicas competentes proporcionarán atención educativa específica, facilitando orientación personalizada y refuerzo educativo, así como atención psicológica, con el objetivo de reintegrarlos a la dinámica educativa, teniendo siempre en cuenta las opciones formativas más ajustadas a las características, intereses y expectativas de las personas menores de edad.

Artículo 24. *La diversidad familiar como principio del sistema educativo.*

1. Las Administraciones Públicas competentes deben garantizar el respeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativo, que debe tener su reflejo en los libros de texto y demás materiales de uso educativo, las actividades socioeducativas y de ocio complementarias que se organicen en los centros educativos y la capacitación y formación del profesorado y demás profesionales del ámbito educativo.
2. De manera singular, los formularios y cuestionarios para el alumnado no podrán contener epígrafes no inclusivos.
3. Los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo, a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25. *Actividades culturales, de ocio, tiempo libre y deportivas.*

1. Se concederá un trato preferente al público familiar, mediante descuentos,



- prioridad u otras fórmulas, en el acceso a museos, teatros, bienes, servicios y centros culturales de titularidad pública dependientes de las Administraciones Públicas, que deberán asimismo desarrollar actividades específicamente dirigidas al público familiar.
2. Las Administraciones Públicas competentes promocionarán el turismo familiar, facilitando así el derecho al ocio, esparcimiento y diversión, especialmente de las familias con niñas y niños a cargo, mediante, entre otras, las siguientes medidas:
 - a) El reconocimiento de distintivos a destinos que disponen de una oferta certificada de establecimientos de alojamiento, de restauración, de ocio y tiempo libre dirigidas a las familias y a niñas y niños.
 - b) El impulso de programas de vacaciones para familias en situación de dificultad socioeconómica o con necesidades específicas de conciliación, que tengan carácter inclusivo.
 - c) La aplicación de descuentos y promociones para familias en transporte público hacia destinos vacacionales, así como en la red de Paradores Nacionales.
 - d) El impulso de programas de respiro familiar para familias con personas discapacidad y/o en situación de dependencia, con especial atención a aquellas con grandes necesidades de apoyo.
 3. Las Administraciones Públicas competentes promoverán la práctica de actividades deportivas, de tiempo libre, culturales y de ocio en las familias.

CAPÍTULO VIII

Familias y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Artículo 26. *Uso de las TIC en el ámbito familiar.*

Las Administraciones Públicas competentes, en colaboración con entidades sociales y privadas, fomentarán el uso seguro, adecuado y positivo de las TIC en el ámbito familiar, incluyendo acciones formativas dirigidas a mejorar las competencias digitales de progenitores y personas adultas responsables de menores, reducir las brechas de género, y fomentar la utilización de filtros parentales que contribuyan a regular el uso que niñas, niños y adolescentes hacen de las TIC en el hogar a fin de preservar sus derechos y su seguridad.

Artículo 27. *Acceso a internet.*

1. Las Administraciones Públicas competentes promoverán el acceso a internet a todos los hogares familiares con personas menores, o mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia, a fin de combatir las brechas digitales, sociales y cognitivas que genera la falta de acceso.
2. Asimismo, facilitarán el acceso a equipamiento tecnológico a las familias con personas menores de edad en dificultad socioeconómica, especialmente con fines educativos y laborales. Igualmente, promoverán la dotación de recursos tecnológicos cuando sean necesarios para apoyar la comunicación, la interacción y la convivencia de algún/a integrante de la unidad familiar.



Medidas de apoyo a situaciones familiares específicas

Artículo 28. *Obligación de apoyo de las Administraciones Públicas a las familias con necesidades específicas.*

1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de apoyo a familias que presenten necesidades específicas, que complementen o amplíen las que se hubieran previsto con carácter general para todas las familias.
2. Las Administraciones Públicas velarán por que se garantice que las medidas contempladas en la presente ley sean de aplicación a todo tipo de familias, independientemente de sus dificultades y/o necesidades de apoyo, garantizando la remoción de los obstáculos que impiden que puedan acceder en igualdad de condiciones con el resto de familias. Para ello, articularán las adaptaciones necesarias.
3. Asimismo, y en el caso de las situaciones familiares a que se refiere el capítulo III del presente título deben adoptarse las medidas necesarias para que estas no sufran perjuicios en el disfrute efectivo y real de los permisos vinculados con el derecho a la conciliación entre la vida familiar y laboral, garantizándose un adecuado nivel de protección.

CAPÍTULO I

Situación familiar de vulnerabilidad con personas menores de edad a cargo

Artículo 29. *Ámbito de aplicación.*

Las medidas establecidas en este capítulo se aplicarán a aquellas unidades familiares con personas menores de edad a cargo, en las que concurre algún factor económico y/o social que la coloca en una situación de fragilidad, precariedad, indefensión o riesgo de exclusión.

Se considerará en todo caso que la unidad familiar se encuentra en situación de vulnerabilidad económica:

- 1º. Cuando concurre la situación de vulnerabilidad económica definida en el artículo 11 la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
- 2º. En el caso de que algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 75% o incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, ya sea de la persona o su cuidador, el límite de renta se verá incrementado en un 22 por ciento.

Se considera en situación de vulnerabilidad social la unidad familiar en que concurren, además, circunstancias sociales adversas derivadas de una situación sobrevenida, negativa no programada, que genera fragilidad, precariedad, indefensión o incertidumbre, de acuerdo con la valoración realizada por los servicios sociales según criterios técnicos.

Artículo 30. *Vivienda y suministros básicos.*

1. Las Administraciones Públicas competentes promoverán la garantía del derecho



a la vivienda con una protección especial a familias vulnerables y con menores, ante situaciones de desahucio, así como su acceso a los parques de vivienda social. En todo caso, promoverán la garantía de acceso a una vivienda digna, asequible y universalmente accesible.

2. Asimismo, se garantizará la protección frente a la pobreza energética y el acceso a suministros básicos, mediante el establecimiento de unos servicios mínimos garantizados para todas las personas de agua, luz, gas, comunicaciones e internet de banda ancha.

Artículo 31. *Medidas en el ámbito educativo.*

1. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán que, para los criterios de acceso a escuelas infantiles y centros educativos se tenga especialmente en cuenta la condición de familia en situación de vulnerabilidad, facilitando asimismo la elección del centro que mejor facilite la conciliación, ya sea por cercanía del domicilio, ya sea por proximidad del centro de trabajo.
2. Los miembros de las familias en situación de vulnerabilidad tendrán trato preferente, de acuerdo con lo que se determine por las autoridades competentes en la normativa aplicable, en la concesión de becas y ayudas para la adquisición de libros y demás material didáctico, comedor y transporte.
3. Las Administraciones Públicas competentes establecerán para los miembros de familias en situación de vulnerabilidad un régimen de exenciones y bonificaciones de las tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y examen, por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, y cualesquiera otras tasas o precios públicos establecidos en el citado ámbito.
4. Las familias en situación de vulnerabilidad tendrán bonificaciones de las tasas o precios públicos y prioridad en el acceso a las actividades deportivas y de educación no formal organizadas y financiadas por las Administraciones Públicas o que tengan lugar en centros educativos públicos o concertados (actividades extraescolares, campamentos de verano, talleres, actividades deportivas, ludotecas, conservatorios, etc.), para facilitar su acceso a los mismos en las mismas condiciones que el resto de unidades familiares.

CAPÍTULO II

Familias numerosas y supuestos equiparados

Artículo 32. *Derecho a protección específica de las familias numerosas y otros supuestos equiparados.*

1. Las Administraciones Públicas establecerán las medidas necesarias para garantizar los derechos de las familias numerosas y otras unidades familiares equiparadas, a fin de que puedan afrontar los costes y dificultades asociados a la atención, cuidado y educación de un número superior de hijas e hijos, o que atienda a la concurrencia de circunstancias específicas como la existencia de una única persona ascendiente o la discapacidad de descendientes o ascendientes en unidades familiares con al menos dos hijas o hijos, de forma que sus miembros no queden en situación de desventaja para el acceso a los bienes económicos, culturales y sociales.



2. A efectos de los beneficios otorgados a las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, se tendrá en cuenta las categorías en que éstas se encuentren clasificadas de acuerdo con la normativa estatal aplicable y las rentas de las unidades familiares en relación con el número de miembros que las integran.

CAPÍTULO III

Situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora

Artículo 33. *Ámbito de aplicación.*

Las medidas establecidas en este capítulo se aplicarán a las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora, ya sea hombre o mujer, y uno o más descendientes, sobre los que tenga la guardia y custodia o la tutela exclusiva, en caso de menores de edad, o descendientes mayores sobre los que tenga curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad análogas o que conviva con uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o tutela o guarda con fines de adopción cuando se trata de la única persona acogedora o guardadora.

Artículo 34. *Derecho a la protección específica de las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora.*

1. Las Administraciones Públicas establecerán las medidas necesarias para garantizar los derechos de las situaciones familiares previstas en el artículo anterior, a fin de que puedan afrontar las especiales dificultades y costes asociados a la atención, cuidado y educación de hijas e hijos en solitario, de forma que sus integrantes no queden en situación de desventaja para el acceso a los bienes económicos, culturales y sociales.
2. Dichas situaciones familiares serán objeto de una protección social y económica que atienda a sus necesidades específicas. En todo caso, las que cuenten con dos o más hijas o hijos serán beneficiarias de al menos la acción protectora prevista para las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza en los términos establecidos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza.
3. Las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencias establecerán garantías para que no se produzcan discriminaciones en el acceso y disfrute de derechos, beneficios y servicios por razón de la existencia de una sola persona progenitora.
4. Con carácter general, cuando se utilicen criterios económicos para la concesión o mantenimiento de beneficios se deberá introducir la corrección oportuna para las familias a que se refiere el presente capítulo de forma que, al menos, las sitúen en los mismos umbrales de renta que las biparentales con el mismo número de hijas/os.
5. Las Administraciones Públicas competentes reforzarán la protección económica a estas familias cuando concurren situaciones de vulnerabilidad y contarán con los apoyos que aseguren el bienestar y la convivencia de estas familias.
6. Las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias



garantizarán el acceso prioritario de las familias en que exista una sola mujer progenitora a todas aquellas políticas públicas, medidas y recursos específicos que busquen garantizar la corresponsabilidad en ámbito del cuidado de las personas menores de edad a su cargo.

7. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán especial atención y apoyo a las familias en que exista una sola mujer progenitora víctimas de violencia de género.

Artículo 35. *Supuestos protegidos.*

1. A efectos de la protección social y económica asociada al título de situación familiar en que exista una sola persona progenitora previsto en el artículo 37, se considerarán como tales las que figuran así definidas en el artículo 33 y su hija/o o hijas/os, y, en su caso, nietas o nietos, que cumplan las condiciones y requisitos del apartado 5.
2. Asimismo, se considerarán unidades familiares en dicha situación aquellas en las que, aunque haya dos personas progenitoras, se produzca alguna de las siguientes situaciones:
 - a) Cuando la guarda y custodia sea exclusiva de una persona progenitora y sin derecho a percibir anualidades por alimentos.
 - b) Cuando la progenitora haya sido víctima de violencia de género por parte del otro progenitor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, y ejerza la patria potestad o custodia o curatela representativa o medidas de apoyo similares sobre sus hijas/os.
 - c) En caso de ausencia temporal forzada de una de las dos personas progenitoras que le impida ejercer las responsabilidades parentales (ingreso en prisión, ingreso en centros sanitarios u otras razones análogas) por un periodo de tiempo previsible igual o superior a un año, en cuyo caso formarán la unidad familiar la otra persona progenitora junto con las hijas/os que dependan de ella.
3. A estos efectos, se considera persona progenitora a la madre o al padre. Se equiparará a esta condición a la persona que tuviera a su cargo la tutela, guarda o acogimiento de personas menores de edad.
4. En relación con lo previsto en el apartado 1 de este artículo, tendrán la misma consideración que las hijas o los hijos las personas que se encuentren en situaciones de tutela, acogimiento familiar permanente, o guarda con fines de adopción, legalmente constituidas. Las personas menores de edad que habiendo estado en alguna de estas situaciones alcancen la mayoría de edad y permanezcan en la unidad familiar, conservarán la consideración de hijas o hijos en los términos establecidos en el apartado siguiente.
5. Para que se reconozca o mantenga la condición prevista en el apartado 1, las hijas o los hijos deben cumplir las siguientes condiciones:
 - a) Ser personas en estado civil de soltería y menores de 21 años o ser personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o



estar incapacitadas para trabajar, cualquiera que fuera su edad.

Tal límite de edad se amplía hasta los 26 años en las familias en que exista una sola mujer progenitora víctimas de violencia de género y, con carácter general, si los hijos o hijas cursan enseñanzas universitarias, formación profesional, u otros estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo.

- b) Convivir con la persona progenitora, si bien se entenderá en todo caso que la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares no rompe la convivencia entre persona progenitoray las hijas o hijos.
- c) Dependier económicamente de la persona progenitora o responsable. Se considera que hay dependencia económica cuando:

1º. La hija o el hijo o la persona sometida a tutela, acogimiento familiar permanente o temporal, o guarda con fines de adopción obtenga unos ingresos no superiores, en cómputo anual, al 100% del IPREM vigente, incluidas las pagas extraordinarias, o esté incapacitado para el trabajo, y la cuantía de su pensión, si la percibiese, no exceda en cómputo anual de dicho importe, salvo que percibiese pensión no contributiva por invalidez, en cuyo caso no operará tal límite.

2º. La hija o el hijo o la persona sometida a tutela, acogimiento familiar permanente o temporal, o guarda con fines de adopción, contribuyan al sostenimiento de la familia, y la persona progenitora esté incapacitada para trabajar, jubilada o sea mayor de 65 años de edad, siempre que los ingresos de ésta no sean superiores, en cómputo anual, al 100% del IPREM, incluidas las pagas extraordinarias.

- 6. Nadie podrá formar parte, a los efectos previstos en este capítulo, de dos unidades familiares al mismo tiempo.
- 7. La condición prevista en el apartado 1 se perderá, a los efectos de esta ley, en el momento en que la persona responsable de la unidad familiar contraiga matrimonio con otra persona, constituya una pareja de hecho o bien dejen de cumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en la ley.

Artículo 36. *Categorías de las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora.*

Las situaciones familiares previstas en el artículo 33 se clasifican en dos categorías:

a) Especial:

1º. Las que cuenten con dos o más hijas o hijos.

2º. Las que cuentan con una hija o hijo, cuando sus ingresos anuales, divididos por el número de integrantes, no superen en cómputo anual el 150% del IPREM vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

3º. Las que cuentan con una hija o hijo que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o una incapacidad para trabajar o sea persona en situación de dependencia.

4º. Las familias en que la persona progenitora tenga reconocido un grado de



discapacidad igual o superior al 33 por ciento o una incapacidad para trabajar o sea persona en situación de dependencia.

b) General: las que no se encuentren en las situaciones descritas en el apartado anterior.

Artículo 37. Reconocimiento de la condición de situación familiar en que existe una sola persona progenitora.

1. Las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora se reconocerán con un título que les permita la acreditación oficial como tales ante cualquier administración o entidad pública o privada, que será expedido, previa solicitud y comprobación de las condiciones que dan derecho al mismo, por las administraciones autonómicas donde tengan su domicilio, con validez en todo el territorio nacional, sin necesidad de ningún trámite adicional. Dicho título se denominará título de familia monoparental.
2. Corresponde a la comunidad autónoma del domicilio de la persona solicitante la competencia para el reconocimiento de esta condición, así como para la expedición y renovación del título que acredita dicha condición, que incluirá la certificación en formato digital con idéntica validez que el formato físico.

Asimismo, las comunidades autónomas podrán expedir documentos de uso individual para cada miembro de la unidad familiar que esté en posesión del correspondiente título, que acredite su pertenencia a la misma y la categoría en la que la familia está clasificada, a fin de acceder a los beneficios asociados a tal condición.

3. El contenido mínimo e indispensable para asegurar la eficacia del título será el siguiente:
 - a) Una referencia expresa a que el mismo está expedido al amparo de la presente ley.
 - b) El número de orden del título.
 - c) La categoría correspondiente.
 - d) Los datos personales de la persona progenitora, los de sus hijas o hijos, incluyendo su número de Documento Nacional de Identidad y, en el caso de hijas o hijos, su fecha de nacimiento.
 - e) La fecha de expedición del título y, en su caso, la de la última renovación.
 - f) La fecha límite de duración de los efectos del título.
4. Con carácter general, la vigencia del título estará determinada por el cumplimiento de los 21 años de edad del menor de las hijas o hijos, si no estudiara.

No obstante, el título tendrá una vigencia especial en los siguientes supuestos:

- a) Hasta el cumplimiento de los 26 años de edad por el menor de las hijas/os que estudiara.
- b) En caso de estudios, entre los 21 y los 26 años de edad, la fecha de finalización previsible de los mismos, sin perjuicio de lo establecido en el apartado seis.



- c) En caso de que el título o la categoría dependan del grado de discapacidad, de la incapacidad para trabajar o de la situación de dependencia, seguirá vigente mientras se mantenga tal situación.
 - d) En el caso de título concedido por violencia de género, la vigencia del título será de cinco años.
 - e) En caso de situación de privación de libertad o ingreso en centros sanitarios, el título tendrá vigencia anual, renovable por periodos iguales mientras dure la circunstancia de la que trae causa.
 - f) En el supuesto de acogimiento familiar temporal, el título tendrá una vigencia de la misma duración que el acogimiento.
5. Una vez obtenido el reconocimiento y expedido el correspondiente título, este surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la finalización de su vigencia. Transcurrido el plazo de vigencia, si no se solicita la correspondiente renovación, el título dejará de surtir efectos.
6. El título correspondiente deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título y ello suponga cambio de categoría o pérdida de la condición de la situación familiar de persona progenitora sola, así como cuando alguno de los hijos o hijas deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de la familia, aunque ello no suponga modificación de la categoría en que está clasificada o la pérdida de tal condición.
7. Las personas que formen parte de unidades familiares a las que se haya reconocido la condición prevista en el presente artículo están obligadas a comunicar, en el plazo máximo de 3 meses, cualquier variación que se produzca en la unidad familiar, siempre que deba ser tenida en cuenta a efectos de modificación o extinción del derecho al título.
8. El incumplimiento de las obligaciones a que estuvieran sujetas las personas que formen parte de unidades familiares que tengan reconocida esta condición de acuerdo con esta ley, podrán constituir infracciones administrativas cuando se produzcan las conductas y hechos tipificados como tales si concurriera dolo o culpa.
- En este sentido, se considera responsable a cualquiera de los miembros que integren la unidad familiar que realice alguna de las conductas o de los hechos constitutivos de infracción administrativa.
9. A los efectos previstos en el apartado anterior, será de aplicación supletoria el régimen de obligaciones, infracciones y sanciones establecidos en el título III de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.
- Asimismo, será de aplicación supletoria a lo previsto en este artículo lo establecido en el título I de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre. en aquellos aspectos que no estén expresamente regulados y que pudieran serle de aplicación.
10. El título previsto en el presente artículo es compatible con el título de familia numerosa y supuestos equiparados expedido al amparo de la ley estatal vigente, en los casos de situaciones familiares en que exista una sola persona



progenitora con dos o más hijas o hijos, si bien los beneficios de la misma clase o naturaleza derivados de dichos títulos no serán acumulativos, salvo que en la normativa correspondiente se establezca lo contrario.

Artículo 38. Acción protectora en el área socio laboral.

1. Los límites de rentas que se establezcan, en su caso, para el acceso a prestaciones económicas vinculadas al nacimiento, cuidado y crianza de hijas o hijos se incrementarán en los casos en que la persona beneficiaria se encuentre en alguna de las situaciones familiares previstas en este capítulo.
2. Las personas trabajadoras autónomas que formen parte de estas familias tienen derecho a igual cuidado y protección de la persona menor de edad y el mantenimiento de los ingresos familiares, para paliar la reducción del ritmo de trabajo durante el período de puerperio o tras el acogimiento o adopción, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
3. Específicamente, en relación con el ingreso mínimo vital, se garantiza que dichas familias pueden acceder al mismo, evitando posibles discriminaciones, equiparando el tratamiento con el de las situaciones familiares en que existan dos personas progenitoras, incluyendo la posibilidad de convivencia con otros familiares sin perder la aplicación del complemento, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre.
4. Las comunidades autónomas arbitrarán las medidas oportunas para garantizar que los niños y niñas en alguna de las situaciones familiares previstas en el apartado 1 dispongan de acceso gratuito en centros de educación infantil durante, al menos, 16 semanas dentro de los veinticuatro meses a contar desde su nacimiento, desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien desde la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
5. Estas familias tendrán una especial consideración en las medidas que se adopten en casos de emergencia sanitaria en atención a sus específicas responsabilidades de cuidado.

Artículo 39. Acción protectora en el área de vivienda.

1. La normativa reguladora de las distintas ayudas en materia de vivienda protegida establecerá criterios de acceso a la misma que no penalicen a las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora que conviven con otras familias o personas, para lo cual se preverá en estos casos un incremento del límite de ingresos computables.
2. El concepto de unidad de convivencia a efectos del acceso a las ayudas en los planes y programas estatales de vivienda deberá regularse de forma que se considere a estas familias como beneficiarias directas, con independencia de que en el momento de la solicitud compartan el uso de su vivienda habitual con otras personas, a fin de facilitar su acceso a una vivienda propia.
3. Para la adjudicación de viviendas protegidas, las Administraciones Públicas competentes considerarán a dichas familias como sector preferente a efectos de la puntuación a asignar en los baremos aplicables, o, en su caso, establecerán un cupo reservado de viviendas en las promociones públicas.



4. Las Administraciones Públicas competentes considerarán a las mismas para:

- a) El acceso a viviendas de alquiler social.
- b) El acceso preferente a préstamos cualificados concedidos por entidades de crédito públicas o privadas concertadas para la promoción y adquisición de viviendas sujetas al régimen de actuaciones protegibles.
- c) El establecimiento de condiciones especiales a la subsidiación de préstamos cualificados, otorgamiento de subvenciones y demás ayudas económicas directas de carácter especial previstas para la promoción y adquisición de viviendas sujetas al régimen de actuaciones protegibles.
- d) Facilitar el cambio a otra vivienda protegida de mayor superficie cuando se produzca una ampliación del número de miembros de la familia.
- e) Facilitar la adaptación de la actual vivienda o el cambio a otra vivienda protegida que cumpla las condiciones de accesibilidad adecuadas a la discapacidad sobrevenida que afecte a un miembro de la familia cuando la actual vivienda no las reúna.

Artículo 40. *Otras medidas de protección en materia de empleo y conciliación.*

1. Las estrategias activas de empleo que desarrollen las administraciones competentes promoverán las habilidades y competencias de las personas progenitoras en las situaciones familiares a que se refiere este capítulo para la mejora de su empleabilidad, incluyendo programas formativos específicos de competencias básicas y de reciclaje profesional, programas personalizados de inserción socio laboral o acceso preferente a planes de formación, en particular para las madres.

Estos programas han de tener en consideración la especial dificultad para conciliar de estas familias, garantizando que puedan participar en dichos programas, con horarios compatibles con horarios escolares, servicios de cuidado en paralelo para atender a las personas menores de edad, entre otras medidas.

2. En el régimen de ayudas que se prevean para el emprendimiento se tendrán en cuenta de forma singular a las personas progenitoras sustentadoras de dichas familias.
3. Las Administraciones Públicas protegerán de manera singular estas situaciones familiares cuando cuenten con integrantes con discapacidad y/o personas en situación de dependencia, para que puedan acceder y ejercer su derecho al trabajo.

Artículo 41. *Acción protectora en el ámbito educativo.*

1. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán que, para los criterios de acceso a escuelas infantiles y centros educativos, se tenga especialmente en cuenta la condición prevista en el artículo 37, facilitando asimismo la elección del centro que mejor facilite la conciliación, ya sea por cercanía del domicilio, ya sea por proximidad del centro de trabajo.
2. Los integrantes de situaciones familiares en que exista una sola persona



progenitora tendrán trato preferente, de acuerdo con lo que se determine por las autoridades competentes y en la normativa aplicable, en la concesión de becas y ayudas para la adquisición de libros y demás material didáctico, comedor y transporte.

3. Las Administraciones Públicas competentes establecerán para los miembros de estas familias un régimen de exenciones y bonificaciones de las tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y examen, por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, y cualesquiera otras tasas o precios públicos establecidos en el citado ámbito.
4. Se otorgará un subsidio a dichas familias cuando tengan en su seno a hijos o hijas con discapacidad o incapacidad para trabajar o en situación de dependencia y que presenten necesidades educativas especiales asociadas a ellas.

Artículo 42. *Exenciones, bonificaciones en tasas y precios.*

1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán para los miembros de familias a que se refiere el artículo 33 un régimen de exenciones y bonificaciones de las tasas o precios públicos que se apliquen a:
 - a) Los transportes públicos, urbanos e interurbanos.
 - b) El acceso a los bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio.
2. La Administración General del Estado adoptará las medidas necesarias para que las entidades, empresas y establecimientos que presten servicios o realicen actividades de interés general sujetas a obligaciones de servicio público concedan un trato favorable a estas familias que tengan reconocida tal condición en las contraprestaciones que deban satisfacer, especialmente en materia de suministros.

CAPÍTULO IV

Situaciones familiares en que existan personas con discapacidad y/o en situación de dependencia

Artículo 43. *Ejercicio efectivo del derecho a formar familia.*

1. A fin de dar efectividad al derecho de las personas con discapacidad a formar una familia, las Administraciones Públicas pondrán en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y oportunidades de estas personas en el acceso a los apoyos, los bienes y servicios públicos.
2. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la efectividad del derecho de todas las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en edad de contraer matrimonio o de formar una pareja de hecho a fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges o integrantes de la pareja de hecho. Asimismo, respetarán el derecho de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, así como a que se les ofrezcan los medios necesarios que les



permitan ejercer esos derechos.

3. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niñas y niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior de niñas y niños; y prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de sus hijas o hijos.
4. Las Administraciones Públicas competentes asegurarán que las niñas y los niños y aquellas otras personas que, sin ser menores, estén bajo la responsabilidad de los adultos, bien por razón de su discapacidad, con medidas de apoyo, bien por estar en situación de dependencia tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de estas niñas y niños, y adultos necesitados de medidas de apoyo familiar las Administraciones Públicas competentes asegurarán que no sean separados de sus madres o padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes acuerden mediante decisión motivada, de conformidad con la ley de Enjuiciamiento Civil y demás normativa aplicable en materia de protección de menores y discapacidad., que esa separación es necesaria en el interés superior de la persona menor de edad siempre que concurran en la valoración otras circunstancias, además de la discapacidad.

Las Administraciones Públicas competentes harán todo lo posible, cuando la familia no pueda cuidar de una niña o un niño con discapacidad y/o en situación de dependencia, por proporcionar medidas alternativas de protección dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible o adecuado, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

Artículo 44. Medidas de apoyo específico.

1. Las situaciones familiares en que existan personas con discapacidad o en situación de dependencia tienen derecho a acceder a servicios y medidas de apoyo social y/o, en su caso económico, específicos para paliar la sobrecarga y el sobrecoste que supone la atención a sus necesidades.
2. En el área laboral y de protección social:
 - a) Las prestaciones de la Seguridad Social vinculadas a la discapacidad de los miembros de la familia deberán tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad y las de sus familias.
 - b) En particular, se garantizará que las personas integradas en el régimen especial de cotización de cuidadoras y cuidadores familiares del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que hayan interrumpido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, por la que hubiera estado incluida en el sistema de la Seguridad Social, a fin de dedicarse a la atención de la persona en situación de dependencia, mantengan la base de cotización del último ejercicio en dicha actividad, siempre que resulte superior al tope mínimo del Régimen General.



3. En el área socio sanitaria, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán medidas para la atención específica a realidades relacionadas con la familia de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, para lo cual:
 - a) Se consolidarán los sistemas de coordinación entre las Administraciones Públicas y entre éstas y las entidades del Tercer Sector de acción social para proporcionar servicios de calidad referidos al apoyo, acompañamiento y asistencia de las familias de personas con discapacidad o en situación de dependencia.
 - b) Se potenciará el desarrollo de servicios de atención a las personas en situación de dependencia y sus familias (centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, estancias temporales, asistencia personal, etc.), que permitan a la vez una adecuada atención a las necesidades de las personas en situación de dependencia y una mejor conciliación de la vida familiar y laboral.
 - c) Se garantizará que el catálogo de referencia de servicios incluya servicios y prestaciones destinados a apoyar a las personas cuidadoras dentro de las familias que atienden a personas mayores, dependientes o con discapacidad.
 - d) Se proporcionarán medidas de respiro, apoyo psicológico y atención integral destinadas a las familias cuidadoras de personas con grandes necesidades de apoyo.
 - e) Se avanzará en el objetivo de la reducción del número de horas máximas de dedicación al cuidado de personas en situación de dependencia con el objeto de evitar el deterioro de la salud de las personas cuidadoras.
 - f) Los servicios de información, orientación en materia de sexualidad, planificación familiar y consejo genético tendrán en cuenta las realidades de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y serán universalmente accesibles.
 - g) Se garantizará el acceso de la infancia sorda y sus familias a aprender y utilizar la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral en los distintos ámbitos, mediante profesionales adecuados según precise la familia y las personas menores sordas que convivan con ella. Se garantizará la concesión de puntuación específica para las familias con personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en las solicitudes de acceso para becas de comedor o libros.
4. En materia de vivienda, las Administraciones Públicas competentes:
 - a) Asegurarán el disfrute de una vivienda digna, adecuada y universalmente accesible a las personas con discapacidad.
 - b) Garantizarán la adaptación de la actual vivienda o, en caso de disponer de una vivienda protegida, el cambio a otra vivienda protegida, que cumpla las condiciones de accesibilidad adecuadas a la discapacidad sobrevenida que afecte a un miembro de la familia cuando la actual no las reúna.

CAPÍTULO V

Situaciones familiares en que existan personas pertenecientes a los colectivos LGTBI



Artículo 45. *Ámbito de aplicación.*

Las medidas previstas en este capítulo se aplicarán a aquellas situaciones familiares en que, al menos, una persona perteneciente a alguno de los colectivos LGTBI (personas lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales o pertenecientes a otras minorías sexuales o de género) o dos personas del mismo sexo o género, unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, y, en su caso, sus descendientes, así como las personas que estén bajo su tutela, guarda o acogimiento o curatela representativa o medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad análogas.

Artículo 46. *Ejercicio efectivo del derecho a formar una familia.*

A fin de dar efectividad al derecho de las personas LGTBI a formar una familia, las Administraciones Públicas pondrán en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a los bienes y servicios públicos a los modelos de convivencia familiar en los que existan personas LGTBI.

Artículo 47. *Garantía de igualdad.*

Las Administraciones Públicas impulsarán medidas para garantizar la igualdad jurídica, social y efectiva de las personas que integran las familias a que se refiere el artículo 45, con independencia del sexo y orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales de las personas progenitoras, así como sus parientes y familiares. Especialmente garantizarán el acceso y disfrute de todo tipo de prestaciones públicas, beneficios sociales y servicios en igualdad de condiciones y no discriminación.

Artículo 48. *Prevención de la discriminación.*

1. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas para prevenir la discriminación de estas familias en los diversos contextos (educativo, sanitario, social, justicia, medios de comunicación, etc.).
2. De manera singular, las Administraciones Públicas competentes facilitarán la elección de centro educativo en condiciones de igualdad por parte de dichas familias, y promoverán la visibilidad de la diversidad familiar en el currículum educativo, libros de textos y resto de material didáctico, superándose así la falta de referentes.
3. Se adaptarán los protocolos, formularios, censos y demás documentos administrativos y jurídicos para integrar la heterogeneidad familiar, y en particular las familias previstas en el artículo 33, para solicitar prestaciones sociales y evitar la discriminación laboral de la pareja en materia de conciliación y corresponsabilidad, específicamente en lo que respecta a excedencias o permisos, reorganización del tiempo de trabajo y disposición de servicios de atención y cuidado infantil.

CAPÍTULO VI

Situaciones familiares en las que se producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples

Artículo 49. *Ámbito de aplicación.*

Las medidas previstas en este capítulo se aplicarán a las situaciones familiares en las que se



producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples.

Artículo 50. *Reconocimiento como colectivo de especial protección.*

Las familias en las que se producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples serán consideradas como colectivo de especial protección por sus especiales dificultades derivadas del hecho de tener varias hijas o hijos a la vez. Igual consideración tendrá aquellas en las que se produzcan adopciones o acogimientos múltiples, en este último caso por más de un año.

Artículo 51. *Mejora de su protección social y económica.*

1. En materia de educación, las Administraciones Públicas competentes promoverán la adopción de medidas específicas para este colectivo, como son:
 - a) La concesión de puntuación por hermana/o en el centro educativo a niñas o niños de familias múltiples que accedan a la vez al mismo.
 - b) La evaluación individualizada de la conveniencia de separar a hermanas/os múltiples en la escuela.
 - c) La concesión de puntuación específica para las familias múltiples en las solicitudes de acceso para becas de comedor o libros.
 - d) La aplicación de tarifas especiales para familias múltiples en actividades educativas, culturales y deportivas.
2. En materia de transporte, las Administraciones Públicas competentes promoverán la adopción de medidas específicas que faciliten la movilidad de las familias múltiples, incluyendo beneficios para el uso de zonas de estacionamiento regulado, especialmente las situadas en las cercanías de centros educativos o sanitarios.

CAPÍTULO VII

Situaciones familiares en las que se produzcan adopciones o acogimientos

Artículo 52. *Derecho a asesoramiento y apoyo.*

1. Las Administraciones Públicas deben facilitar a las familias que adoptan asesoramiento y apoyo continuado, tanto con carácter previo a la adopción, como durante los años que le siguen en relación con la adaptación a la nueva realidad familiar y para el abordaje de problemas que puedan surgir a lo largo del ciclo vital familiar.
2. De igual forma, las familias de acogida, que suponen un apoyo fundamental para la infancia en situación vulnerable, requieren de este proceso de asesoramiento y atención.
3. Se facilitará el acceso a evaluaciones y tratamientos terapéuticos especializados,



tales como aquellos de carácter psicológico, psicopedagógico o logopédico, en personas menores y adolescentes que han sufrido adversidad temprana y lo precisen.

Artículo 53. *Medidas en los ámbitos educativo, sanitario y social.*

1. Se garantizará la protección de datos e información personal en las evaluaciones psicopedagógicas y sanitarias y la no vulneración del derecho de intimidad en relación con las personas menores de edad en adopción o acogimiento.
2. En los supuestos de adopción internacional se aplicarán protocolos similares a los cribados neonatales y seguimientos posteriores de obligado cumplimiento.
3. Se garantizará la unificación de historias clínicas en los casos de las personas menores de edad que han tenido cambio de apellidos como consecuencia de su filiación adoptiva.
4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán protocolos de transición desde el acogimiento familiar o residencial a la adopción, a fin de que en el paso de una medida a otra se garantice el derecho a la intimidad de la persona menor de edad y de su familia, y se dote de recursos, estrategias, espacios y acompañamiento necesario tanto para la persona menor de edad, como para la familia acogedora o adoptiva.
5. Se promoverá y se apoyará a las familias que acojan y adopten niñas y niños con discapacidad, para asegurar el derecho de esas niñas y niños a contar con una familia.

CAPÍTULO VIII

Situaciones familiares con hijas o hijos de uniones anteriores

Artículo 54. *Ámbito de aplicación.*

Las medidas previstas en este capítulo se aplicarán a las situaciones familiares en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores.

Artículo 55. *Protección social y económica de las situaciones familiares en las que existan hijas o hijos de uniones anteriores.*

1. Las situaciones familiares previstas en el artículo anterior gozarán de protección social y económica específica en los términos previstos en los apartados siguientes, atendiendo a la naturaleza de las relaciones establecidas entre las personas menores de edad y los cónyuges o parejas de hecho de sus progenitores con los que conviven y que ejercen sobre ellos un rol parental, considerando siempre el interés superior de las personas menores de edad.
2. El alcance de las relaciones entre las personas menores de edad y los cónyuges o parejas de hecho de sus progenitores, derivadas de la convivencia, se definirán y regularán atendiendo a cada situación familiar de forma individualizada. En todo caso se escuchará y tendrá en cuenta la opinión de las personas menores de edad afectadas.



En caso de ruptura de la convivencia, se considerará la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes puedan seguir relacionándose con la pareja y/o los hijos e hijas de la pareja de su progenitor, salvo que ello fuera contrario a su interés superior.

3. Las Administraciones Públicas competentes preverán que en los baremos de admisión a centros educativos se tenga en cuenta, a efectos de inscribir a una persona menor de edad perteneciente a estas situaciones familiares, el hecho de que sus hermanas/os con los que sólo compartan una persona progenitora, o aquellos con los que convivan, ya asistan a los mismos.

Artículo 56. *Apoyos psicosociales y sensibilización.*

1. Las Administraciones Públicas competentes promoverán la atención específica a las necesidades de apoyo psicosocial de estas familias a través de servicios de orientación, asistencia o mediación ante dificultades de convivencia y conflictos derivados del desdoblamiento del hogar y de la duplicidad de figuras parentales, a fin de que se favorezca el ejercicio positivo de la parentalidad.
2. Se promoverá una mayor sensibilización y conocimiento de este modelo familiar, incluyendo la formación de profesionales de la intervención y atención familiar y la elaboración de estadísticas oficiales que reflejen las características de este modelo familiar.

CAPÍTULO IX

Situación de las familias residentes en el medio rural

Artículo 57. *Garantía de acceso a recursos y servicios.*

Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas oportunas para reducir las brechas de género y garantizar a las familias residentes en el medio rural su derecho a acceder a los recursos y servicios de atención a sus necesidades, especialmente en los ámbitos de educación, con especial atención al acceso a la educación superior de formación profesional y universitaria, sanidad, transportes, vivienda, comunicaciones y servicios digitales, servicios sociales, atención a la dependencia, prevención de la violencia, conciliación, cultura, ocio y deporte. Asimismo, se promoverán medidas para fomentar la corresponsabilidad en el reparto de los cuidados y otras tareas familiares, y el acceso de las mujeres al mercado laboral, con políticas activas específicas para fomentar su capacitación y empleabilidad.

Artículo 58. *Apoyo al asentamiento y fijación de población rural.*

Las Administraciones Públicas competentes desarrollarán actuaciones orientadas a apoyar el asentamiento y fijación de población rural mediante incentivos fiscales, administrativos, sociales y otras medidas que atiendan a las necesidades singulares de las familias que residan en el medio rural y que favorezcan el establecimiento de nuevas familias en estos territorios.

Asimismo, se desarrollarán las medidas y los apoyos pertinentes para que las familias con integrantes con discapacidad y/o en situación de dependencia puedan permanecer en el entorno rural.

Artículo 59. *Perspectiva de género de políticas familiares dirigidas a la población rural.*

Las políticas dirigidas a la población rural deberán tener en cuenta de forma específica la perspectiva de género atendiendo a la alta proporción de mujeres en las actividades de cuidado



o su participación, muchas veces como cónyuge o pareja de su titular, en las explotaciones agrarias familiares, garantizando la accesibilidad y disponibilidad de los servicios relacionados con la autonomía económica y los cuidados; asimismo, dichas políticas abordarán las problemáticas asociadas a la aceptación o integración de la diversidad familiar y la incidencia de la violencia de género en el mundo rural.

CAPÍTULO X

Situaciones familiares en las que alguno de sus miembros procede de otro Estado o territorio, se encuentran en el exterior o de emigrantes retornados

Artículo 60. Apoyo a la integración social y reagrupación familiar.

1. Las situaciones familiares en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional tienen derecho a medidas de apoyo para atender las dificultades personales y relacionales que se deriven de la separación.
2. Las políticas migratorias deberán tener en cuenta de forma específica la dimensión y los lazos familiares de las personas migrantes a fin de permitirles elegir si mantener la relación familiar transnacional o reunirse a través de la reagrupación familiar, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes que se ven separados de sus respectivas familias cuando están inmersos en un proceso migratorio, de acuerdo con lo previsto en la legislación de extranjería.
3. En las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros procede de otro Estado o territorio y no tenga regularizada su situación administrativa:
 - a) Se asegurará un NIE para niños y niñas cuyos progenitores se encuentren en situación irregular, que se podrá expedir en los lugares establecidos al efecto en la normativa aplicable.
 - b) Se facilitará el trámite matrimonial o la inscripción en un registro de parejas de hecho de los progenitores independientemente de su situación administrativa, con plena garantía del cumplimiento de los requisitos legalmente previstos, especialmente en relación con la capacidad y el consentimiento.
4. Las medidas de apoyo a la inclusión social de familias procedentes de otro Estado o territorio o integradas por personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes que promuevan las Administraciones Públicas incluirán el acceso a la educación, la sanidad de acuerdo a lo previsto en la normativa sanitaria vigente, los servicios sociales y la atención a los posibles problemas de discriminación, identidad y diferencias en el estilo educativo hacia sus hijos e hijas que puedan producirse, así como la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
5. Las situaciones familiares de emigrantes retornados, entendiendo por tales aquéllas en las que alguno de sus miembros ostenta la ciudadanía española durante el primer año tras su retorno a España después de residir, al menos, un año en el exterior, contarán con un apoyo activo en las medidas de integración social, educativa, económica y laboral, así como acompañamiento psicológico en los casos en que sea necesario. A tal efecto, su integración social formará parte de los planes de retorno que aprueben o implementen las Administraciones Públicas.
6. La Administración española velará por la protección de las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros ostenta la ciudadanía española en el exterior, tratando de garantizar los derechos reconocidos en esta ley, especialmente en



aquellos países cuyos sistemas jurídicos no los reconozcan.

CAPÍTULO XI

Otros colectivos con necesidades singulares de apoyo

Artículo 61. *Relaciones familiares de la población penitenciaria.*

1. Las Administraciones Públicas competentes garantizarán, el mantenimiento de las relaciones familiares de la población penitenciaria con sus parejas, hijas/os y otros familiares y allegados conforme a la legislación penitenciaria;

Artículo 62. *Relaciones familiares de población institucionalizada.*

En el caso de que algún integrante de la familia viva en una situación de institucionalización se promoverá cuando sea adecuado el mantenimiento de los lazos filiales, asegurando especialmente que madres con discapacidad o problemas de salud mental puedan disponer de los apoyos para la crianza.

TÍTULO IV

Coordinación, cooperación y participación social en las políticas familiares

Artículo 63. *Impulso y desarrollo de las políticas familiares.*

1. Las Administraciones Públicas integrarán la perspectiva familiar en sus decisiones y actuaciones sectoriales, teniendo en cuenta el impacto de las políticas sociales y económicas en las familias, con el objetivo último de mejorar sus condiciones de vida y garantizar la igualdad de trato de la ciudadanía con independencia de su modelo familiar.
2. En atención al carácter pluridimensional de la realidad familiar, las medidas de protección, atención y apoyo reguladas en la presente ley deberán promoverse desde los diversos ámbitos materiales de actuación institucional. Por ello, resulta imprescindible el establecimiento efectivo de cauces de colaboración y coordinación eficientes entre todos los organismos públicos competentes, a través de la organización institucional prevista en la presente ley.
3. Las Administraciones Públicas procurarán la cooperación de las entidades sociales, en especial del Consejo Estatal de Familias y del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia, que intervienen en este ámbito de actuación en el diseño y aplicación de las medidas de protección, promoción y apoyo a las familias reguladas en esta ley.

Artículo 64. *Coordinación y cooperación en las políticas familiares.*

1. Las Administraciones Públicas cooperarán en el cumplimiento de lo establecido en esta ley y en la aplicación de los valores, principios y objetivos definidos en la misma en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. La Comisión Interministerial de Familias será el órgano colegiado de coordinación de las actuaciones en materia de políticas familiares que se impulsen en el ámbito de la Administración General del Estado, con competencias de propuesta y



seguimiento de las mismas.

Sus funciones, composición, y régimen de funcionamiento serán establecidos reglamentariamente.

3. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será el órgano colegiado de cooperación, coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla en materia de políticas familiares.
4. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) será la entidad preferente para articular la cooperación y colaboración de las corporaciones locales en el cumplimiento de los valores, principios y objetivos definidos en esta ley.

Artículo 65. Consejo Estatal de Familias.

1. El Consejo Estatal de Familias será el órgano colegiado permanente de participación social y consulta de la Administración General del Estado, para la planificación y desarrollo de las políticas que le afecten.
2. El Consejo Estatal de Familias quedará adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en cuanto departamento ministerial competente en materia de familia y su diversidad.
3. Sus funciones, composición y régimen de funcionamiento serán establecidos reglamentariamente.

Artículo 66. Consejo Estatal de Participación de la infancia y de la Adolescencia.

1. El Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, órgano permanente y estable de consulta, representación y participación de las niñas, niños y adolescentes, desempeña las funciones que le atribuye la Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, por la que se crea el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, y, entre ellas y de modo destacado, la de proponer a los órganos de la Administración General del Estado y otros organismos de ámbito nacional iniciativas, propuestas y recomendaciones para promover los derechos de la infancia y la adolescencia en el marco de actuación definido en esta ley.
2. El Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia se encuentra adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en cuanto departamento ministerial competente en materia de infancia y adolescencia.

Artículo 67. Observatorio Estatal de Familias.

1. El Observatorio Estatal de Familias será el órgano de carácter asesor y de apoyo para el análisis, la investigación, el estudio, el seguimiento, la evaluación y la propuesta técnica de actuaciones en materia de familias.
2. El Observatorio Estatal de Familias quedará adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en cuanto departamento ministerial competente en materia de familia y su diversidad.
3. Sus funciones, composición y régimen de funcionamiento serán establecidos



reglamentariamente.

Artículo 68. *Difusión, promoción y sensibilización social.*

1. Las Administraciones Públicas llevarán a cabo actuaciones orientadas a la difusión, promoción y sensibilización social sobre la diversidad familiar y al apoyo a las familias en el marco de los valores y principios definidos en esta ley, incluyendo, entre otras, la realización de acciones informativas, estadísticas, campañas y publicaciones.
2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias y a los efectos de fomentar la iniciativa social en materia de apoyo a las familias y su diversidad, promoverán la colaboración financiera y técnica con entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas y actividades en el marco de los valores y principios definidos en esta ley.

Disposición adicional primera. *Disponibilidad presupuestaria.*

El desarrollo de las medidas, derechos, garantías, servicios y apoyos que se contemplan en la presente ley queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias de las Administraciones Públicas competentes.

Disposición adicional segunda. *Referencias a familias numerosas.*

Las referencias que el ordenamiento jurídico haga a las familias numerosas se entenderán realizadas a las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, cuya denominación modifica esta ley.

Disposición adicional tercera. *Orfandad.*

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, las administraciones competentes llevarán a cabo los análisis oportunos de cara a extender hasta los 26 años la edad máxima en la fecha del fallecimiento de la persona causante para ser beneficiario de la pensión o prestación de orfandad previstas en el artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Disposición adicional cuarta. *Instrumento de valoración diagnóstica.*

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 elaborará un instrumento de valoración diagnóstica, que servirá de referencia para unificar criterios de diagnóstico en el ámbito de los Servicios Sociales y que pueda utilizarse para valorar la vulnerabilidad social de las familias. Este instrumento de valoración diagnóstica será debatido en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Disposición transitoria primera. *Adaptaciones de jornada.*

Las adaptaciones de jornada que se estuviesen aplicando a la entrada en vigor de esta norma mantendrán su vigencia, siendo de aplicación a las mismas lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 34.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores incluida en la disposición final tercera de esta ley y, en particular, lo relativo al regreso a la situación anterior.

Disposición transitoria segunda. *Permisos.*

Los permisos previstos en los artículos 37.4, 37.6 y 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de los que se estuviese disfrutando a la entrada en vigor de esta ley lo harán de acuerdo con la normativa que le fuese de aplicación al comienzo de su disfrute.



El ejercicio de esos derechos no limitará, en ningún caso, el del permiso parental regulado en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores según la redacción dada en la disposición final tercera de la presente ley, que podrá disfrutarse en su integridad cuando finalice el de aquellos.

Disposición transitoria tercera. *Vigencia de títulos de familia numerosa.*

1. Los títulos de familia numerosa expedidos al amparo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, antes de la entrada en vigor de las modificaciones realizadas en la misma por la disposición final novena de esta ley, mantendrán su validez hasta la fecha máxima prevista para su renovación o, en su caso, extinción, salvo en el caso de que como consecuencia de dichas modificaciones la familia deba quedar clasificada en una categoría diferente a la que ostenta a la entrada en vigor de las mismas. En caso de renovación, se sustituirá dicho título por otro con la denominación de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, en la categoría correspondiente.
2. Quedarán automáticamente clasificadas como familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial, con arreglo a la nueva redacción dada en la disposición final novena de esta ley al artículo 4.1 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, las familias que, a la entrada en vigor de la misma, tienen reconocido título de familia numerosa de categoría general que cuenten con cuatro hijos o hijas o tres de los cuales al menos dos procedan de uno o más partos, adopciones o acogimientos o guarda con fines de adopción múltiples, así como las situaciones familiares previstas en el artículo 33 con dos o más hijos.

En los casos en que una familia numerosa de categoría general según la normativa hasta ahora vigente cuente con tres hijos o hijas y tuviera derecho, de acuerdo con el criterio de ingresos establecido en el artículo 4.1 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, en su nueva redacción, a pasar a ser clasificada como familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial, deberá instar esta reclasificación previa acreditación de la no superación de dicho límite de ingresos anuales.

Disposición final primera. *Adaptación de los artículos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.*

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 12 en los siguientes términos:

“1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1, no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, la pareja de hecho, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.”

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 59 que queda redactado en los términos siguientes:

“2. El importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Cuando exista cónyuge o pareja de hecho a cargo del pensionista, el importe de tales complementos no podrá rebasar la cuantía que correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de establecido en el artículo 364.1.a) para las unidades económicas en las que concurren dos beneficiarios con derecho a pensión.



Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, el límite del importe de los complementos por mínimos a que se refiere el párrafo anterior solo quedará referido al de la pensión de viudedad que genera el incremento de la pensión de orfandad.

Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que les atiende no resultarán afectados por los límites establecidos en este apartado.”

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 64 en los siguientes términos:

“1. La Seguridad Social, con cargo a los fondos que a tal efecto se determinen, podrá ~~deberá~~ para las personas incluidas en su campo de aplicación y a los familiares o asimilados que de ellas dependan los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos, previa demostración, salvo en casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos indispensables para hacer frente a tales estados o situaciones.

En las mismas condiciones, en los casos de separación judicial o divorcio o de anulación o revocación del registro de la pareja de hecho, tendrán derecho a las prestaciones de asistencia social el cónyuge o ex cónyuge, la pareja o ex pareja de hecho, y los descendientes que hubieran sido beneficiarios por razón de matrimonio o filiación.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones de la prestación de asistencia social al cónyuge o a la pareja de hecho y a los hijos, en los casos de separación de hecho o de anulación o revocación del registro de la pareja de hecho de las personas incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.”

Cuatro. Se modifican los epígrafes a) y h) del artículo 71.1 que quedan redactados en los términos siguientes:

a) Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública o, en su caso, de las comunidades autónomas o de las diputaciones forales, se facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, conforme al artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normativa foral equivalente, a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas y, a petición de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta, patrimonio y demás ingresos o situaciones de los titulares de prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, incluyendo la condición de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como de los beneficiarios, cónyuges, parejas de hecho y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida.

Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social que gestionen ayudas o subvenciones públicas, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como los datos relativos a las inhabilitaciones para obtener este tipo de ayudas o subvenciones y a la concesión de las mismas que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho o el importe de las ayudas o subvenciones a conceder.

Igualmente, deberán facilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los procedimientos telemáticos y automatizados que se establezcan, toda la información de carácter tributario necesaria de que dispongan para la realización de la regularización de



cuotas a la que se refiere el artículo 308. El suministro de esta información deberá llevarse a cabo en el plazo más breve posible tras la finalización de los plazos de presentación por parte de los sujetos obligados de las correspondientes declaraciones tributarias, debiendo establecerse los adecuados mecanismos de intercambio de información

“h) Las comunidades autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios informáticos los datos relativos a las fechas de reconocimiento y vencimiento de los títulos de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, así como los datos relativos a los miembros de la unidad familiar incluidos en los mismos, que puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, incluyendo la condición de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como con la actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema. De la misma manera, facilitarán además los datos relativos a los registros de parejas de hecho, parejas estables u otras figuras equivalentes, que reflejen o certifiquen la convivencia estable de dos personas o que mantienen una relación equivalente o comparable al matrimonio.

Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de Seguridad Social que gestionen ayudas o subvenciones públicas, los datos sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho o el importe de las ayudas o subvenciones a conceder.

Por otra parte, facilitarán a la entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar los datos sobre el permiso de explotación marisquera, que puedan guardar relación con la incorporación de los trabajadores dedicados al marisqueo en el citado Régimen Especial.”

Cinco. Se da nueva redacción a los artículos 181 y 182, en los siguientes términos:

“Artículo 181. Personas beneficiarias.

Serán personas beneficiarias del subsidio por nacimiento y cuidado de menor previsto en esta sección las personas trabajadoras incluidas en el Régimen General que, producida la situación de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar a que se refiere el artículo 177, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor regulada en la sección anterior, salvo el período mínimo de cotización establecido en el artículo 178.

Artículo 182. Prestación económica.

1. La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor regulada en esta sección tendrá la consideración de no contributiva a los efectos del artículo 109.

2. La cuantía de la prestación será igual al 100 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento, salvo que la base reguladora calculada conforme al artículo 179 o al artículo 248 fuese de cuantía inferior, en cuyo caso se estará a esta.

3. La duración de la prestación será la que se corresponda con el periodo de descanso obligatorio, que deberá disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después del parto, de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, pudiendo denegarse, anularse o suspenderse el derecho por las mismas causas establecidas en el artículo 180.



Dicha duración se incrementará en 14 días naturales en los siguientes supuestos:

- a) Nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento en una familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza o en la que, con tal motivo, adquiera dicha condición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza.
- b) Nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento en una situación familiar prevista en el artículo 33 de la Ley xx/20xx, de xx de xxxxxx, de familias, entendiéndose por tal la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido, adoptado, en guarda o acogido, y que constituya el sustentador único de la familia.
- c) Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, entendiéndose que existe el mismo cuando el número de personas nacidas, adoptadas, en guarda o acogidas sea igual o superior a dos.
- d) Discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento de la persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora, beneficiaria del subsidio regulado en esta sección o del hijo, hija o persona menor adoptada, en guarda o acogimiento

La duración del subsidio de cada una de las personas beneficiarias de este subsidio únicamente podrá incrementarse en 14 días naturales, aun cuando concurren dos o más circunstancias de las señaladas”.

Seis. Se modifican los artículos 190 y 192 en los siguientes términos:

“Artículo 190. *Situación protegida.*

1. A efectos de la prestación económica por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente, menores de 18 años afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se considera situación protegida la reducción de la jornada de trabajo de, al menos, un 50 por ciento que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, lleven a cabo los progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen, o cuando solo haya un progenitor por tratarse de situaciones familiares previstas en el artículo 33 de la Ley xx/20xx, de xx de xxxxxx, de familias, para el cuidado directo, continuo y permanente del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración, durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.
2. La acreditación del padecimiento del cáncer u otra enfermedad grave, así como de la necesidad de hospitalización y tratamiento, y de cuidado durante el mismo, en los términos indicados en el apartado anterior, se realizará mediante informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente.
3. Alcanzada la mayoría de edad, si persistiera el padecimiento del cáncer o la enfermedad grave, diagnosticada antes de alcanzar la mayoría de edad, y subsistiera la necesidad de hospitalización, tratamiento y de cuidado durante el mismo, en los términos y con la acreditación que se exigen en los apartados anteriores, se mantendrá la prestación económica hasta los 23 años de edad.

No obstante, si alcanzada la edad de 23 años en los términos previstos en el párrafo anterior, el causante acreditara un grado de discapacidad igual o superior al 65%, se mantendrá la prestación económica hasta los 26 años de edad.



4. Reglamentariamente se determinarán las enfermedades consideradas graves, a efectos del reconocimiento de la prestación económica prevista en este capítulo.”

“Artículo 192. Prestación económica.

1. La prestación económica de la situación protegida prevista en el artículo 190, consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
2. Esta prestación se extinguirá cuando, previo informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente, del hijo o la persona sujeta a acogimiento o a guarda con fines de adopción del beneficiario, o cuando este cumpla los 23 años.

Así mismo, en el caso del párrafo 2º, del apartado 3º, del artículo 190, la prestación se extinguirá si la persona enferma dejara de acreditar el grado de discapacidad requerido o cuando cumpla los 26 años de edad.

3. La gestión y el pago de la prestación económica corresponderá a la mutua colaboradora con la Seguridad Social o, en su caso, a la entidad gestora con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.”

Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 219 que queda redactado en los términos siguientes:

“2. En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevinida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento o alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial cuando, en la fecha de celebración del matrimonio, se acredite un período de convivencia estable y notoria con el causante, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.”

Ocho. Se da nueva redacción al artículo 220 que queda redactado como sigue:

“1. En los casos de separación o divorcio, o de extinción de la pareja de hecho, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 219 y 221, sea o haya sido cónyuge legítimo o pareja de hecho, en estos últimos casos siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido nueva pareja de hecho.

Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta quedara extinguida a la muerte del causante. Asimismo, en el caso de extinción de la pareja de hecho, se requerirá que la persona superviviente sea acreedora de una pensión compensatoria y que ésta se extinga con motivo de la muerte del causante. La pensión compensatoria deberá estar determinada judicialmente o mediante convenio o pacto regulador entre los miembros de la pareja otorgado en documento público, siempre que para fijar el importe de la pensión se haya tenido en cuenta la concurrencia en el perceptor de las mismas circunstancias relacionadas en el artículo 97 del Código Civil



En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio correspondiente, o en el momento de la extinción de la pareja de hecho, mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

2. Si habiendo mediado divorcio o revocación de la inscripción como parejas de hecho en el registro correspondiente, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del cónyuge o pareja vinculada por una análoga relación de afectividad y convivencia superviviente.

3. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el apartado anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.”

Nueve. Se modifica el artículo 221 con la siguiente redacción:

1. También tendrán derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, quienes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 219 y se encuentren unidos al causante en el momento de su fallecimiento como pareja de hecho.

2. A efectos de lo establecido en este artículo, se reconocerá como pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho, y acrediten la existencia de pareja de hecho mediante certificación de la inscripción en los Registros específicos de parejas de hecho de las CCAA o entidades locales, en su caso, o a la constitución de la pareja de hecho como tal en documento público o en el Registro Estatal de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley XXX, de familias, siempre que dicha inscripción se haya producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de fallecimiento del causante.

3. Cuando la pareja de hecho constituida en los términos del apartado anterior se extinga por voluntad de uno o ambos convivientes, el posterior fallecimiento de uno de ellos solo dará derecho a pensión de viudedad con carácter vitalicio al superviviente cuando, además de concurrir los requisitos exigidos en cada caso en el artículo 219, no haya constituido una nueva pareja de hecho en los términos indicados en el apartado 2 ni contraído matrimonio.

Asimismo, se requerirá que la persona supérstite sea acreedora de una pensión compensatoria y que ésta se extinga con motivo de la muerte del causante. La pensión compensatoria deberá estar determinada judicialmente o mediante convenio o pacto regulador entre los miembros de la pareja otorgado en documento público, siempre que para fijar el importe de la pensión se haya tenido en cuenta la concurrencia en el perceptor de la misma de algunas de las circunstancias relacionadas en el artículo 97 del Código Civil.

En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión



compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de hecho mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”.

Diez. Se modifica el artículo 222 en los siguientes términos:

“Cuando el cónyuge o pareja de hecho superviviente no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de un año, en los términos del artículo 219.2 o, alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes, o que su inscripción como pareja de hecho en los Registros específicos de parejas de hecho de las CCAA o entidades locales, en su caso, o a la constitución de la pareja de hecho como tal en documento público o el Registro Estatal de Parejas de Hecho se ha producido con una antelación mínima de dos años respecto de la fecha de fallecimiento del causante, pero concurren el resto de requisitos enumerados en el artículo 219 y 221, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años.”

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 223 que queda redactado como sigue:

“1. La pensión de viudedad será compatible con cualesquiera rentas de trabajo. La pensión de viudedad, causada en los términos del segundo párrafo del artículo 219.1, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad, en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante quince años.”

Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 305 que queda redactado como sigue:

”2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en este régimen especial:

a) Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal, como pareja de hecho registrada o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.

3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del



mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

En los supuestos en que no concurren las circunstancias anteriores, la Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad.

c) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias a los que se refiere el artículo 1.2.a) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

d) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común, a los que se refiere el artículo 1.2.b) de la Ley 20/2007, de 11 de julio.

e) Los socios trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el capital social junto con la de su cónyuge, la de su pareja de hecho registrada y la de parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al menos, el 50 por ciento, salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares.

f) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio.

g) Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas en el apartado 1, que requiera la incorporación a un colegio profesional, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimoctava.

h) Los miembros del Cuerpo Único de Notarios.

i) Los miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes.

j) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que presten servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas o en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por las actividades complementarias privadas que realicen y que determinen su inclusión en el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimoctava.

k) El cónyuge, la pareja de hecho y los parientes del trabajador por cuenta propia o autónomo que, conforme a lo señalado en el artículo 12.1 y en el apartado 1, realicen trabajos de forma habitual y no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena.

l) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que perciban ingresos directamente de los compradores.

m) Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de inclusión mediante norma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.b).”

Trece. Se modifica el epígrafe 3 del artículo 324 que queda redactado en los términos siguientes:

”3. La incorporación a este sistema especial afectará, además de al titular de la explotación agraria, a su cónyuge, a su pareja de hecho y a los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive que no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena, siempre que sean mayores de dieciocho años y realicen la actividad agraria de forma personal y directa en la correspondiente explotación familiar.”

Catorce. Se modifica el primer párrafo de la letra b) del apartado 1 del artículo 352, en los siguientes términos



“b) Tengan a su cargo hijos o hijas o personas menores en régimen de acogimiento familiar permanente o temporal no inferior a un año, o guarda con fines de adopción en quienes concurren las circunstancias señaladas en la letra a) del artículo anterior y que residan en territorio español.”

Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 357, que queda redactado como sigue:

“1. En los casos de nacimiento, adopción o de hijo o hija o acogimiento familiar permanente o temporal no inferior a un año o guarda con fines de adopción en España en una familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una situación familiar prevista en el artículo 33 de la Ley xx/20xx, de xx de xxxxxx, de familias o en los supuestos de madres o padres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la Seguridad Social en la cuantía y en las condiciones que se establecen en esta sección.”

Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 358, en los siguientes términos:

La prestación por nacimiento, adopción de hijo o hija o acogimiento familiar permanente o temporal no inferior a un año o guarda con fines de adopción, regulada en la presente sección, consistirá en un pago único de 1.000 euros.

Diecisiete. Se modifica la denominación de la sección 4ª del capítulo I del título VI y el artículo 359, en los siguientes términos:

Sección 4.ª Prestación por parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal no inferior a un año o guarda con fines de adopción múltiples

“Artículo 359. Beneficiarios.

Serán beneficiarias de la prestación económica por parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal no inferior a un año o guarda con fines de adopción múltiples producidos en España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien reglamentariamente se establezca, que reúnan los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 352.1.

Se entenderá que existe parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal no inferior a un año o guarda con fines de adopción múltiple cuando el número de personas nacidas, adoptadas, acogidas o en guarda sea igual o superior a dos.”

Dieciocho. Se modifica el artículo 360, en los siguientes términos:

La cuantía de la prestación económica por parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal no inferior a un año o guarda con fines de adopción múltiples será la siguiente:

Número de hijos/as nacidos, adoptados, acogidos o en guarda	Número de veces el salario mínimo interprofesional
2	4
3	8
4 y más	12

Diecinueve. Se modifica el apartado 4 del artículo 363 que queda redactado en los términos siguientes:



”4. Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio, como pareja de hecho o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.”

Disposición final segunda. *Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.*

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 108, que queda redactado como sigue:

«2. El despido será nulo en los supuestos señalados en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores».

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 122, que queda redactado como sigue:

«2. La decisión extintiva será nula en los supuestos señalados en el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores, así como cuando se haya efectuado en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas para los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores».

Disposición final tercera. *Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.*

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica la letra c) del artículo 4.2, que queda redactada como sigue:

«c) A no ser discriminadas directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, identidad sexual y de género, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español, así como por razón de sexo, incluido el trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de los derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida familiar y laboral. Tampoco podrán ser discriminadas por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate».

Dos. Se modifica el apartado 8 del artículo 34, que tendrá la siguiente redacción:

«8. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

Asimismo, tendrán ese derecho aquellas que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, así como de otras personas dependientes cuando, en este último caso, convivan en el mismo domicilio, debiendo justificar las circunstancias en las que fundamenta su petición.



En la negociación colectiva se podrán establecer, con respeto a lo dispuesto en este apartado, los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de la persona trabajadora, abrirá un proceso de negociación con esta que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo.

Finalizado el proceso de negociación, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición. En caso contrario, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. Cuando se plantee una propuesta alternativa o se deniegue la petición, se motivarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.

La persona trabajadora tendrá derecho a regresar a la situación anterior a la adaptación una vez concluido el período acordado o previsto o cuando decaigan las causas que motivaron la solicitud.

En el resto de los supuestos, de concurrir un cambio de circunstancias que así lo justifique, la empresa sólo podrá denegar el regreso solicitado cuando existan razones objetivas motivadas para ello.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 y 48 bis.

Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán resueltas por la jurisdicción social, a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.»

Tres. Se modifican los apartados 3, 4, y 6 del artículo 37, y se introduce un nuevo apartado 9, que quedan redactados como sigue:

«3. La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho.

b) Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella.

b bis) Dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará en dos días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la



empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa respetando, en su caso, lo establecido en aquella.

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación.

Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses».

«6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o pareja de hecho, o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

También tendrá derecho a la reducción de jornada en atención a las mismas circunstancias y con el mismo alcance quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad del cónyuge o pareja de hecho siempre que no existieran familiares por consanguineidad directa hasta el segundo grado que pudieran acceder a la reducción descrita en el inciso anterior

La persona progenitora, guardadora con fines de adopción o acogedora permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor o persona con discapacidad hasta los veintiséis a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y,



como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción cumpla los veintitrés años o la persona con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 65 por ciento cumpla los veintiséis años. En consecuencia, el mero cumplimiento de los dieciocho años de edad por el hijo o el menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

En los supuestos de separación o divorcio el derecho será reconocido a la persona progenitora, guardadora o acogedora con quien conviva la persona enferma.

Cuando la persona enferma que se encuentre en el supuesto previsto en el párrafo tercero de este apartado contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario.

Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación»

«9. La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes e imprevisibles, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año, conforme a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras aportando estas, en su caso, acreditación del motivo de ausencia»

Cuatro. Se introduce una nueva letra o) en el artículo 45.1, con la siguiente redacción:

«o) Disfrute del permiso parental».

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 46, que queda redactado como sigue:

«3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

Tendrá derecho a la excedencia en atención a las mismas circunstancias y con el mismo alcance quien precise encargarse del cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad del cónyuge o pareja de hecho siempre que no existieran familiares por consanguinidad hasta el segundo grado del sujeto causante que pudieran acceder a la excedencia descrita en el inciso anterior.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse



de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores y trabajadoras. No obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento debidamente motivadas por escrito debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que la persona trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga reconocida la condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza o equiparada, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses».

Seis. Se modifican los apartados 4, y 6 del artículo 48, que quedan redactados como sigue:

«4. El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor de doce meses, suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada completa, para asegurar la protección de la salud de la madre.

El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo de la persona progenitora distinta de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada completa, para el cumplimiento de los deberes de cuidado previstos en el artículo 68 del Código Civil.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto el periodo de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre biológica o de la otra persona progenitora, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre biológica.

En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

La suspensión del contrato de cada una de las personas progenitoras por el cuidado de menor, una vez transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, podrá distribuirse a voluntad de aquellos, en periodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. No obstante, la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto, mientras que la persona progenitora distinta de la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta diez días antes de



dicha fecha. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días.

Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora.

La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y conforme se determine reglamentariamente.

La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos. Cuando las dos personas progenitoras que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito».

«6. En el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, en situación de guarda con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contrato a que se refieren los apartados 4 y 5 tendrá una duración adicional de dos semanas, una para cada una de las personas progenitoras. Igual ampliación procederá en el supuesto de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple por cada hijo o hija distinta del primero. En caso de haber una única persona progenitora, esta podrá disfrutar de las ampliaciones completas previstas en este apartado para el caso de familias con dos personas progenitoras.

Siete. Se introduce un nuevo artículo 48 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 48 bis. Permiso parental.

1. Las personas trabajadoras tendrán derecho a un permiso parental, para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años.

Este permiso, de duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial conforme a lo establecido reglamentariamente.

2. Este permiso constituye un derecho individual de las personas trabajadoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

Corresponderá a la persona trabajadora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la empresa con una antelación de diez días o la concretada por los convenios colectivos, salvo fuerza mayor, teniendo en cuenta la situación de aquella y las necesidades organizativas de la empresa.

En caso de que dos o más personas trabajadoras generasen este derecho por el mismo sujeto causante o en otros supuestos definidos por los convenios colectivos en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la empresa, ésta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible».

Ocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 53 que queda redactado como sigue:

«4. Cuando la decisión extintiva de la empresa tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.

Será también nula la decisión extintiva, en los siguientes supuestos:



a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), disfrute del permiso parental a que se refiere el artículo 48 bis, o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refiere el artículo 37, apartados 3.b) y b) bis, 4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. Para considerarse procedente deberá acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida.

En el resto de los supuestos, la decisión extintiva se considerará procedente cuando se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1. En otro caso se considerará improcedente.

No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho periodo o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan».

Nueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 55, que queda redactado como sigue:

«5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora.

Será también nulo el despido, en los siguientes supuestos:

a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), disfrute del permiso parental a que se refiere el artículo 48 bis, o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refiere el artículo 37, apartados 3.b) y b) bis, 4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia



prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género o violencia sexual por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados».

Diez. Se modifica la disposición adicional decimonovena, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional decimonovena. *Cálculo de indemnizaciones en determinados supuestos de jornada reducida.*

1. En los supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37.4 en su párrafo final, así como en sus apartados 5, 6 y 8, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en esta ley será el que hubiera correspondido a la persona trabajadora sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción.

2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los supuestos de ejercicio a tiempo parcial de los derechos según lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 48.4, en el segundo párrafo del artículo 48.5 y en el artículo 48 bis».

Once. Se añade la siguiente disposición transitoria:

“Disposición transitoria decimoquinta. *Aplicación progresiva de la duración del permiso parental establecido en el artículo 48 bis.*

La duración del permiso parental establecido en el artículo 48 bis se incrementará de forma progresiva, de tal forma que:

- a) En 2023, la duración del permiso será de seis semanas.
- b) En 2024, la duración del permiso será de ocho semanas.

Disposición final cuarta: *Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.*

Se modifican los siguientes preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

Uno. Se modifican los apartados a) y l) del artículo 48, que quedan redactados en los siguientes términos:

“a) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, cinco días.



Cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días.

Cuando se trate de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.”

“l). Por matrimonio o registro de pareja de hecho, quince días.”

Dos. Se modifican los apartados a, b), y e) del artículo 49 y se añade un nuevo apartado g) que quedan redactados en los siguientes términos:

“a) Permiso por nacimiento: Para la madre biológica tendrá una duración de dieciséis, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorias e ininterrumpidas y habrán de disfrutarse a jornada completa para asegurar la protección de la salud de la madre. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores o para su uso completo si hubiese una única persona progenitora. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la Administración con una antelación mínima de quince días. No obstante, la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, las semanas que excedan del período de suspensión obligatorio se podrán disfrutar en períodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, dentro de los doce meses siguientes al nacimiento. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos permisos, deberá comunicarse a la Administración con una antelación mínima de quince días. El permiso de estas semanas podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de



descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores, tutores, o acogedores, o para su uso completo por parte de una única persona adoptante, tutora o acogedora.

El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. No obstante, en los supuestos de adopción internacional se ajustará el cómputo de la duración del permiso para que se inicie tomando como referencia el momento en que llega la persona menor de edad al hogar familiar, acreditado por la entidad pública o entidad sin ánimo de lucro acreditada e inscrita en el registro correspondiente para realizar la función de intermediación en la adopción internacional, si resulta más favorable que el momento de la resolución por la que se constituye la adopción.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores o del progenitor único al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

“e) Permiso por cuidado de hijo menor, o persona con discapacidad en una grado reconocido igual o superior al 65 por ciento hasta los 26 años, afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad, o persona con discapacidad en un grado reconocido igual o superior al 65 por ciento hasta los 26 años, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma



o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 23 años o la persona con discapacidad cumpla los 26 años. En consecuencia, el mero cumplimiento de los 18 años de edad del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente

Cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario o funcionaria tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que la otra persona progenitora, adoptante o guardadora con fines de adopción o acogedora de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

- g) Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años: tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y conforme a los términos que reglamentariamente se establezcan.

Este permiso constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.

Corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Administración con una antelación de quince días y realizándose por semanas completas.

Cuando concurren en ambas personas progenitoras, adoptantes, o acogedoras, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso en los que el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el correcto funcionamiento de la entidad de la administración en la que ambas presten servicios, ésta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible».

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 57, que queda redactado en los siguientes términos:

“2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge o pareja de hecho registrada como tal en un registro público reconocido de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho o se haya anulado, revocado o extinguido la inscripción registral como pareja de hecho; y a sus descendientes y a los de su cónyuge o de su pareja de hecho registrada, siempre que no estén separados de derecho o se haya anulado, revocado o extinguido la inscripción registral de la



pareja de hecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.”

Cuatro: Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 89, que quedan redactados en los siguientes términos:

“3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge o pareja de hecho registrada como tal en un registro público resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

4. Los funcionarios y las funcionarias de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de su cónyuge o pareja de hecho registrada como tal en un registro público, o de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad del propio funcionario o de cualquiera de aquéllos, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

A los efectos anteriores, la relación que une a los beneficiarios con su pareja de hecho se considerará como un vínculo de parentesco por afinidad y dará derecho a obtener la excedencia para la atención de familiares en las mismas condiciones que en el supuesto de existencia de vínculo matrimonial.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.”

Cinco. Se añade una disposición transitoria con el siguiente tenor:



Disposición transitoria décima. *Aplicación progresiva del permiso parental establecido en el artículo 49.g).*

La duración del permiso parental establecido en el artículo 49.g) se incrementará de forma progresiva, de tal forma que:

- a) En 2023, la duración del permiso será de seis semanas.
- b) En 2024, la duración del permiso será de ocho semanas.”

Disposición final quinta. *Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.*

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 110, quedando redactado como sigue:

“4. A los militares profesionales se les podrá conceder la excedencia voluntaria por agrupación familiar, sin requisito de haber prestado tiempo de servicios, cuando el cónyuge o pareja de hecho registrada como tal en un registro público resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales o un destino de los contemplados en el artículo 99.”

Dos. Se modifica el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 110 y se añade un nuevo párrafo a continuación, quedando redactados como sigue:

“También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de su cónyuge o pareja de hecho registrada como tal en un registro público o de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

Disposición final sexta. *Modificación del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.*

Se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, en los siguientes términos:

Uno. Se modifican el título de la sección 3ª del capítulo IX, que queda redactado como sigue:

“Sección 3ª *Ayudas económicas en los supuestos de parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal o guarda con fines de adopción múltiples.*”

Dos. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 97 que queda redactada como sigue:

“a) Un subsidio especial en los supuestos de parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal o guarda con fines de adopción múltiples, a partir del segundo.”

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 98, que queda redactado como sigue:

“1. Podrán ser beneficiarios del subsidio al que se refiere el artículo 97.1.



a), la madre o el padre, o el adoptante o las personas que ejerzan el acogimiento o la guarda legal, cuando estén obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación de este régimen especial y no tengan derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.”

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 100, que queda redactado como sigue:

“1. El subsidio especial por parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal o guarda con fines de adopción múltiples, consistirá en un importe equivalente al 100 por 100 de la base de cotización al ISFAS durante las 6 semanas de descanso obligatorio posterior al parto.”

Disposición final séptima. *Adaptación de los artículos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.*

Se modifican los siguientes preceptos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril:

Uno. Se modifican los apartados 1, 4, 5 y 6 del artículo 38, que quedan redactados en los siguientes términos:

“1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad quien sea cónyuge supérstite del causante de los derechos pasivos.

En los supuestos en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial cuando existan hijos comunes, ni tampoco cuando se acredite, con carácter previo a la celebración del matrimonio, un periodo de convivencia estable y notoria con el causante que sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.

Cuando el cónyuge no pueda acceder a pensión de viudedad por las causas citadas en el párrafo anterior, tendrá derecho a una prestación temporal de igual cuantía que la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años”.

“4. También tendrán derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, quienes se encuentren unidos al causante como pareja de hecho en el momento de su fallecimiento y cumplan los demás requisitos establecidos en el presente apartado.

Se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho, y acrediten la existencia de pareja de hecho mediante certificación de la inscripción en los Registros específicos de parejas de hecho de las CCAA o entidades locales, en su caso, o a la constitución de la pareja de hecho como tal en documento público o el Registro Estatal de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley XXX, de familias, siempre que dicha inscripción se haya producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de fallecimiento del causante.

5. Cuando la pareja de hecho se extinga por voluntad de uno o ambos convivientes, el posterior fallecimiento de uno de ellos solo dará derecho a pensión de viudedad con carácter vitalicio al superviviente cuando, además de concurrir los demás requisitos legales, no haya contraído matrimonio ni constituido una nueva pareja de hecho en los términos indicados en el apartado anterior.

Asimismo, se requerirá que la persona supérstite sea acreedora de una pensión compensatoria y que ésta se extinga con motivo de la muerte del causante. La pensión compensatoria deberá



estar determinada judicialmente o mediante convenio o pacto regulador entre los miembros de la pareja otorgado en documento público, siempre que para fijar el importe de la pensión se haya tenido en cuenta la concurrencia en el perceptor de las mismas circunstancias relacionadas en el artículo 97 del Código Civil.

En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de hecho mediante sentencia firme o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

Cuando la pareja de hecho superviviente no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad debido a que su inscripción en el Registro Estatal de Parejas de Hecho se hubiera producido con una antelación inferior a dos años respecto de la fecha del fallecimiento del causante, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años.

6. En todos los supuestos a los que se refiere el presente artículo, el derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los términos establecidos en el apartado 4.”

Dos. Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:

“1. Las pensiones en favor de familiares del Régimen de Clases Pasivas del Estado, reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, se extinguirán cuando sus titulares contraigan matrimonio o se inscriban como pareja de hecho en registro público reconocido, sin que pueda posteriormente recuperarse el derecho a las mismas si el matrimonio o la inscripción como pareja de hecho se hubiera celebrado con posterioridad al 23 de agosto de 1984, en las pensiones causadas por el personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o después del 31 de diciembre del mismo año, en las pensiones causadas por el resto del personal incluido en el ámbito subjetivo del Régimen de Clases Pasivas del Estado.”

Tres. Se modifica el texto de la disposición transitoria duodécima, que queda redactada en los siguientes términos:

“El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona divorciada, separada judicialmente o cuya inscripción como pareja de hecho en registro público reconocido se haya revocado, sea acreedora de la pensión compensatoria a que se refiere el párrafo primero del apartado 2 del artículo 38 de este texto, cuando concurren en el beneficiario, además de la existencia de hijos comunes en el matrimonio o bien que tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión, los siguientes requisitos:

- a) El divorcio o la separación judicial o la revocación de la inscripción como pareja de hecho en registro público reconocido se haya producido con anterioridad a 1 de enero de 2008, fecha de entrada en vigor de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
- b) Entre las fechas del divorcio, la separación judicial o la revocación de la inscripción como



pareja de hecho en registro público reconocido y del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido un período de tiempo no superior a diez años.

c) El vínculo matrimonial o la inscripción como pareja de hecho en registro público reconocido haya tenido una duración mínima de diez años.

En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta disposición transitoria, la persona divorciada, separada judicialmente, o cuya inscripción como pareja de hecho se haya revocado, que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a la pensión de viudedad que pudiera causar, en su caso, la persona acreedora de aquélla.

Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2009, e igualmente les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, de esta ley.”

Disposición final octava. *Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.*

Se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, de la forma siguiente:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 81, en los siguientes términos:

“Artículo 81. *Deducción por maternidad.*

1. Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta ley, que en el momento del nacimiento del menor perciban prestaciones contributivas o asistenciales del sistema de protección de desempleo, o que en dicho momento o en cualquier momento posterior estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad con un período mínimo, en este último caso, de 30 días cotizados, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años hasta que el menor alcance los tres años de edad. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante los tres años siguientes a la fecha de la inscripción en el Registro Civil.

Cuando la inscripción no sea necesaria, la deducción se podrá practicar durante los tres años posteriores a la fecha de la resolución judicial o administrativa que la declare.

En caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, siempre que cumpla los requisitos previstos en este artículo, éste tendrá derecho a la práctica de la deducción pendiente.

2. El importe de la deducción a que se refiere el apartado 1 anterior se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

En el período impositivo en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento previsto en este apartado podrá resultar de aplicación respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquél en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

A estos efectos se entenderán por gastos de custodia las cantidades satisfechas a guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y matrícula de dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por meses



completos y no tuvieran la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos por aplicación de lo dispuesto en las letras b) o d) del apartado 3 del artículo 42 de esta ley.

3. La deducción prevista en el apartado 1 anterior se calculará de forma proporcional al número de meses del periodo impositivo posteriores al momento en el que se cumplen los requisitos señalados en el apartado 1 anterior, en los que la mujer tenga derecho al mínimo por descendientes por ese menor de tres años, siempre que durante dichos meses no se perciba por ninguno de los progenitores en relación con dicho descendiente el complemento de ayuda para la infancia previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

Cuando tenga derecho a la deducción en relación con ese descendiente por haberse dado de alta en la Seguridad social o mutualidad con posterioridad al nacimiento del menor, la deducción correspondiente al mes en el que se cumpla el período de cotización de 30 días al que se refiere el apartado 1 anterior, se incrementará en 150 euros.

El incremento de la deducción previsto en el apartado 2 anterior se calculará de forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos de los apartados 1 y 2 anteriores, salvo el relativo a que sea menor de tres años en los meses a los que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 anterior, y tendrá como límite el importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho período a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo.

4. Se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono del importe de la deducción previsto en el apartado 1 anterior de forma anticipada. En estos supuestos, no se minorará la cuota diferencial del impuesto.

5. Reglamentariamente se regularán el procedimiento y las condiciones para tener derecho a la práctica de esta deducción, los supuestos en que se pueda solicitar de forma anticipada su abono y las obligaciones de información a cumplir por las guarderías o centros infantiles.»

Disposición final novena. *Modificación de Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.*

Se modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, de la forma siguiente:

Uno. Se modifica el título de la ley que queda redactado de la siguiente forma:

“Ley 40/2003, de 18 de diciembre, de Protección a las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”

Dos. Se modifica el artículo 1, que queda redactado de la siguiente manera:

“1. Esta ley tiene por objeto establecer la definición, acreditación y régimen de las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Constitución.

2. Los beneficios establecidos al amparo de esta ley tienen como finalidad primordial contribuir a promover las condiciones para que la igualdad de los miembros de las familias con especiales necesidades de apoyo a la crianza sea real y efectiva en el acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales.”

Tres. Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2. *Concepto de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza.*

1. A los efectos de esta ley, se entiende por familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, la familia numerosa integrada por una o dos personas progenitoras, adoptantes, tutoras,



acogedoras o guardadoras, con tres o más hijas o hijos, sean o no comunes.

2. Se equiparán a familia numerosa, a los efectos de esta ley, las familias constituidas por:

a) Una o dos personas progenitoras, adoptantes, tutoras, acogedoras o guardadoras con dos hijas o hijos, sean o no comunes, cuando al menos uno de éstos sea persona con discapacidad o con incapacidad para trabajar.

b) Dos personas progenitoras, adoptantes, tutoras, acogedoras o guardadoras, cuando ambas fueran personas con discapacidad, o, al menos, una de ellas tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o estuvieran incapacitadas para trabajar, con dos hijas o hijos, sean o no comunes.

c) La persona progenitora en situaciones familiares en que exista una sola, por cualquier razón, defunción o situación legalmente equiparada a la defunción de una de las personas progenitoras, por pérdida o no ejercicio de la patria potestad por parte de una de las personas progenitoras, por ejercicio en solitario de la crianza, tutela, acogimiento o guarda con dos hijas o hijos.

d) El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal.

En el supuesto de que, la persona progenitora opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, proponiendo a estos efectos que se tengan en cuenta hijos que no convivan con ella, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos.

En el caso de que no hubiera acuerdo entre las personas progenitoras sobre las hijas e hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia.

Si la guardia y custodia de las hijas o de los hijos estuvieran atribuidas de forma compartida, éstos podrán ser computados por ambos progenitores, de forma que figuren en los dos títulos emitidos.

e) Dos o más hermanas/os huérfanas/os de sus personas progenitoras que estén sujetas a tutela, acogimiento o guarda que convivan con la persona tutora, acogedora o guardadora, pero que no se hallen a sus expensas.

f) Tres o más hermanas/os huérfanas/os de sus personas progenitoras, mayores de 18 años, o dos, si uno de ellos es persona con discapacidad, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos.

3. A los efectos de esta ley, se consideran ascendientes las personas progenitoras, de forma individual o conjuntamente, cuando exista vínculo conyugal o constituyan una pareja de hecho registrada como tal, o, en su caso, al cónyuge o pareja de hecho registrada de uno de ellos.

Se equipará a la condición de ascendiente la persona o personas que, a falta de los mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de los hijos, siempre que éstos convivan con ella o ellas y a sus expensas.

4. Tendrán la misma consideración que las hijas e hijos las personas sometidas a tutela, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente legalmente constituido. Las personas menores de edad que habiendo estado en alguna de estas situaciones alcancen la mayoría de edad y permanezcan en la unidad familiar, conservarán la condición de hijas e hijos en los términos establecidos en el artículo 3.

5. A los efectos de esta ley, se entenderá por persona discapacitada aquella que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y, por persona



incapacitada para trabajar, aquélla que tenga reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Cuatro. Se modifica el apartado 1, letras a) y c) 1º, 2º y 4º, y el apartado 3 del artículo 3, que queda redactado como sigue:

“1. Para que se reconozca y mantenga el derecho a ostentar la condición de integrantes de una familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, las hijas, hijos, hermanas o hermanos deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Ser personas solteras y menores de 21 años de edad, o ser personas con discapacidad o con incapacidad para trabajar, cualquiera que fuese su edad.

Tal límite de edad se ampliará hasta el cumplimiento de los 26 años de edad, cuando cursen estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo, en los términos que reglamentariamente se establezcan.”

c) Depender económicamente de la o las personas progenitoras. Se considerará que se mantiene la dependencia económica cuando:

1.º La hija o el hijo obtenga unos ingresos no superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

2.º La hija o hijo sea una persona con incapacidad para el trabajo y la cuantía de su pensión, si la percibiese, no exceda en cómputo anual, al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, incluidas 14 pagas, salvo que percibiese pensión no contributiva por invalidez, en cuyo caso no operará tal límite.”

“4.º La hija o hijo contribuya al sostenimiento de la familia y la o las personas progenitoras sean personas con incapacidad para el trabajo, jubiladas o sean mayores de 65 años de edad, siempre que los ingresos de éstas no sean superiores en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias”.

”3. Nadie podrá ser computado, a los efectos de esta ley, en dos unidades familiares al mismo tiempo, salvo en el supuesto previsto en el artículo 2.2.c) para los casos de guarda y custodia atribuida de forma compartida, excepto en materia fiscal.”

Cinco. Se da nueva redacción al artículo 4 que queda redactado como sigue:

“1. Las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, por razón del número de hijos o hijas que reúnan las condiciones de los artículos 2 y 3 de esta ley, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

a) Especial: las de cuatro o más hijas o hijos y las de tres hijas o hijos que de los cuales al menos dos procedan de uno o más partos, adopciones o acogimientos o guarda con fines de adopción múltiples.

No obstante, las unidades familiares con tres hijos se clasificarán en la categoría especial cuando los ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 150 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, incluidas las pagas extraordinarias.



Igualmente, se incluirán en esta categoría las situaciones familiares previstas en el artículo 33 de la Ley xx/20xx, de xx de xxxxxx, de familias cuando tengas dos o más hijas o hijos.

b) General: las restantes unidades familiares no señaladas en la letra anterior.

2. Cada hijo con discapacidad o con incapacidad para trabajar, en los términos definidos en el apartado 5 del artículo 2, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte.”

Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:

“*Artículo 5.* Reconocimiento de la condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza.

1. La condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza y los supuestos equiparados a la misma en el apartado 2 del artículo 2 se acreditarán mediante el título oficial de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que será otorgado cuando concurren los requisitos establecidos en esta ley, a petición de cualquiera de las personas progenitoras, tutoras, acogedoras, guardadoras, u otro miembro de la unidad familiar con capacidad legal. Este título tendrá validez en todo el territorio nacional sin necesidad de acto alguno de reconocimiento. El contenido mínimo e indispensable para asegurar su eficacia se determinará en el desarrollo reglamentario de esta ley.

Corresponde a la comunidad autónoma de residencia de la persona solicitante la competencia para el reconocimiento de la condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, así como para la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y categoría, incluyendo la certificación en formato digital con idéntica validez que el formato físico.

Asimismo, las comunidades autónomas podrán expedir documentos de uso individual para cada miembro de la unidad familiar que esté en posesión del correspondiente título, que acredite su pertenencia a la misma y la categoría en la que la familia está clasificada, a fin de acceder a los beneficios asociados a tal condición.

Para los casos de los nacionales de Estados miembro de la Unión Europea o de los restantes que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no tengan su residencia en territorio español, será competente la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.”

Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

“*Artículo 6.* Renovación, modificación o pérdida del título.

El título deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición del título y ello suponga un cambio de categoría general a especial o la pérdida de la condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza.

El título seguirá en vigor, aunque el número de hijas o hijos que cumplen las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. Las unidades familiares clasificadas en la categoría especial la mantendrán mientras alguna de las hijas o hijos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. No obstante, en todos estos casos la vigencia del título se entenderá



exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no será aplicable a las hijas o hijos que ya no las cumplen.”

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado como sigue:

“1. Los convenios colectivos podrán incluir medidas para la protección de los trabajadores cuya familia tenga la consideración legal de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, en particular en materia de derechos de las personas trabajadoras, acción social, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y extinción del contrato de trabajo.”

Nueve. Se modifica el apartado 1.b) del artículo 12, que queda redactado como sigue:

“b) Se otorgará un subsidio a las familias reconocidas, conforme a lo previsto en esta ley, como familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza que tengan en su seno a hijas/os con discapacidad o con incapacidad para trabajar que presenten necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad.”

Diez. Se modifica el artículo 17, que quedará redactado de la siguiente forma:

“**Artículo 17.** Obligaciones de los titulares de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza.

1. Las personas que formen parte de unidades familiares a las que se haya reconocido el título de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza están obligadas a comunicar a la Administración competente, en el plazo máximo de tres meses, cualquier variación que se produzca en su familia, siempre que éstas deban ser tenidas en cuenta a efectos de la modificación o extinción del derecho a tal título.

2. Asimismo, están obligadas a presentar, dentro del primer trimestre de cada año, una declaración expresiva de los ingresos de la unidad familiar habidos durante el año anterior, excepto cuando ya obren en poder de la Administración, siempre que éstos se hayan tenido en cuenta para la consideración de la familia título de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, para su clasificación en la categoría especial o para acreditar el requisito de dependencia económica.

Once. Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue.

“**Artículo 18.** Régimen sancionador.

1. Este régimen sancionador tiene por objeto garantizar la observancia de los requisitos, condiciones y obligaciones que deben cumplir los beneficiarios que formen parte de unidades familiares que tengan reconocida la condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza

2. Constituyen infracciones administrativas las conductas y los hechos tipificados en el apartado siguiente cuando en ellas intervenga dolo, culpa. A estos efectos, se considera responsable a cualquiera de los miembros que integre la familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza que realice alguna de las conductas o de los hechos constitutivos de infracción administrativa.

3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

a) Son infracciones leves:



1.ª La no comunicación a la Administración competente, en el plazo máximo de tres meses, de cualquier variación que se produzca en la familia que deba ser tenida en cuenta a efectos de la modificación o extinción del derecho al título.

2.ª La no presentación ante la Administración competente, durante el primer trimestre de cada año, de la declaración de los ingresos obtenidos durante el año anterior por la unidad familiar, en los términos previstos en el artículo 17.2 de esta ley.

3.ª La negativa a exhibir el título cuando exista obligación de hacerlo.

b) Son infracciones graves:

1.ª La comisión de una tercera infracción leve en el curso de un año cuando haya recaído sanción sobre las dos infracciones anteriores.

2.ª La ocultación o falsedad de alguno de los requisitos o condiciones exigidos por la ley para obtener o mantener la condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza.

3.ª La falsificación del título oficial de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza.

4.ª La cesión del título a personas ajenas no amparadas por éste.

5.ª La posesión o uso indebido o abusivo del título oficial de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza o de título de categoría superior a la que en cada caso corresponda.

c) Constituirá infracción muy grave la comisión de una tercera o sucesiva infracción grave en el curso de un año, cuando haya recaído sanción sobre las dos anteriores.

4. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las sanciones que se podrán imponer a las personas que incurran en alguna de las infracciones mencionadas en el anterior apartado son las siguientes:

a) Por infracciones leves:

1.ª Amonestación individual por escrito.

2.ª Suspensión de cualquiera de los derechos atribuidos a los beneficiarios del título de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza por un tiempo no superior a un mes.

b) Por infracciones graves:

1.ª Suspensión de todos los derechos atribuidos a los beneficiarios del título de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza por un tiempo superior a un mes y no superior a seis meses.

2.ª Suspensión de alguno de los derechos atribuidos a los beneficiarios del título de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza por un tiempo superior a seis meses e inferior a dos años.

c) Por infracciones muy graves:

1.ª Suspensión de todos los derechos atribuidos a los beneficiarios del título de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza por un período de seis meses a dos años.

2.ª Pérdida de la condición de beneficiario.

5. En consideración a la gravedad de la infracción, podrá adoptarse como medida provisional, mientras se tramita el procedimiento sancionador, la suspensión de los efectos del reconocimiento de la condición de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, de acuerdo con los principios y garantías establecidas en la normativa reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.



Doce. Se añade un nuevo artículo 20 con el siguiente tenor:

“Artículo 20. Otras infracciones y sanciones.

1. En relación con las personas con discapacidad será de aplicación lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, salvo en el caso de que dicho régimen sancionador no haya sido tipificado por las comunidades autónomas, en cuyo caso, regirá el previsto en dicha ley.

Disposición final décima. *Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.*

Se modifica el apartado 4 del artículo 74 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que queda con la siguiente redacción:

“4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza o equiparadas de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2003, de Protección a las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza.

La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales”.

Disposición final décimo primera. *Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.*

Se modifica el primer párrafo de la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que queda redactada como sigue:

“Se crea un Fondo, que se dotará inicialmente con 10 millones de euros, destinado a garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de pensiones de alimentos reconocido a favor de los hijos e hijas menores de edad o mayores con un grado de discapacidad de, al menos, el 65 por ciento o en situación de dependencia reconocida según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en convenios judicialmente aprobados o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, disolución de pareja de hecho, procesos de filiación o de alimentos.”

Disposición final décimo segunda. *Modificación del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de alimentos.*

Se modifica el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de alimentos, de la forma siguiente:

Uno. Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue:



“Artículo 2. Naturaleza y gestión del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

1. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos es un fondo carente de personalidad jurídica, a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria, cuya gestión se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
2. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos tiene como finalidad garantizar a los hijos e hijas menores de edad o mayores con un grado de discapacidad de, al menos, el 65 por ciento o en situación de dependencia reconocida según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el pago de pensiones de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, disolución de parejas de hecho, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.
3. La concesión del anticipo se hará en todo caso previa instrucción y resolución del expediente dirigido a comprobar su procedencia.
4. En cualquier caso, será necesario para acceder a los anticipos del Fondo que la resolución en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles”.

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 que tendrá la siguiente redacción:

“Serán beneficiarios de los anticipos del Fondo los españoles menores de edad o mayores con discapacidad o en situación de dependencia, así como los que sean nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en España, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocidos e impagados que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se establecen en el artículo 6 de este real decreto.”

Tres. Se modifica el artículo 5, con el siguiente tenor literal:

“Artículo 5. Concepto de Unidad familiar.

A los efectos previstos en este real decreto, se considerará Unidad familiar a todas las incluidas en las medidas generales de apoyo general a las familias que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades, atendiendo a sus circunstancias particulares y cuyos derechos de protección se encuentran recogidos en el capítulo I del título II de la Ley de Familias.

Para el cómputo de ingresos establecido en el artículo siguiente, se considerará unidad familiar la formada por el padre o la madre y aquellos hijos e hijas menores de edad o mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia, que sean titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, y se encuentren a su cargo

También se considerará unidad familiar a estos efectos la formada por los menores o mayores con discapacidad o en situación de dependencia contemplados en el párrafo anterior y la persona física que los tenga a su cargo por tener atribuida su guarda y custodia.”

Cuatro. Se modifica el artículo 6, con el siguiente tenor literal:

“Artículo 6. Límite de recursos económicos.



Los recursos e ingresos económicos de la Unidad familiar, computados anualmente, no podrán superar la cantidad resultante de multiplicar por cinco la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos e hijas menores que integren la Unidad familiar.

Dicho coeficiente será 1,5 si sólo hubiera un hijo o hija, y se incrementará en 1 por cada hijo o hija, de forma que el coeficiente será 2,5 si hubiera dos hijos o hijas en la unidad familiar, 3,5 si hubiera tres hijos o hijas, y así sucesivamente.”

Cinco. Se modifica el artículo 8, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 8. Cuantía del anticipo.

1. La cuantía del anticipo que conceda el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se considerará siempre en importes mensuales.
2. La persona beneficiaria tendrá derecho al anticipo, con cargo al Fondo, de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos por resolución judicial.
3. No obstante lo anterior, la cuantía máxima del anticipo a percibir por un beneficiario se establece en 500 euros mensuales. Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios beneficiarios este límite operará para cada uno de ellos.
4. Si la resolución judicial fijara una cuantía inferior a la prevista por el apartado anterior, la cuantía del anticipo a percibir con cargo al Fondo será la fijada por dicha resolución judicial.

Seis. Se modifica el artículo 9 con la siguiente redacción:

“Artículo 9. Plazo máximo de duración de la garantía del Fondo.

El plazo de percepción de los anticipos reconocidos a cada beneficiario tendrá un período inicial de dieciocho meses, ya se perciba el anticipo de forma continua o discontinua, pudiéndose ser prorrogado de forma indefinida si persiste la situación de impago que dio lugar a su activación”.

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 12, con la siguiente redacción:

1. “El procedimiento de reconocimiento de anticipo se iniciará mediante solicitud del miembro de la unidad familiar que tenga la guarda y custodia de la persona menor o mayor con discapacidad o en situación de dependencia beneficiaria del anticipo o por la propia persona con discapacidad mayor de edad que tenga plena capacidad de obrar. La solicitud deberá formalizarse en el modelo oficial que, a tal efecto, apruebe el centro directivo competente en la gestión de este Fondo y que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”.”

Ocho. Se modifica el artículo 14, con la siguiente redacción:

“Artículo 14. Documentación acreditativa.

1. La solicitud contendrá, entre otras, las siguientes declaraciones:
 - a) Declaración de la persona solicitante referida a las rentas e ingresos de la unidad familiar.
 - b) Subrogación a favor del Estado en los términos previstos en el artículo 24.1.



2. Asimismo, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

- a) Testimonio de la resolución judicial que reconozca el derecho a alimentos, así como testimonio de haber instado su ejecución.
 - b) Certificación expedida por el Secretario Judicial que acredite el resultado infructuoso de la ejecución tras haber transcurrido dos meses desde que se instó, al no haberse obtenido el pago de los alimentos ni haberse trabado embargo sobre bienes propiedad del ejecutado.
 - c) En su caso, Libro de familia, o certificación de la inscripción registral en caso de parejas de hecho o certificación de nacimiento de las personas beneficiarias.
 - d) En el caso de menores extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, tarjeta de identidad de extranjero en vigor y resolución de la autorización de residencia de los periodos previos requeridos en España, en los términos establecidos en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En el caso de menores extranjeros que sean ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, certificación de su inscripción en el Registro Central de Extranjeros, prevista en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de los mismos.
 - e) En su caso, certificado o resolución acreditativa del grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano competente de las comunidades autónomas.
 - f) En su caso, certificado o resolución acreditativa del reconocimiento de la situación de dependencia al amparo de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
3. No será necesaria la presentación de documentación que estuviera en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que la Administración pueda requerir al solicitante del anticipo que facilite la fecha y el órgano o dependencia en que dicha documentación fue presentada o, en su caso, fue emitida.

Nueve. Se modifica el artículo 16, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 16. Procedimiento de urgencia.

1. Podrá reconocerse con carácter de urgencia el anticipo a quienes, reuniendo las condiciones contempladas por este real decreto, acrediten una situación de urgente necesidad.
2. Se considerará, a estos efectos, que existe situación de urgente necesidad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
 - a) Cuando los recursos e ingresos económicos de la unidad familiar no superen la mitad del límite fijado con arreglo al artículo 6 del presente real decreto.
 - b) Cuando la persona que lo solicite sea víctima de violencia de género, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género.
3. El procedimiento de urgencia se iniciará a instancia de quien reclame el anticipo y no será preciso acreditar la dificultad para obtener el pago de alimentos a que se refiere el artículo 14.2.b), siendo bastante el testimonio de haber instado la ejecución judicial de la resolución que reconoció el derecho a la pensión alimentos.
4. Deberá acreditarse la condición de víctima de violencia de género, si ésta fuera la causa de la



situación de urgente necesidad, por cualquiera de los siguientes medios de prueba:

- a) A través de la sentencia condenatoria.
- b) A través de la resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar para la protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado.
- c) De la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

5. El procedimiento ordinario podrá derivar en procedimiento de urgencia a instancia del solicitante, cuando por éste se acredite una situación sobrevenida de urgente necesidad en los términos del presente artículo.

Diez. Se modifica el artículo 17, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 17. Resolución, plazos y efectos.

1. Corresponderá a centro directivo competente en la gestión del Fondo resolver el expediente, de forma motivada.
2. El plazo máximo para resolver y notificar al solicitante la resolución será de tres meses, contado desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para la tramitación.

Este plazo será de dos meses en el procedimiento de urgencia contemplado en el artículo anterior, contado igualmente desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para la tramitación.

3. Transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud se podrá entender estimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La concesión del pago del anticipo se comunicará también a la persona obligada al pago de pensión de los alimentos, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la emisión de la resolución de reconocimiento, mediante un oficio en el que se reflejen las circunstancias del reconocimiento de aquel”.

Once. Se modifica el artículo 18 que queda con la siguiente redacción:

“Artículo 18. Recursos.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y se podrá interponer contra la misma recurso potestativo de reposición ante el titular del órgano competente para la gestión del Fondo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados de igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.”

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que tendrá la siguiente redacción:

“1. El derecho a que se refieren los artículos anteriores se extinguirá por:

- a) Por alcanzar el beneficiario la mayoría de edad, en caso de pensión de alimentos, salvo que se tratara de hijos o hijas con discapacidad o en situación de dependencia.



- b) Por alteración de las condiciones económicas de la Unidad familiar que justificaron el reconocimiento siempre que la misma supere los límites establecidos en el artículo 6.
- c) Por resolución judicial que así lo determine.
- d) Por modificación de la resolución judicial que reconoció el derecho de los beneficiarios a alimentos, siempre que de la misma se derive la improcedencia sobrevenida del mismo.
- e) Por cumplimiento voluntario o forzoso de la obligación de pago por parte del obligado. Ante pagos parciales o discontinuos comunicados por la persona beneficiaria, se reanuda la percepción del anticipo.
- f) Cuando el anticipo se obtuviera mediante la aportación de datos falsos o deliberadamente incompletos o a través de cualquier forma fraudulenta o con omisión deliberada de circunstancias que hubieran determinado la denegación o reducción del derecho.
- g) Por el transcurso del plazo máximo de garantía.
- h) Por el reconocimiento de prestación o ayuda incompatible, previa opción del solicitante, o percepción de la misma.
- i) Por fallecimiento del beneficiario.
- j) Por fallecimiento del obligado al pago de alimentos.
- k) Por pérdida de la residencia legal, respecto de los menores que carezcan de nacionalidad española.”

Trece. Se incluye una disposición transitoria con la siguiente redacción:

“Disposición transitoria única. *Régimen aplicable a los expedientes.*

1. Las personas beneficiarias de anticipos reconocidos y abonados con arreglo al régimen jurídico anterior a la reforma este real decreto, operada por la Ley XXXX de Familias, podrán volver a solicitar anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos al amparo de la expresada reforma. Sus derechos se reconocerán con efectos del primer día del mes siguiente a la solicitud que al efecto se formule, sin que en ningún caso se produzcan efectos retroactivos con anterioridad a la misma.
2. Los anticipos en curso de pago en el momento de entrada en vigor de la reforma continuarán abonándose en la extensión temporal y cuantía en que fueron reconocidos. No obstante, los beneficiarios podrán solicitar acogerse al nuevo régimen jurídico, en cuyo caso se revisarán los anticipos de conformidad con el mismo. Los efectos de dicha revisión serán del primer día del mes siguiente al de la solicitud que necesariamente habrá de formularse, sin que quepa modificar la cuantía de los anticipos para periodos anteriores a dicha fecha.
3. Los procedimientos de reconocimiento de anticipo que se encuentren en trámite al tiempo de la entrada en vigor de la reforma se resolverán de conformidad a lo establecido en la misma”.

Catorce. Se modifica la disposición final primera, que queda redactada como sigue:



“Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular del departamento ministerial al que esté adscrito el centro directivo competente para la gestión del Fondo y a la persona titular del Ministerio de Justicia para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo previsto en este real decreto.”

Disposición final décimo tercera. Plazos para determinadas modificaciones normativas.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 y en el artículo 55.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley se deberá dar efectividad al derecho reconocido en el artículo 14.1.
3. Se modificará la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14.5, en el plazo que se acuerde en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Disposición final décimo cuarta: Títulos competenciales.

Esta ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1. 1.^a, 7.^a, 13.^a, 17.^a y 18.^a de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación laboral; el establecimiento de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los funcionarios, respectivamente.

De lo expuesto en el apartado anterior se exceptúan los siguientes artículos:

- a) El artículo 60, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.2.^a de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- b) Los artículos 6, 8, 35, 55.1 y 55.2, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.8.^a de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan
- c) El artículo 61, que se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6.^a de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación penitenciaria.
- d) Las disposiciones finales segunda y tercera, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.7.^a de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
- e) El artículo 58 y las disposiciones finales octava y décima, que se amparan en el artículo 149.1.14.^a de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de hacienda general.



- f) Los artículos 18, 19, 20 y 53, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.16ª de la Constitución Española atribuye al Estado para establecer las bases y coordinación general de la sanidad.
- g) Los artículos 26 y 27, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.21ª de la Constitución Española atribuye al Estado sobre el régimen general de comunicaciones.
- h) Los artículos 23, 24, 31, 41, 48.2 y 51.1, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.30ª de la Constitución Española atribuye al Estado para regular las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución.

Lo dispuesto en esta ley se aplicará sin perjuicio de las previsiones de los regímenes civiles, forales o especiales en el ámbito reservado a las mismas por el artículo 149.1.8ª de la Constitución Española, allí donde existan.

Disposición final decimoquinta. *Incorporación de derecho de la Unión Europea.*

Mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Disposición final decimosexta. *Habilitación normativa.*

Se autoriza al Gobierno y a los titulares de los Ministerios en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo reglamentario en ejecución de la ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta ley.

Disposición final decimoséptima: *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de aquellas previsiones cuya efectividad quede supeditada a las modificaciones normativas ulteriores previstas en la disposición final décimo tercera.

Texto 9-10-22
Revisión más reciente 14-12-2022

MEMORIA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE FAMILIAS

FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano proponente	MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 COPROONENTES: MINISTERIO DE IGUALDAD Y MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	Fecha	12/12/2022
Título de la norma	ANTEPROYECTO DE LEY DE FAMILIAS		
Tipo de Memoria	Normal <input checked="" type="checkbox"/> Abreviada <input type="checkbox"/>		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			

Situación que se regula	<p>El pleno reconocimiento de la diversidad de modelos de convivencia familiar, y su régimen de protección, incluyendo a todos los modelos de familias, con independencia de circunstancias tales como el estado civil, la orientación sexual o identidad de género o el origen de la filiación, entre otras.</p> <p>La protección social y económica de las familias desde la Administración General del Estado y en colaboración con el resto de administraciones, fijando un marco de referencia de objetivos, principios y valores.</p> <p>Asimismo, se trata de adoptar las medidas que permitan la consecución de la igualdad a través del ejercicio efectivo de los derechos de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo las modificaciones necesarias para que las personas trabajadoras puedan asumir sus responsabilidades de cuidado respecto de menores y dependientes, incorporar el permiso por fuerza mayor familiar y el permiso parental retribuido a los que se refiere la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.</p>
--------------------------------	---

Objetivos que se persiguen

Reconocimiento de la diversidad de modelos y situaciones familiares que coexisten en nuestra sociedad, así como el establecimiento del marco y las bases para una política integral de apoyo familiar, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y sus miembros, mediante su protección social y económica, en todos los ámbitos en los que éstas desarrollen sus funciones.

La mejora de la protección social y económica de las familias y de sus integrantes en todos los ámbitos en los que actúen, dentro del marco de la Constitución Española, de los derechos fundamentales y particularmente con plena adhesión a los principios y derechos establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y alineada con los tratados en materia de derechos humanos suscritos por España.

La definición de los principios generales de acción a favor de las familias como institución social esencial. Pretende esta ley asimismo garantizar y promover el ejercicio y desarrollo de los derechos de las personas que integran las familias, estableciendo nuevas medidas específicas de apoyo y promoción a las familias dentro de los principios que establece la presente ley.

Por razones de sistematicidad con sus objetivos, la presente norma, tiene la finalidad de transponer al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo debiendo cumplir íntegramente con el mandato de transposición al ordenamiento interno contenido en las directivas que se mencionada.

<p>Principales alternativas consideradas</p>	<p>Modificación parcial de diferentes textos legales de forma independiente. No obstante, se ha considerado que uno de los problemas a resolver con esta norma es precisamente la fragmentación de la regulación de la protección a las familias en nuestro país, por lo que se opta por una normativa integral que fije un marco común y coherente para las políticas de apoyo familiar.</p> <p>Es necesario indicar que la parte correspondiente a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, fue inicialmente tramitada como un único anteproyecto de ley junto con la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.</p> <p>Posteriormente razones de coherencia y sistematicidad han llevado a la decisión de incluir la citada transposición en el Anteproyecto de Ley de Familias.</p> <p>Por lo demás, no caben otras alternativas que el anteproyecto de ley dado que el mandato de trasposición contenido en la directiva supone un cambio de normas legales, principalmente, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p>CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO</p>	
<p>Tipo de norma</p>	<p>Ley ordinaria</p>
<p>Estructura de la Norma</p>	<p>La ley se estructura en 68 artículos, distribuidos en cuatro títulos, diecinueve capítulos, cuatro disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y diecisiete disposiciones finales</p>

Informes que han de ser recabados

En relación con la **parte relativa a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, se han llevado a cabo los siguientes trámites:

Se ha recabado informe de acuerdo con el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de los siguientes Ministerios:

- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Ministerio de Igualdad
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
- Ministerio de Hacienda y Función Pública
- Ministerio de Política Territorial
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Ministerio de Justicia, así como del Consejo General del Poder Judicial.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 26.9 LG, se ha recabado informe del Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática, que se ha recibido el 3.10.2022.

Se ha remitido para informe a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Asimismo, es preciso sustanciar los trámites siguientes:

- El dictamen del Consejo Económico y Social, artículo 7.1.1 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social.
- El dictamen del Consejo de Estado, artículo 21.2 Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

<p>Trámites de consulta pública previa, información y audiencia pública</p>	<p>Celebrada entre 25 de junio y 9 de julio de 2021 la consulta pública prevista en el artículo 133 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno.</p> <p>En la parte relativa a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 el Anteproyecto ha sido objeto de consulta pública (artículo 26.2 LG) del 14 al 28 de junio.</p> <p>Asimismo, el Anteproyecto inicial de transposición de la Directiva ha sido objeto de audiencia e información públicas durante 7 días hábiles y se adoptó Acuerdo del Consejo de Ministros sobre Tramitación Administrativa Urgente el día 1 de agosto de 2022., con carácter previo a su incorporación al presente anteproyecto de ley de Familias.</p> <p>Asimismo, se adoptó Acuerdo del Consejo de Ministros sobre tramitación administrativa urgente del anteproyecto de ley de familias el día 13 de diciembre de 2022.</p>	
<p>ANALISIS DE IMPACTOS</p>		
<p>ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS</p>	<p>Artículo 149.1.1.ª, 2.ª, 6.ª, 7.ª, 13ª, 14ª, 16.ª, 17ª, 18.ª, 21.ª y 30.ª de la Constitución Española.</p>	
<p>IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO</p>	<p>Efectos sobre la economía en general.</p>	<p>Este anteproyecto de ley no representa un impacto económico directo, ni sobre la competencia, la unidad de mercado, ni la competitividad. No obstante, sí se aprecia un impacto económico indirecto relevante al ser las familias un agente económico básico que suministra factores al proceso productivo mediante el aporte de capital humano a la sociedad y el reemplazo generacional, así como a través de la demanda de bienes y servicios.</p> <p>Hay que señalar que la transposición de la directiva tendrá claros efectos positivos al incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, retener talento en las empresas, así como un aumento de los ingresos.</p>

	En relación con la competencia	<input checked="" type="checkbox"/> la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> la norma tiene efectos positivos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> la norma tiene efectos negativos sobre la competencia.
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	<input type="checkbox"/> supone una reducción de cargas administrativas. Cuantificación estimada: <input checked="" type="checkbox"/> incorpora nuevas cargas administrativas. <input type="checkbox"/> no afecta a las cargas administrativas.
	Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma <input checked="" type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado. <input checked="" type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales.	<input checked="" type="checkbox"/> implica un gasto: <input type="checkbox"/> implica un ingreso.
IMPACTO DE GÉNERO	La norma tiene un impacto de género	Negativo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo <input checked="" type="checkbox"/>

OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS	Impacto en la infancia y en la adolescencia: positivo Impacto en la familia: positivo. Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad: positivo.
OTRAS CONSIDERACIONES	No se realizan.

La presente Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) se estructura con arreglo al Real Decreto 931/2017, de 3 de julio, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y se efectúa siguiendo, en lo que se ajusta a la norma vigente, la Guía Metodológica, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, habida cuenta de que no ha sido aún desarrollada la actualización de la guía metodológica prevista en la disposición adicional primera del mencionado real decreto.

Dado que se derivan impactos apreciables en los ámbitos señalados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del citado real decreto, procede realizar una Memoria extensa y no abreviada.

I) Oportunidad de la propuesta.

1º Motivación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.1 de la Constitución Española corresponde a los poderes públicos asegurar la protección jurídica, social y económica de la familia. Esta previsión se encuadra en el Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, y más concretamente en el Capítulo III considerándose por tanto parte de los “principios rectores de la política social y económica” que deben servir de orientación para la acción política de todas las Administraciones Públicas. Igualmente, el apartado 2 de ese mismo artículo hace referencia a la infancia: “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación (..)”.

El mandato de protección a la familia encuentra también su base en las Declaraciones Internacionales referidas a la protección de los derechos humanos, entre las que cabe destacar diversos artículos (12, 16, 25, entre otros) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

La familia es una institución social y en cuanto tal evoluciona con los cambios de todo tipo que afectan a la sociedad. De la regulación constitucional no puede desprenderse que acoja una única modalidad de familia y que esta tenga su base solo en el matrimonio. En este sentido se manifiestan claramente las Sentencias del Tribunal Constitucional 19 y 198/2012, de 15 de febrero y 6 de noviembre respectivamente. Por el contrario, aunque sociológicamente sea evidente la relación existente entre familia y matrimonio, a efectos de las previsiones del artículo 39 no es relevante si la familia se ha constituido por ejercicio del derecho recogido en el artículo 32 (derecho al matrimonio) o por otro tipo de vínculo social. Lo que sí es claro es que constitucionalmente lo que realmente identifica una familia es la existencia de vínculos materno-paterno filiales o, al menos, un núcleo de convivencia parental.

La realidad social muestra claramente que las modalidades de convivencia familiar se han ido diversificando y que con los años han ido ganando reconocimiento legal y legitimidad social otros modelos no basados en el matrimonio formado por un hombre y una mujer.

Así pueden destacarse las reformas del Derecho de Familia en materia de filiación, patria potestad, régimen económico matrimonial, nulidad, separación y divorcio, matrimonio entre personas del mismo sexo, que han ido dando paso a un paisaje familiar diverso en el que junto a las llamadas familias tradicionales, se encuentran familias no basadas en el matrimonio, familias formadas por una única personas progenitora con hijas o hijos a cargo, familias reconstituidas en que hay hijos de otras relaciones o familias de acogida, todas ellas amparadas por la protección prevista constitucionalmente para la familia.

No obstante, persisten regulaciones diferenciadas y por ende niveles de protección desiguales entre los distintos modelos familiares que coexisten en nuestra sociedad, con una repercusión que va más allá de las personas adultas que forman parte de la unidad familiar, ya que afectan a las personas

menores que conviven en ella y cuyo interés superior hay que proteger, con independencia del tipo de familia en la que vivan.

Así, además de las modificaciones aprobadas en el Código Civil desde la aprobación de la Constitución que han ido acompañando en buena medida la evolución de la sociedad española en materia de familia, hay múltiples normas de carácter sectorial que no guardan coherencia con esa evolución. Tal sucede por ejemplo con la regulación de las uniones no matrimoniales que, si bien han sido reguladas en el ámbito autonómico, no tienen un marco normativo estatal general.

Se aprecia pues que, a falta de una norma marco que dé coherencia a la protección dispensada por las administraciones, se produce una fragmentación en la normativa reguladora de la protección familiar en la medida en que existen diferentes normativas sectoriales con distinto alcance en cuanto a su ámbito subjetivo, con diferencias en cuanto a la propia definición de unidad familiar o de tipología de familias y situaciones familiares contemplada en las mismas o los requisitos que deben acreditar para acceder a determinados beneficios (a efectos de becas educativas, ayudas a la vivienda, rentas mínimas, bonos sociales de energía, prestaciones por desempleo, etc.).

Igualmente prueba de esa fragmentación y del trato diferenciado por tipo de familia es la existencia en nuestro ordenamiento jurídico estatal de una única norma con vocación integral de protección familiar pero que solo está referida a un tipo determinado de familia: La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, un concepto que también ha ido evolucionando a lo largo de los años atendiendo a la realidad demográfica de la reducción del número de hijos por hogar y la necesidad de ir ampliándose a otras realidades familiares necesitadas de protección. Sin embargo, son muchas las demandas sociales y políticas para ampliar la protección especial que el Estado ofrece a las familias numerosas a otro tipo de situaciones familiares actualmente no contempladas, como es el caso de las familias monoparentales o aquellas que presentan especiales necesidades relacionadas con la crianza y cuidado de sus hijas e hijos como son las familias de personas con discapacidad o las familias con partos, adopciones o acogimientos múltiples.

La norma proyectada parte pues de la necesidad de articular un marco general y coherente de protección jurídica, social y económica de las familias en su diversidad, que supere la actual fragmentación y falta de equidad del conjunto de normas estatales en la materia.

Por otra parte, nuestro país presenta una clara insuficiencia en el nivel de protección social y económica a las familias, especialmente a las que tienen personas menores a cargo, que tiene su reflejo en el gran diferencial existente entre el gasto destinado a familia e infancia en términos de PIB en España (1,3% en 2019) frente a la media de la Unión Europea (2,2% en 2019). El fenómeno de la llamada pobreza infantil, que es gran medida la pobreza de las familias, y que presenta tasas desproporcionadas e impropias de un país con nuestro nivel de desarrollo económico, tiene especial relación con la insuficiente intensidad protectora de nuestro sistema, con la falta de prestaciones por hijo a cargo de carácter general y por la escasa cuantía de las transferencias sociales a las familias. El hecho de que buena parte de la protección económica a las familias se vehicule a través de beneficios fiscales en el IRPF (mínimos familiares exentos, tributación conjunta, deducciones por razones familiares) limita su ámbito subjetivo a las unidades familiares que tributan, es decir, a las que cuentan con renta suficiente para poder tributar y aplicarse esos beneficios, dejando fuera a las familias con rentas inferiores al mínimo establecido, que precisamente son las más vulnerables desde el punto de vista económico.

Hay que señalar que de manera reiterada la Comisión Europea ha venido instando a España a mejorar el apoyo a las familias en sus Recomendaciones-País cada año y que sobre esa base se ha desarrollado desde septiembre de 2020 a febrero de 2022 un proyecto de apoyo a las reformas estructurales financiado por la Comisión Europea para promover un nuevo marco nacional de apoyo y protección a las familias en España, que ha contado con la asistencia técnica de la OCDE. El informe final¹ recoge un amplio diagnóstico sobre la protección familiar en nuestro país, una serie de buenas prácticas comparadas de otros países de la UE y la OCDE y, finalmente, un conjunto de

¹ https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/familias/otros/docs/OECD_2022_-_Evolving_family_models_in_Spain.pdf

recomendaciones para orientar la reforma, que en buena medida contribuyen a fundamentar y apoyar el enfoque y el contenido de este proyecto de Ley de Familias.

De este modo, la norma parte de la necesidad de mejorar el actual marco de protección social para todas las familias, con independencia de su modelo y de las distintas situaciones que presenten. Persisten dificultades en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal que guardan relación con la ordenación de la jornada de trabajo y las posibilidades de adaptación a las circunstancias familiares de las personas trabajadoras, especialmente cuando se presentan necesidades de cuidado. No es posible avanzar en este ámbito sin tener en cuenta la perspectiva de género ante la evidencia de que son las mujeres quienes asumen de forma mayoritaria esos cuidados y por tanto sufren las consecuencias económicas a corto, medio y largo plazo de la suspensión de su actividad laboral o profesional, contribuyendo a mantener la brecha salarial de género. La realidad es que los datos de participación en el mercado laboral y en las tasas de empleo de mujeres y hombres son muy similares hasta los 30 años de edad (prácticamente la edad media a la maternidad en España) y a partir de entonces sube para los hombres y baja para las mujeres, un diferencial que ya nunca se vuelve a recuperar del todo hasta la edad de jubilación. La necesidad de promover la corresponsabilidad de los hombres en estas tareas, así como la corresponsabilidad social en materia de cuidados está también entre los motivos que fundamentan esta iniciativa legislativa.

Por otra parte, se constata una insuficiente oferta de servicios de apoyo a las familias en el desarrollo de sus funciones, no solo ante situaciones específicas de vulnerabilidad socioeconómica (que son las que tradicionalmente se han venido atendiendo en el ámbito de los servicios sociales, por una visión excesivamente asistencialista de los mismos) sino también con carácter general, con una intención más preventiva y capacitadora, que acompañe y oriente a las familias a lo largo de su ciclo vital, en especial en relación con el ejercicio de las responsabilidades parentales o ante la existencia de situaciones de conflictividad. La Administración General del Estado debe ejercer su responsabilidad, en colaboración y coordinación con las demás administraciones competentes, para mejorar la vida a las familias.

No cabe tampoco desconocer la realidad demográfica de nuestro país, caracterizada por un creciente envejecimiento, muy baja natalidad, retraso en la edad en que se forman las familias y se tienen hijos, diferencia importante entre número de hijos deseados y los realmente tenidos, importantes movimientos migratorios y despoblación de amplias zonas de nuestra geografía. En buena parte son indicadores de las dificultades de las y los jóvenes para desarrollar su proyecto vital y familiar por razones ajenas a su voluntad y que guardan relación con la dificultad para acceder al empleo, la precariedad laboral y salarial, el elevado coste del acceso a la vivienda o a la insuficiencia de servicios de cuidado y educación infantil. Sobre muchos de estos condicionantes ya se está actuando y aprobando normas, estrategias o planes de actuación específicos, pero es necesario articular un marco general de protección familiar que contemple de manera singular a las familias formadas por personas jóvenes, así como a las familias en el medio rural o las familias procedentes de otro Estado o territorio, o en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, o familias entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferente.

En definitiva, la norma proyectada parte de la necesidad básica de dar cumplimiento efectivo y más completo a la responsabilidad de los poderes públicos de asegurar la protección jurídica, social y económica a la familia, reconociendo plenamente y atendiendo a la diversidad de modelos de convivencia familiar, y a la superación de las actuales insuficiencias detectadas tanto de tipo organizativo y jurídico como especialmente de tipo material.

Por razones de sistematicidad y atendiendo a sus objetivos, la presente norma tiene la finalidad de transponer al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

La Directiva (UE) 2019/1158, de 20 de junio de 2019, se asienta y es expresión de los principios de igualdad de género y de equilibrio entre vida familiar y vida profesional que se reafirman en los principios 2 y 9 del pilar europeo de derechos sociales. Es, asimismo, fruto de la evolución de la

propia Unión Europea en el contenido y alcance de los derechos de conciliación, siendo la tercera de las directivas sobre esta materia: su antecedente remoto fue la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, una directiva sobre permisos parentales que se basaba tan solo en la configuración de derechos de ausencia de las personas con responsabilidades de cuidado y que ni reflejaba las consecuencias de género de las cuestiones de cuidado ni, en consecuencia, preveía medios efectivos para promover la corresponsabilidad. Este camino sería iniciado con la siguiente directiva sobre la materia, la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE.

Sin embargo, es con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1158, de 20 de junio de 2019, con la que la conciliación de responsabilidades pasa a un lugar central. El propio título ya ilustra el nuevo contenido, que va más allá del establecimiento de permisos y otorga una relevancia especial a la adaptación de condiciones de trabajo, introduciendo con rotundidad la dimensión de la corresponsabilidad, como se advierte en numerosos aspectos, tanto en los considerandos como en el articulado. Esta directiva establece un nuevo marco que requiere seguridad en el conocimiento y en el ejercicio de los derechos sobre el tiempo de trabajo relacionados con los derechos de cuidado de menores y dependientes, por lo que enlaza con la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, y con la Directiva (UE) 2019/1152, de 20 de junio de 2019.

2º Fines y objetivos perseguidos

La norma proyectada atiende a los siguientes objetivos:

- El reconocimiento de la diversidad de modelos y situaciones familiares que coexisten en nuestra sociedad, incluyendo el establecimiento de definiciones homogéneas de las distintas realidades familiares que permitan asegurar la coherencia en las diferentes regulaciones sectoriales que les afecten.
- El establecimiento del marco y las bases para una política integral de apoyo familiar, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y sus miembros, mediante su protección social y económica, en todos los ámbitos en los que éstas desarrollen sus funciones.
- El reconocimiento del derecho a prestar y recibir cuidados, así como el derecho a la corresponsabilidad intrafamiliar y social, que deben constituir pilares esenciales del funcionamiento de las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas.
- La mejora de la protección social y económica de las familias y de sus integrantes en todos los ámbitos en los que actúen, con una atención especial a las situaciones de vulnerabilidad y al fenómeno de la pobreza infantil, dentro del marco de la Constitución Española, de los derechos fundamentales y particularmente con plena adhesión a los principios y derechos establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y alineada con los tratados en materia de derechos humanos suscritos por España.
- La reforma de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, dando cumplimiento a lo previsto en la disposición final quinta. cuatro de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- La transposición al Derecho nacional de la Directiva (UE) 2019/1158, de 20 de junio de 2019, que contiene términos de mejora y progreso que pueda afectar a las carreras profesionales de las personas que se ocupan de manera informal de las tareas de cuidado de familiares o dependientes.

La directiva da respuesta adecuada a la situación de doble atención a las responsabilidades familiares y a las de trabajo en el marco y conforme a unas exigencias concretas como son relaciones laborales más igualitarias y la aplicación efectiva del principio de no discriminación por

razón de sexo. Dispone que los puestos de trabajo deben adaptarse a las distintas vicisitudes derivadas de la crianza de menores y cuidado de dependientes y mayores, y establece unas condiciones para que haya un reparto de tareas efectivo y un ejercicio corresponsable, garantizando, en su caso, el carácter intransferible y retribuido de determinadas interrupciones de la actividad laboral, garantizando así una posición equivalente a mujeres y hombres en las empresas.

En suma, el objetivo de la norma consiste en la consecución de la igualdad a través de la individualización de los derechos de conciliación y de la provisión de fórmulas de trabajo flexible. Asimismo, trata de superar las políticas de primera generación que se destinaban a compatibilizar los quehaceres de la doble jornada, familiar y laboral, con ausencias de las mujeres lo que suponía un gran entorpecimiento de sus carreras profesionales.

Es importante poner de manifiesto que el haz de derechos reconocidos por la directiva se superpone a unos sistemas normativos internos que han ido construyendo reglas al servicio de la conciliación entre la vida laboral y familiar, de carácter diverso y complejo por razón de su disfrute, de su duración o de su propia naturaleza jurídica. Interesa por tanto señalar que, en el cumplimiento del mandato de transposición a nuestro ordenamiento interno, se han adoptado aquellos cambios considerados imprescindibles y atendido, cuando ha sido necesario y en la medida adecuada, a la denominada "cláusula pasarela". La citada cláusula permite que los Estados miembros puedan tener en cuenta cualquier período de ausencia del trabajo relacionado con la familia con remuneración o prestación económica, a que pueda acogerse la persona trabajadora en el ámbito nacional y que supere los estándares mínimos previstos en la referida Directiva, **siempre que se respeten los requisitos para dichos permisos y que no se reduzca el nivel general de protección garantizado a los trabajadores en los ámbitos de aplicación de las directivas correspondientes.**

De manera que, en cada caso, las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores responden a un doble propósito: de un lado se evita penalizar o duplicar los sistemas de protección frente a las situaciones descritas -crianza de los hijos e hijas, cuidado de mayores y dependientes- y de otro, con el límite necesario introducir los requisitos mínimos de cada permiso

En cuanto a la finalidad perseguida por esta norma se centra en:

- La definición de los valores fundamentales y principios rectores generales de acción a favor de las familias como institución social esencial, entre los que figuran la libertad, la perspectiva de género, la no discriminación y fomento de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades, , la universalidad, la responsabilidad pública, la transversalidad, la participación y la promoción y protección de los derechos humanos
- La garantía y promoción del ejercicio y desarrollo de los derechos de las personas que integran las familias, ordenando, actualizando y sistematizando las medidas vigentes y estableciendo nuevas medidas específicas de apoyo y promoción a las familias dentro de los principios que establece la ley.
- La mejora de la coordinación, cooperación y participación social en las políticas familiares, dada la transversalidad de estas políticas tanto en el terreno interadministrativo como interterritorial, y la necesidad de dar cauces a la participación a las propias familias y a niñas, niños y adolescentes en las políticas que les afectan.

Debe reseñarse también que con esta iniciativa legislativa se da cumplimiento al compromiso adquirido por España para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, donde la reforma de la protección a las familias figura como una de las previstas en el marco del componente 22 de dicho Plan. Concretamente, con la entrada en vigor de esta ley se cumple con el hito 316 , que se enmarca dentro del Componente 22 "Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión", en la Reforma 3 recogido en el Anexo revisado de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España de julio de 2021, que persigue los

siguientes objetivos: a) el reconocimiento jurídico de los diversos tipos de estructuras familiares existentes; b) la determinación de las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho según sus características y niveles de ingresos; y c) la reducción de la pobreza infantil teniendo en cuenta los resultados de una evaluación del impacto redistributivo.

3º Alternativas

La principal alternativa sería la modificación parcial de diferentes textos legales de forma independiente. No obstante, se ha considerado que uno de los problemas a resolver con esta norma es precisamente la fragmentación de la regulación de la protección a las familias en nuestro país, por lo que se opta por una normativa integral que fije un marco común y coherente para las políticas de apoyo familiar, aunque ello implique que buena parte del contenido de la norma sean modificaciones de otras leyes.

La alternativa escogida se considera que es más respetuosa con los principios de buena regulación establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así mismo contribuye a que exista una menor dispersión normativa en nuestro ordenamiento jurídico.

Es necesario subrayar que la parte correspondiente a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, fue inicialmente tramitada como un único anteproyecto de ley junto con la transposición de la **Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.**

4º Adecuación a los principios de buena regulación.

Se han respetado los principios de necesidad, eficacia, eficiencia, transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda vez que se parte de la necesidad de un marco normativo que regule un sistema de protección integral, frente a la fragmentación del modelo actual, garantizando de esta forma una mayor protección de las familias.

Así en relación a los citados principios se argumenta lo siguiente:

La ley contiene la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos señalados, no existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. En este mismo sentido, en relación al principio de eficiencia, cabe señalar que, si bien el anteproyecto establece nuevas cargas administrativas, estas son las mínimas imprescindibles para la consecución de los objetivos que persigue la Ley.

Del mismo modo, cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido en las diferentes fases de su tramitación. Así, durante la misma se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de consulta pública previa (realizada del 25 de junio al 9 de julio de 2021, ambos inclusive), de conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por otra parte, además en lo que afecta a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, se sometió a consulta pública, audiencia e información pública. Durante el trámite de audiencia, se ha consultado a las organizaciones sindicales y patronales más representativas. Durante la tramitación de la norma se ha recabado, asimismo, el dictamen del Consejo Económico y Social y el correspondiente dictamen del Consejo de Estado.

Asimismo, la ley es coherente con el ordenamiento jurídico nacional, comunitario e internacional, cumpliendo con los mandatos que señalan la obligación de los Estados de proteger a las familias. Igualmente, cumple con las recomendaciones-país hechas a España por la Comisión Europea en los últimos años para mejorar el apoyo a las familias, especialmente en el contexto de la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social.

Ante esta recomendación y teniendo en cuenta las necesidades descritas en otros apartados se hace imprescindible revisar y regular de forma unificada y conjunta la protección a las familias, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica y para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, facilitando la actuación y toma de decisiones de los poderes públicos intervinientes en la materia.

5º Plan Anual normativo.

La Ley de Familias está incluida en el Plan Anual Normativo para 2022 aprobado por Consejo de Ministros de 11 de enero de 2022, a propuesta del Ministerio de Presidencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En él se contienen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante dicho año natural al Consejo de Ministros para su aprobación, según dispone el artículo 2 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

II) Contenido y análisis jurídico.

1º Contenido.

La ley se estructura en cuatro títulos, diecinueve capítulos, sesenta y ocho artículos, cuatro disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y diecisiete disposiciones finales.

Tras un primer Título que incluye los artículos que plantean las definiciones y valores fundamentales, el segundo Título se dedica a medidas generales de apoyo a todas las familias. A continuación, el Título III recoge medidas específicas de protección a situaciones familiares que presentan características o necesidades singulares. El Título IV está dedicado a la coordinación, cooperación y participación social en las políticas familiares. Finalmente, esta Ley cuenta con cuatro disposiciones adicionales, tres transitorias que regulan aspectos concretos que requieren de una aplicación progresiva o que afectan a situaciones y derechos de la ciudadanía vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta norma, y un número importante de disposiciones finales, un total de diecisiete, ya que muchas de las medidas que se proponen en esta Ley suponen modificaciones de otras normas estatales ya vigentes.

El **Título primero** denominado “**Disposiciones generales**” delimita el objeto y la finalidad de la norma, así como su ámbito de aplicación subjetivo, y recoge las definiciones legales de uso en la ley y los valores fundamentales y principios rectores en los que se basarán las políticas públicas de apoyo familiar.

Con respecto al objeto, se hace constar el propósito de lograr el pleno reconocimiento de la diversidad de modelos familiares que coexisten, el establecimiento de las bases para una política integral de apoyo a las familias, así como de asegurar la protección social y económica de las familias, todo ello a resultas del mandato constitucional del artículo 39.1 del Texto Fundamental, y en el marco de los principios y derechos establecidos en los tratados internacionales de los que España sea parte.

En cuanto a la finalidad, se definen en la norma los principios generales de acción a favor de las familias como institución social esencial, y, establecer nuevas medidas específicas de apoyo y promoción a las familias.

La norma se aplicará, con carácter general, a las familias domiciliadas en territorio nacional. Esto es, se trata de un ámbito subjetivo basado más en criterios territoriales (domicilio en España) que personales (nacionalidad), si bien se prevé que, en el caso de personas de nacionalidad española no residentes en territorio nacional, puedan ser también tener derecho a lo previsto en esta Ley en el marco establecido en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

Quedan comprendidas en su ámbito de aplicación subjetivo tanto las parejas unidas por matrimonio como las parejas de hecho, inscritas en un registro público de parejas de hecho. Se avanza así en la equiparación formalmente y en derechos en la ley a las parejas conyugales con las de hecho, recogiendo en una norma estatal una demanda de igualdad de tratamiento expresada por múltiples cauces por la sociedad civil en las últimas décadas, y dando un carácter general a los avances que se van incorporando sectorialmente al ordenamiento, como la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios con respecto a las pensiones de viudedad, que el ejecutivo ha aprobado recientemente en el marco de la reforma de las pensiones.

El ámbito subjetivo alcanza también a las unidades familiares formadas por una persona individual con sus ascendientes, las personas que de ellas dependan por filiación, curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad análogas, tutela, guarda o acogimiento, y las que tengan a su cargo, siempre que formen un núcleo estable de convivencia. Finalmente, se contempla una previsión según la cual las prestaciones y medidas derivadas de la presente ley podrán aplicarse también a las personas que vivan solas, a las uniones convivenciales de parejas no registradas con descendientes comunes o en unidades de convivencia no familiares cuando así se prevea expresamente.

Se aportan también en este título las definiciones legales, a los efectos de la protección social y económica dispensada en esta ley, a partir del concepto de núcleo estable de convivencia, siendo de especial relevancia la incorporación de la de las parejas de hecho, por incluirse por primera vez en un marco estatal básico y general, que era una de las recomendaciones reiteradas que se han hecho a España desde organizaciones internacionales como la OCDE, que aconseja incluir en la ley definiciones claras sobre qué se considera unidad familiar y sobre tipos específicos de situaciones familiares..

Las políticas de apoyo a las familias se basan en los valores fundamentales que se enumeran en el artículo 4 de la ley, entre los que destaca el reconocimiento del papel de las familias en la sociedad; el respeto a la libre decisión y elección sobre la formación o no de una familia y de su organización; el tratamiento igualitario que tenga en cuenta la diversidad familiar; la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres; el reconocimiento del derecho a la conciliación corresponsable de la vida familiar y laboral, y a la corresponsabilidad empresarial y social; el reconocimiento del valor social de la maternidad y la paternidad y de la necesidad de asegurar el ejercicio positivo de la parentalidad en la crianza de niñas, niños y adolescentes; y correlativamente el reconocimiento del interés superior de niñas, niños y adolescentes (en coherencia con lo ya regulado al respecto en el artículo 2 de La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil); asimismo, se destaca como valor fundamental la protección especial a las familias con situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social y/o necesidades de apoyo, así como a los miembros más vulnerables de las familias.

Por último, se cierra el título con la referencia a los principios rectores de las políticas públicas de apoyo familiar que son los de libertad; perspectiva de género, no discriminación y fomento de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades; universalidad; responsabilidad pública; transversalidad; participación y promoción y protección de los derechos humanos.

El **Título II** desarrolla las “**medidas generales de apoyo a las familias**”, estableciendo la obligación por parte de las Administraciones Públicas de asegurar la protección jurídica, social y económica de las mismas, a fin de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de todas las unidades familiares, atendiendo a sus circunstancias particulares, en especial cuando concurren situaciones de vulnerabilidad.

Recoge en su capítulo I, referido, por una parte, a la protección de las familias no basadas en el matrimonio, la previsión de crear un registro estatal de parejas de hecho y garantizando que los descendientes tengan acceso y disfrute a todos los derechos y beneficios que les correspondan con independencia del estado civil de sus progenitores.

En este capítulo se prevé también el derecho de la ciudadanía a la información jurídica sobre las relaciones familiares y de pareja, de forma que puedan tomar una decisión informada y más libre sobre los derechos y deberes que conllevan las distintas opciones de convivencia familiar. Asimismo, se incluye la atención a la resolución de conflictos familiares en situaciones de ruptura familiar y de violencia, con el desarrollo de recursos sociales especializados (mediación familiar, puntos de encuentro familiar) y una mejora en la regulación del Fondo de Garantía de Pensiones de Alimentos a hijas e hijos.

El capítulo II, recoge diferentes previsiones sobre protección económica a las familias, que velará por una acción protectora del sistema de Seguridad Social sobre las personas comprendidas en su campo de aplicación y sobre los familiares o asimilados que tengan a cargo, extendiéndose de manera similar a todos ellos, con independencia del modelo familiar que los relacione.

Igualmente destaca la prestación económica de apoyo a la crianza con un importe de 100 euros mensuales para prácticamente el total de las familias con personas menores de 3 años de edad a cargo, para contribuir a garantizarles un nivel de vida adecuado, ayudando a sus progenitores, tutores, acogedores o guardadores a sufragar los gastos asociados a la crianza, que se concreta bien vía deducción fiscal en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (con opción al abono anticipado mensualmente) bien a través del Complemento de Apoyo a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, con el que aquella es incompatible.

El capítulo III está dedicado a los apoyos a la crianza y cuidado, con especial consideración al derecho de todas las personas a la conciliación en su vida personal, familiar y laboral y al ejercicio corresponsable de estos derechos. En concreto, profundiza en la necesidad de que sean las Administraciones Públicas las que establezcan e impulsen medidas específicas que permitan la conciliación y promuevan la corresponsabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado, garantizando las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres, con el fin de que todas las personas puedan atender sus responsabilidades familiares, progresar profesionalmente y desarrollarse en todos los ámbitos vitales, con previsiones específicas para quienes se encuentren en las situaciones familiares de vulnerabilidad con personas menores a cargo, familias numerosas y supuestos equiparados, o cuando exista una sola persona progenitora.

En este ámbito se establece el apoyo estatal de acompañamiento y apoyo a los primeros 1.000 días para garantizar un buen comienzo en la vida a todas las niñas y niños de nuestro país, a través de la adopción de medidas coherentes e integradas en diferentes ámbitos sociales, sanitarios y laborales. En este último caso, se promoverán las actuaciones necesarias para que las personas, en particular las mujeres, no se vean obligadas a abandonar sus trabajos, ni sus carreras profesionales por razones de cuidado.

Igualmente, se prevé que se incrementará progresivamente, para todos los niñas y niños menores de 3 años, cuyos adultos responsables así lo demanden, la disponibilidad de una plaza en centros autorizados por la administración educativa correspondiente que impartan el primer ciclo de educación infantil, tendiendo a la extensión de la gratuidad y priorizando a las familias en situación de vulnerabilidad. Con ello se aborda uno de los déficits relevantes de nuestro país para dar efectividad a los derechos de niñas y niños a su atención, educación y desarrollo y a la conciliación y corresponsabilidad laboral, familiar y personal de las personas con responsabilidades familiares, que

debe incluir también el desarrollo de un marco de referencia para otros servicios de atención y cuidado de la primera infancia.

Se establece también la previsión de promover la extensión de la oferta de servicios de atención socioeducativa, actividades de ocio, tiempo libre y culturales de niñas, niños y adolescentes en periodos no lectivos; y de medidas de apoyo para familias en las que convivan personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia.

El capítulo se completa con medidas relativas a la racionalización de horarios y a la sensibilización y fomento de la igualdad y la corresponsabilidad familiar, con una atención especial en el entorno empresarial.

El capítulo IV, relativo a los servicios sociales de apoyo a las familias, desarrolla diversos servicios y programas sociales de apoyo a las familias, en el marco de la colaboración interadministrativa, que incluya entre otras medidas la elaboración conjunta de un catálogo de referencia de prestaciones y servicios a las familias, la definición de criterios de calidad en el acceso, ordenación y evaluación de estos servicios y, de manera singular, el impulso del reconocimiento del derecho a los servicios de intervención familiar que aborden de forma preventiva e integral las situaciones que pueden generar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno de origen, mediante programas de preservación y reintegración familiar.

Igualmente, en ese marco de colaboración, se prevé impulsar un plan de apoyo a la parentalidad positiva con el objetivo de proporcionar a las familias un entorno seguro para la crianza y el ejercicio de las responsabilidades parentales, incorporando la prevención de la violencia de género y atendiendo a la perspectiva de diversidad familiar y sexual.

En este ámbito corresponderá a la Administración General del Estado colaborar con las administraciones autonómicas y locales para el mantenimiento y desarrollo de dichos servicios, mediante proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo, así como el desarrollo de servicios de intervención y apoyo familiar tan necesarios, tales como actuaciones profesionales de ayuda psicoeducativa y social, mediación y puntos de encuentro familiar o atención socioeducativa a los menores fuera del horario escolar como complemento de la escolarización obligatoria. Finalmente, se prevé especial atención al desarrollo de programas de apoyo a familias en cuyo seno se produce violencia (de género, contra la infancia, así como filio-parental).

El capítulo V, referido a salud y bienestar, recoge la garantía de un acceso universal a la salud, que incluya, de conformidad con lo previsto en la legislación sanitaria vigente, además de la asistencia sanitaria, la intervención en los determinantes de la salud, entendiendo por tales los factores sociales, económicos, laborales, culturales, alimenticios, biológicos y ambientales que influyen en la salud de las personas, asegurando las mismas oportunidades y resultados de salud a todas las familias, promoviendo también estilos de vida saludables.

Además, se establece el derecho de las personas menores de edad y sus familias a tener acceso universal a una atención al desarrollo infantil temprana, gratuita y de calidad, que garantice una atención continuada a lo largo de toda la vida.

Por último, se hace especial mención a la creación de medidas y programas para promover la salud mental y de apoyo a las familias, mediante la prevención del posible desarrollo de los mismos, en contextos que favorezcan el desencadenante de estos problemas. Se establece que los poderes públicos deberán facilitar a las personas con problemas de salud mental, sus familias y su entorno afectivo la toma de decisiones en relación con los mismos y la atención sanitaria y social adecuadas para proteger su salud y bienestar general, así como servicios y medidas de apoyo paliar y prevenir las dificultades derivadas de la aparición de un problema de salud mental y que favorezcan la convivencia familiar y/o restauren vínculos sanos.

El capítulo VI regula los planes y programas en materia de vivienda, cuyo contenido debe prestar atención a aquellas familias que presenten especiales dificultades en esta materia, singularmente las familias formadas por una persona menor de 29 años y sus descendientes o por dos personas menores de 29 años unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho y sus descendientes, así como las personas que estén bajo su tutela, guarda, acogimiento o curatela representativa o medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad análogas; las familias numerosas y supuestos equiparados; las situaciones familiares en que existan una sola persona progenitora, o cuando existan personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y aquellas en que se produzcan nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples. En este sentido, la norma relaciona determinadas medidas para concretar esta atención especial en materia de límites de ingresos, condiciones de adjudicación de viviendas, acceso a financiación o adecuación de la vivienda a necesidades familiares singulares.

Por otro lado, se prevé que en la elaboración de políticas públicas sobre regulación y ordenación del suelo se contemplará la valoración del impacto convivencial y de género en las familias y en la infancia, que tenga en cuenta las necesidades relacionadas con los cuidados y el uso, accesibilidad y reserva de espacios y entornos habitables para las diversas familias, la infancia, la juventud y las personas mayores. Esta previsión amplia y completa lo que al respecto del impacto de género se prevé en la normativa urbanística (por ejemplo, lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o los artículos 2 y 10 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo).

El capítulo VII se centra en el ámbito de la educación, cultura y ocio familiar y consta de tres artículos. El primero de ellos regula el impulso por parte de las administraciones públicas competentes de medidas para garantizar a las personas responsables de educar a niñas, niños y adolescentes el acceso a recursos materiales, sociales, psicológicos y culturales adecuados, en particular deberán atender a la universalización de los apoyos necesarios a las personas menores de edad de familias vulnerables. En este sentido, las etapas y ciclos educativos no obligatorios, especialmente la educación infantil, contará con una adecuada inversión en recursos suficientes para evitar las desigualdades de acceso, armonizando criterios de admisión, precios públicos, bonificaciones, becas de comedor y exenciones de cuota al menos a aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El segundo artículo establece la diversidad familiar como principio del sistema educativo, como ya figura en el artículo 1.1) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que la modifica (LOMLOE), con la previsión de que deber tener su reflejo tanto en los libros de texto y material educativo como en la propia formación del profesorado y demás profesionales del ámbito educativo.

De manera singular se prevé que, en aras de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad, los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo.

Finalmente la norma prevé la concesión de un trato preferente al público familiar en las actividades culturales, mediante descuentos, prioridades u otras fórmulas, en el acceso a museos, teatros, bienes, servicios y centros culturales de titularidad pública, que deberá concretarse en la normativa específica correspondiente que, de hecho, ya contiene previsiones en este sentido, por ejemplo en la gratuidad de acceso de menores de 18 años a los museos estatales o los beneficios que ya se aplican a familias numerosas.

Asimismo, se prevén determinadas medidas de promoción del ocio, tiempo libre y deportivas dirigidas al público familiar, que deberán implementar las autoridades competentes como pueden ser programas de vacaciones o de respiro para familias con especiales responsabilidades de cuidado o conciliación, descuentos y promociones para familias en transporte público hacia destinos vacacionales, así como en la red de Paradores Nacionales.

Por su parte, el capítulo VIII, referido a familias y TIC, regula las obligaciones que deben asumir las administraciones competentes para fomentar el uso seguro y responsable de Internet por parte de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen con menores de edad. Asimismo, deberán promover el acceso a internet en hogares con menores o personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia, a fin de combatir las brechas digitales, sociales y cognitivas que genera la falta de acceso, así como facilitar el acceso a equipamiento tecnológico a las familias con personas menores de edad en situación de vulnerabilidad o cuando se requieran para apoyar la comunicación, la interacción y la convivencia de algún/a integrante de la unidad familiar.

El Título III se dedica a “**medidas de apoyo a situaciones familiares específicas**”, y desarrolla un régimen de protección específica a colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o que presenten situaciones de necesidad singulares, que complementen o amplíen las que se hubieran previsto con carácter general para todas las familias.

En el capítulo I se aborda la protección a la situación familiar de vulnerabilidad con personas menores a cargo, que viene definida por la concurrencia de algún factor económico y/o social que la coloca en una situación de fragilidad, precariedad, indefensión o riesgo de exclusión. Para ello, se considera que en todo caso la unidad familiar se encuentra en situación de vulnerabilidad económica cuando concurre la situación de vulnerabilidad económica definida en el artículo 11 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta que si algún miembro de unidad familiar tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 75% o incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, ya sea de la persona o de su cuidador, el límite de renta previsto en dicha norma se verá incrementado en un 22 por ciento. Por otro lado, la situación de vulnerabilidad social de la unidad familiar queda referida a la concurrencia, además, de circunstancias sociales adversas derivadas de una situación sobrevenida, negativa no programada, que genera fragilidad, precariedad, indefensión o incertidumbre, de acuerdo con la valoración que realicen los servicios sociales según criterios técnicos.

En este sentido, la protección prevista para estas situaciones familiares incluye una serie de medidas dirigidas a dispensar un trato preferente en las materias de políticas de vivienda (especialmente ante situaciones de desahucios y para el acceso a vivienda social) y suministros básicos (servicios mínimos garantizados de agua, luz, gas, comunicaciones e internet de banda ancha); así como en el ámbito educativo (criterios de acceso a centros educativos, concesión de becas y ayudas, exenciones o bonificaciones en tasas y precios públicos). Se extienden los apoyos necesarios para que los hijos/hijas de familias en situación de vulnerabilidad puedan ejercer plenamente y en condiciones de igualdad su derecho a la educación, incluyendo también las actividades deportivas y de educación no formal organizadas y financiadas por las Administraciones Públicas o que tengan lugar en centros educativos públicos o concertados (actividades extraescolares, campamentos de verano, talleres, actividades deportivas, ludotecas, conservatorios, etc.).

El capítulo II, que consta de un artículo, se destina a las familias numerosas y supuestos equiparados, considerándolas como un colectivo con necesidades singulares derivadas de la necesidad de afrontar los costes y dificultades asociados a la atención, cuidado y educación de un número superior de hijas e hijos, o de circunstancias concurrentes como la existencia de un único progenitor con dos hijos o la situación de discapacidad de ascendientes o descendientes, en el marco que se fije en la normativa estatal, que actualmente está recogido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, que es objeto de modificación y actualización en la disposición final novena. Los beneficios asociados a esta condición deberán tener en cuentas tanto las categorías en que se clasifiquen como las rentas de la unidad familiar en relación con el número de integrantes, tal como ya se prevé en la disposición final segunda de la vigente Ley 40/2003.

El capítulo III se destina a la protección específica de las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora, uno de los aspectos más novedosos de la norma, pues hasta el momento

no se había acometido en España una regulación general integrada en un único cuerpo normativo de la protección social de este colectivo, cuyo número ha ido creciendo en los últimos años de manera importante, suponiendo en la actualidad aproximadamente 1,9 millones de hogares, el 10,10 % del total y el 23% de los hogares con hijos, que en un 81% de los casos cuentan con una mujer al frente. Estas familias presentan además una tasa de riesgo de pobreza relativa y AROPE sensiblemente elevada, doblando prácticamente la tasa media de los hogares en España, por lo que figuran como colectivo especialmente vulnerable y destinatario de medidas previstas en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.

Hasta el momento, únicamente en el marco autonómico varias comunidades autónomas habían aprobado en sus respectivos ámbitos regulaciones propias reconociendo la condición de monoparentalidad en sus territorios: Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad Foral de Navarra. Mediante la presente ley, el derecho estatal da una respuesta a las necesidades de homogeneización en la protección de estas familias, que serán ahora beneficiarias de una acción protectora coherente e integrada en los distintos ámbitos de las administraciones públicas, y que, como se señaló, para los que cuentan con dos hijas o hijos será la prevista para las familias numerosas en los términos establecidos en la *Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas*.

Podrán acceder esta protección quienes estén comprendidos en el ámbito de aplicación previsto en el artículo 33, esto es, las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora, ya sea hombre o mujer, y uno o más descendientes sobre los que tenga la guardia y custodia o la tutela exclusiva, en caso de menores de edad, o descendientes mayores sobre los que tenga curatela representativa o medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad análogas o que conviva con uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o tutela o guarda con fines de adopción, cuando se trata de la única persona tutora, acogedora o guardadora.

Asimismo, a efectos de su protección social y económica, además de las situaciones anteriores, se incluyen también determinados supuestos asimilados aunque haya dos progenitores en la unidad familiar (por ejemplo cuando hay guardia y custodia exclusiva, o en ausencias temporales forzadas – ingreso en prisión, ingreso en centros médicos), mediante la expedición por parte de las Comunidades Autónomas donde resida la familia de un título acreditativo de familia monoparental con validez estatal general. Este título es compatible con los que les pudieran expedir las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y, en su caso, con el de familia numerosa, si bien los beneficios de la misma clase o naturaleza derivados de dichos títulos no serán acumulativos, salvo que en la normativa correspondiente se establezca lo contrario

Este capítulo incluye el régimen jurídico básico del título de familia monoparental, las categorías en que se clasifican, las condiciones que deben reunir sus integrantes para acceder o mantener el título y la dinámica de su reconocimiento, renovación y extinción, así como el régimen sancionador correspondiente, de manera similar a lo regulado para las familias numerosas en la *Ley 40/2003, de 18 de noviembre*.

Se dispone en la norma que, con carácter general, cuando se utilicen criterios económicos para la concesión o mantenimiento de beneficios, se deberá introducir la corrección oportuna para estas familias de forma que, al menos, las sitúen en los mismos umbrales de renta que las familias en que existan dos personas progenitoras con el mismo número de hijas/os. Igualmente, se prevé que tendrán una especial consideración en las medidas que se adopten en casos de emergencia sanitaria, como puede ser en caso de pandemia, en atención a sus específicas responsabilidades de cuidado, a la luz de la experiencia vivida en los periodos de confinamiento y restricciones a la movilidad para combatir la pandemia de COVID19, que ha impactado de forma especial a estas familias.

En materia de vivienda, se preverá en estos casos un incremento del límite de ingresos computables en el diseño de las ayudas para que no se penalice a las familias en que exista una sola persona progenitora que conviven con otras familias o personas. Se les considerará sector preferente para la adjudicación de viviendas protegidas a efectos de la puntuación a asignar en los baremos aplicables,

o, en su caso, se establecerá un cupo reservado de viviendas en las promociones públicas. Se prevé también para estas familias beneficios similares a los previstos para las familias numerosas en esta materia en la vigente Ley 40/2003, de 18 de noviembre.

Este capítulo también contempla que las administraciones públicas facilitarán la empleabilidad de personas progenitoras en solitario. Además, se determina que en las ayudas al emprendimiento se deberán tener en cuenta de forma singular a estas personas. Finalmente se establece una protección singular por parte de las administraciones a las familias que cuenten con personas con discapacidad o situación de dependencia a fin de que puedan acceder al empleo.

En el ámbito educativo, para los criterios de acceso a escuelas infantiles y centros educativos, dispone la norma que se tendrá especialmente en cuenta la condición de disponer del título de familia monoparental, facilitando asimismo la elección del centro que mejor facilite la conciliación. Igualmente se prevé para este colectivo un trato preferente y un sistema de beneficios similares a los previstos para las familias numerosas en el ámbito educativo en relación con becas, ayudas, tasas o precios públicos, así como en la concesión de subsidio por necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad o dependencia.

El capítulo IV se dedica a las situaciones familiares en que existan personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, que constituyen un sector de población numeroso – la cifra de personas beneficiarias con prestación es actualmente de aproximadamente 1.222.100, de las que el 72,22% tienen 65 o más años, mientras que el número de personas con discapacidad se acercaría a los 4 millones de personas - y heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país.

El diseño normativo de su protección parte del ejercicio efectivo del derecho a formar una familia, por lo que las administraciones públicas pondrán en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y oportunidades de estas personas, reconociendo su derecho a formar una familia - matrimonial o de hecho - sobre la base del consentimiento libre y pleno, así como a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener; para ello se les ofrecerán los medios y apoyos necesarios que les permitan ejercer esos derechos.

Asimismo, se velará por el interés superior de niñas y niños por lo que las administraciones públicas competentes asegurarán que las niñas y los niños y otras personas que, sin ser menores, estén bajo la responsabilidad de los adultos con discapacidad y/o en situación de dependencia tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Se prevé expresamente que para hacer efectivos estos derechos, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y las normas administrativas correspondientes, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de estas niñas y niños, las administraciones públicas competentes asegurarán que no sean separados de sus madres o padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes acuerden que esa separación es necesaria en el interés superior de la persona menor de edad siempre que concurran en la valoración otras circunstancias, además de la discapacidad; las administraciones públicas competentes harán todo lo posible, cuando la familia no pueda cuidar de una niña o un niño con discapacidad y/o en situación de dependencia, por proporcionar medidas alternativas de protección dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible o adecuado, dentro de la comunidad en un entorno familiar. Todo ello en atención a lo previsto en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, de 2006.

Además, estas situaciones familiares tienen derecho a acceder a servicios y medidas de apoyo social y/o, en su caso económico, específicos para paliar la sobrecarga y el sobrecoste que supone la atención a sus necesidades, de forma que, en el área laboral y de protección social, se garantizará que las prestaciones de la Seguridad Social tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad y las de sus familias

En el área sociosanitaria, las administraciones públicas promoverán medidas para la atención específica a realidades relacionadas con estas situaciones familiares, entre las que destacan: la consolidación de los sistemas de coordinación entre las administraciones públicas y entre éstas y las entidades del Tercer Sector de acción social para proporcionar servicios de calidad, el desarrollo de servicios de atención (centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, estancias temporales, asistencia personal, etc.), un catálogo de referencia de servicios que incluya servicios y prestaciones destinados a apoyar a las personas cuidadoras dentro de las familias que atienden a personas mayores, dependientes o con discapacidad y medidas de respiro, apoyo psicológico y atención integral destinadas a las familias cuidadoras de personas con grandes necesidades de apoyo. De manera singular, la norma contempla la garantía de acceso de la infancia sorda y sus familias a aprender y utilizar la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral en los distintos ámbitos, mediante profesionales adecuados según precise la familia y las personas menores sordas que convivan con ella.

En materia de vivienda, las administraciones públicas competentes asegurarán el disfrute de una vivienda digna, adecuada y universalmente accesible a las personas con discapacidad.

El capítulo V se dedica a las situaciones familiares en que existan personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, donde se dispone que a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas LGTBI a formar una familia, las administraciones públicas pondrán en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a los bienes y servicios públicos, con el mandato legal expreso de que impulsarán medidas para garantizar la igualdad social y efectiva de las personas que las integran.

Además, las administraciones públicas adoptarán medidas para prevenir la discriminación de estas familias. Y de manera singular, se facilitará por la administración competente la elección de centro educativo en condiciones de igualdad y, asimismo, se promoverán la visibilidad de la diversidad familiar en el currículum educativo, libros de textos y resto de material didáctico, superándose así la falta de referentes y fomentando la normalización también en el ámbito educativo de los distintos modelos familiares en los que crecen niñas, niños y adolescentes.

El capítulo VI se destina a las situaciones familiares en las que se producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples, que representan casi el 5% de los nacimientos, y que no gozaban hasta la aprobación de esta ley de un reconocimiento legal integral en una norma estatal; hasta el momento existían ayudas económicas en el marco del sistema de protección de la Seguridad Social, en supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Ahora serán legalmente consideradas como colectivo de especial protección por sus especiales dificultades derivadas del hecho de tener o adoptar a varias hijas o hijos a la vez, o acoger simultáneamente a dos o más menores por más de un año.

En materia de educación, se promoverá la adopción de medidas específicas, como la concesión de puntuación por hermana/o en el centro educativo a niñas o niños múltiples que accedan a la vez al mismo, la evaluación individualizada de la conveniencia de separar a hermanas/os múltiples en la escuela, la concesión de puntuación específica para estas familias en las solicitudes de acceso para becas de comedor o libros y la aplicación de tarifas especiales en actividades educativas, culturales y deportivas. Asimismo, se prevé trato específico para ellas en materia de transportes y movilidad.

El capítulo VII está dedicado a las situaciones familiares en las que se produzcan adopciones o acogimientos; se garantiza que las administraciones públicas deben facilitar a las familias que adoptan asesoramiento y apoyo continuado, tanto con carácter previo a la adopción, como durante los años que le siguen. De igual forma, las familias de acogida requieren de este proceso de asesoramiento y atención.

La ley incorpora medidas en los ámbitos educativo, sanitario y social, como la protección de datos e información personal en las evaluaciones psicopedagógicas y sanitarios y la no vulneración del derecho de intimidad en relación con las personas menores de edad en adopción o acogimiento. Destaca la previsión de que deben facilitarse evaluaciones y tratamientos terapéuticos

especializados para personas menores y adolescentes que han sufrido adversidad temprana y lo precisen.

Por otro lado, la norma contiene previsiones y garantías en el ámbito sociosanitario en materia de protección de datos y derecho a la intimidad de las personas menores, así como de manera expresa para garantizar la unificación de historias clínicas en los casos de las personas menores de edad que han tenido cambio de apellidos como consecuencia de su filiación adoptiva.

El capítulo VII se dedica a las situaciones familiares con hijas o hijos de uniones anteriores, siendo esta regulación también novedosa en nuestro ordenamiento jurídico. Así, se produce su reconocimiento social y económico expreso, de forma que gozarán de protección específica atendiendo a la naturaleza de las relaciones establecidas entre las personas menores de edad y los cónyuges o parejas de hecho de sus progenitores con los que conviven y que ejercen sobre ellos un rol parental, y se regulará el alcance de las relaciones de las personas menores de edad con las figuras parentales que no tienen atribuida la patria potestad sobre ellos, atendiendo a cada situación familiar de forma individualizada y al interés superior de los menores, que deberán ser escuchados y cuya opinión deberá ser tomada en cuenta.

Además, las administraciones públicas competentes promoverán la atención específica a las necesidades de apoyo psicosocial de estas familias con servicios adecuados, así como un mayor conocimiento de esta realidad familiar creciente en nuestro país pero que apenas tiene reflejo expreso en las estadísticas oficiales.

El capítulo IX se refiere a la situación de las familias residentes en el medio rural, con medidas para reducir la brecha de género, regulando una garantía de acceso a recursos y servicios de atención a sus necesidades, especialmente en los ámbitos de educación, sanidad, vivienda, transportes, comunicaciones y servicios digitales, servicios sociales, atención a la dependencia, prevención de la violencia, conciliación, cultura, ocio y deporte. Se establece también que las administraciones públicas competentes desarrollarán actuaciones orientadas a apoyar el asentamiento y fijación de población rural, con medidas y apoyos específicos en caso de discapacidad o situación de dependencia. Se incluye el mandato de aplicar la perspectiva de género en las políticas familiares dirigidas a la población rural, atendiendo a la alta proporción de mujeres en las actividades de cuidado o su participación, muchas veces como cónyuge o pareja de su titular, en las explotaciones agrarias familiares. Finalmente se prevé la necesidad de desarrollar acciones específicas de sensibilización sobre la aceptación o integración de la diversidad familiar y la incidencia de la violencia de género en el mundo rural.

El capítulo X se destina a proteger la integración social y la reagrupación familiar en las situaciones familiares en que alguno de sus miembros procede de otro Estado o territorio, se encuentran en el exterior o de emigrantes, disponiendo que las políticas migratorias deberán tener en cuenta de forma específica la dimensión y los lazos familiares de las personas migrantes a fin de permitirles elegir si mantener la relación familiar transnacional o reunirse a través de la reunificación familiar, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes que se ven separados de sus respectivas familias cuando están inmersos en un proceso migratorio, de acuerdo con lo previsto en la legislación de extranjería; así como medidas específicas para las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros procede de otro Estado o territorio que no tengan regularizada su situación administrativa y que afectan de manera especial a las personas menores de edad (derecho a NIE propio);. Asimismo, se incluyen referencias a las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros ostenta la ciudadanía española en el exterior y las situaciones familiares de emigrantes retornados, , entendiéndose por tales aquéllas en las que alguno de sus miembros ostenta la ciudadanía española durante el primer año tras su retorno a España, después de residir, al menos, un año en el exterior a fin de ofrecerles protección y atención específicas.

El título culmina con un capítulo IX dedicado a otros colectivos con necesidades singulares de apoyo, como la población penitenciaria, con respecto a la cual se garantiza el mantenimiento de las relaciones familiares con sus parejas, hijas/os y otros familiares y allegados, conforme a la legislación penitenciaria. Finalmente, el capítulo contiene una referencia al mantenimiento de los

lazos familiares y, especialmente filiales, cuando ello sea adecuado, en caso de que algún integrante de la familia se encuentre en situación de institucionalización.

El **Título IV** dedicado a la “**coordinación, cooperación y participación social en las políticas familiares**”, parte de la obligación de las Administraciones Públicas de integrar la perspectiva familiar en sus decisiones y actuaciones sectoriales, teniendo en cuenta el impacto de las políticas sociales y económicas en las familias, con el objetivo último de mejorar sus condiciones de vida y garantizar la igualdad de trato de la ciudadanía con independencia de su modelo familiar.

En este sentido, ya existe la previsión legal de que “las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia” (Disposición adicional décima, Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, incorporada en la Disposición Final 5.3 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). Igualmente, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado debe ir acompañado cada año de un informe de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia (artículo 37.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tras la modificación operada por la disposición final décima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021). De forma que lo que ahora se establece en la norma proyectada en la extensión con alcance general de la perspectiva familiar no sólo en la actividad normativa sino en el conjunto de las decisiones y políticas que se adopten, especialmente en el ámbito de las políticas sociales y económicas reconociendo así la transversalidad de las políticas que afectan a las familias.

Precisamente por ese carácter transversal y pluridimensional, la norma prevé el establecimiento efectivo de cauces de colaboración y coordinación eficientes entre todos los organismos públicos competentes, para lo que se diseña una arquitectura institucional específica tanto en el ámbito administrativo como en el de la participación social.

Así, por una parte, se prevé la creación de la Comisión Interministerial de Familias como órgano colegiado de coordinación de las actuaciones en materia de políticas familiares que se impulsen en el ámbito de la Administración General del Estado, con competencias de propuesta y seguimiento de las mismas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 21 y 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Por otro lado, se establece que el existente Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia sea el órgano colegiado de cooperación, coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de políticas familiares, a la vez que se prevé que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) será la entidad preferente para articular la cooperación y colaboración de las corporaciones locales en esta materia.

En lo que afecta al ámbito de la participación social, se prevé que el Consejo Estatal de Familias será el órgano colegiado permanente de participación social y consulta de la Administración General del Estado, para la planificación y desarrollo de las políticas que le afecten, quedando adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en su condición de departamento ministerial competente en materia de familia y su diversidad.

Recoge también la norma el papel que desempeña el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia, órgano permanente y estable de consulta, representación y participación de las niñas, niños y adolescentes (regulado en la Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre) para proponer a los órganos de la Administración General del Estado y otros organismos de ámbito nacional iniciativas, propuestas y recomendaciones para promover los derechos de la infancia y la adolescencia en el marco de actuación definido en esta Ley.

Completa ese diseño institucional el Observatorio Estatal de Familias, como órgano de carácter asesor y de apoyo para el análisis, la investigación, el estudio, el seguimiento, la evaluación y la

propuesta técnica de actuaciones en materia de familias, en los términos que reglamentariamente se definan.

Debe señalarse como antecedente que ya el Real Decreto 613/2017, de 11 de mayo, creó y reguló un Consejo y Observatorio Estatal de Familias, que mantuvo su funcionamiento unos años, hasta que a finales de 2011 finalizó el mandato de sus vocales no natos, permaneciendo inactivo desde entonces, en un contexto en que tanto el proceso de simplificación y reforma de las estructuras administrativas como de cambios organizativos en la estructura y competencias de los departamentos ministeriales condicionaron la viabilidad de su regulación y composición. Se considera por tanto que debe regularse ex novo ambos órganos separando claramente sus funciones, siendo el Consejo estatal de Familias órgano de participación social y consulta y el Observatorio, un órgano de carácter asesor y técnico de análisis y evaluación.

Finalmente se encomienda a las administraciones públicas la labor de difusión, promoción y sensibilización social sobre la diversidad familiar y al apoyo a las familias y la promoción de la colaboración financiera y técnica con entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas y actividades en el marco de los valores y principios definidos en esta Ley, a fin de fomentar la iniciativa social en materia de apoyo a las familias y su diversidad, que deberá concretarse a través de los distintos instrumentos previstos legalmente para ello, como son, entre otros, las subvenciones o los convenios.

La **disposición adicional primera** prevé que el desarrollo de las medidas, derechos, garantías, servicios y apoyos que se contemplan en la presente Ley queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias de las Administraciones Públicas competentes.

La **disposición adicional segunda** indica que las referencias que el ordenamiento jurídico haga a las familias numerosas se entenderán realizadas a las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, cuya denominación modifica esta ley.

La **disposición adicional tercera** contiene la previsión de analizar, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, la extensión de hasta los 26 años de edad en la fecha del fallecimiento del causante la posibilidad de ser beneficiario de la pensión o prestación de orfandad del sistema de Seguridad Social.

La **disposición adicional cuarta** prevé la elaboración, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, de un instrumento de valoración que sirva de referencia para unificar criterios diagnósticos en el ámbito de los Servicios Sociales y que pueda utilizarse para valorar la vulnerabilidad social de las familias y que será debatido en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La **disposición transitoria primera** establece el mantenimiento de la vigencia de aquellas adaptaciones de jornada que estuvieran aplicándose en la fecha de entrada en vigor de esta ley. En este último caso se explicita que será de aplicación lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 34.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

La disposición **transitoria segunda** prevé la posibilidad de continuar con los permisos de los que se estuviese haciendo uso, sin que ello afecte en ningún caso al disfrute íntegro del permiso parental.

La disposición **transitoria tercera** se refiere al mantenimiento de la vigencia de los actuales títulos de familia numerosa hasta la fecha en que les correspondiera su renovación o extinción, siempre que por efecto de las modificaciones introducidas en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas no les correspondiese quedar clasificadas en una categoría diferente, en cuyo caso se deberá expedir un nuevo título de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza en la nueva categoría donde se clasifiquen. Asimismo, y, en consecuencia, en esta disposición se regula también el régimen aplicable a las familias numerosas que hasta este momento tuvieran reconocida la categoría general pero que quedan clasificadas como de categoría especial según lo previsto en la nueva redacción dada en la disposición final novena.

Por último, cabe destacar la modificación llevada a cabo de diferentes cuerpos normativos a través de las disposiciones finales de la ley.

Así, la **disposición final primera** realiza las modificaciones necesarias en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para adaptarla a las previsiones de la ley. Así, se incorporan las modificaciones necesarias para introducir la figura de la pareja de hecho en el reconocimiento de prestaciones, como la pensión de viudedad. Entre otras modificaciones que incluyen mejoras en determinadas prestaciones del sistema, como la extensión del subsidio no contributivo por maternidad a nuevos supuestos hasta ahora no protegidos (adopción, acogimiento), o la extensión hasta los 26 años de edad de la prestación por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave, en caso de discapacidad de, al menos, el 65% del hijo o hija.

La **disposición final segunda** introduce modificaciones en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, para garantizar su coherencia con las modificaciones planteadas, respectivamente, en los artículos 53.4 y 55.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

La **disposición final tercera** incluye las adaptaciones necesarias en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a fin de transponer la Directiva UE 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Así, se modifica el artículo 4.2, referente a los derechos de las personas trabajadoras en la relación laboral, especificando que el trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de sus derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida familiar y laboral será constitutivo de discriminación por razón de sexo. De este modo se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que establece la obligación de que los Estados miembros configuren mecanismos para que no sufran perjuicio alguno ni trato discriminatorio las personas que ejerzan sus derechos de conciliación. Esta formulación es consecuente con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 8 de mayo de 2019, C-486/18, asunto Praxair) y del Tribunal Constitucional (STC 79/2020, de 2 de julio de 2020) en las que se ha establecido que, sobre la base de una mayor afectación femenina, la discriminación por ejercicio de derechos de conciliación puede ser constitutiva de discriminación indirecta por razón de sexo.

También se opera una modificación en el artículo 34.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto ya se modificó por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, a efectos de incrementar el ámbito del derecho a la adaptación de la jornada de las personas con dependientes a cargo, pero requiere de ajustes puntuales a efectos de que se acomode totalmente a las previsiones del artículo 9 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre fórmulas de trabajo flexible.

El vigente artículo 34.8 ET adolece de ciertas dificultades interpretativas con respecto a su alcance que es imprescindible aclarar y justamente lo anterior implica que requiere ajustes técnicos para cumplir, sin lugar a dudas, de manera íntegra con el mandato de transposición de la Directiva.

Así y en relación con el ámbito subjetivo de aquellas personas cuyas necesidades de cuidado permiten la solicitud de la adaptación, es necesario que quede clara la relación de sujetos y causas, de ahí los cambios del párrafo segundo del artículo 34.8.

Igualmente se hace necesario por razones de claridad y mejora técnica, de un lado, y para garantizar el derecho individual que asiste a la persona trabajadora a solicitar las formas de trabajo

flexible, de otro, se recoja o no en la negociación colectiva-circunstancias ambas establecidas con un carácter meridiano en la directiva- introducir los cambios precisos.

Cierto es que el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, modifica los preceptos correspondientes en relación con los derechos socio-laborales vinculados a la maternidad y la paternidad para promover la conciliación y el principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores. Y también cambia la redacción del artículo 34.8 ET, pero conserva la remisión a la negociación colectiva para que sea donde se pacten los términos del ejercicio de este derecho de adaptación de la jornada con fines de conciliación de la vida laboral y familiar. En realidad, según la dicción literal del precepto, el régimen legal ampara el derecho de las personas trabajadoras “a solicitar” los cambios que considere oportunos en la duración y distribución de su jornada laboral para hacer efectivos sus derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Esto ha llevado a buena parte de la doctrina a criticar la débil exigibilidad para el solicitante, derivada de esta fórmula que parece ser más bien “una especie de flexibilidad inversa”, frente al reconocimiento indubitado de otros derechos recogidos en el art. 37 ET.

Se trata, pues, de un derecho a solicitar la adaptación que se quiere se utilice de manera ordinaria y prioritaria para mantener la carrera profesional de las mujeres, que debe resolverse con diligencia para permitir su ejercicio efectivo y que no debe tener otras restricciones que las imprescindibles, de manera que se garantice que los puestos de trabajo se adapten a las distintas vicisitudes derivadas de la crianza de menores y cuidado de dependientes y mayores.

Se modifica el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su letra a), para recoger otras formas de convivencia de manera similar a como se amplía el ámbito subjetivo de la directiva y la relación de familiares recogida en el artículo 3.1.e) , así como en su letra b), a efectos de transponer al ordenamiento español el permiso de cuidadores previsto en el artículo 6 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. Así, se amplía el número de días y también el ámbito subjetivo de este permiso, incorporando a las personas convivientes sobre las que se llevará a efecto el cuidado efectivo, dando cumplimiento de este modo a lo establecido en el artículo 3.1.c) de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, acerca del abanico de las posibles personas beneficiarias trascendiendo el ámbito de las unidades familiares de convivencia. Por lo demás, el precepto se completa para incluir en la cobertura a la pareja de hecho.

Se introduce, por su parte, una nueva letra b bis) para separar del anterior el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuya causa es diversa, lo que aconseja esta nueva distribución sistemática.

Se introduce un nuevo artículo 37.9 en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para transponer al ordenamiento español el artículo 7 de la Directiva 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que requiere que los Estados miembros establezcan permisos en aquellos casos de fuerza mayor familiar que requieran la presencia de la persona trabajadora. Se establecen como retribuidas, a fin de asegurar el ejercicio corresponsable, las horas equivalentes a cuatro días al año, sin perjuicio de lo que al respecto pudieran establecer los convenios colectivos.

La Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, establece en su artículo 5.5 que debe motivarse el aplazamiento del disfrute de los permisos parentales cuando el disfrute del permiso parental en el período solicitado altere seriamente el buen funcionamiento de la empresa, debiendo justificarlo por escrito. Es por ello que se modifican los artículos 37.4 y 6, y 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para que, en caso de coincidencia en la misma empresa del disfrute de ambas personas progenitoras de los permisos de lactancia, reducción de jornada o excedencia -todos ellos permisos o periodos de ausencia relacionados con la familia- la empresa deba aportar un plan de disfrute alternativo si concurren razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la misma, dando así cumplimiento a las exigencias del citado precepto.

También se modifican los artículos 37.6 y 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para matizar el derecho a la reducción de jornada y excedencia para cuidado de dependientes por afinidad. El reconocimiento de estos derechos que van conectados a periodos largos de duración en los que la persona sufre perjuicios en sus ingresos y puede sufrir perjuicios en sus expectativas profesionales debe tener una escrupulosa redacción que evite la perpetuación de roles y que promueva la corresponsabilidad. Dado que suele ser más frecuente que sean las mujeres las que acceden a estas situaciones para el cuidado de sus familiares políticos y es poco frecuente que suceda, al contrario, procede que se limite, en principio, el derecho a la reducción de jornada y a la excedencia al cuidado de los familiares por consanguinidad. Es una corrección necesaria para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado familiar que requiere la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. Ello, no obstante, y a efectos de evitar la desprotección, se incluye el parentesco de afinidad para el acceso a estos derechos de cuidado cuando no existieran parientes por consanguinidad de la persona que lo requiere. Se trata de situaciones que, por sus características, requieren este ajuste, lo que no sucede en el caso del permiso contemplado en el artículo 37.3. b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que, por ser de corta duración y por referirse a situaciones excepcionales que implican cierta gravedad o urgencia, procede reconocer tanto a familiares consanguíneos o afines, dado que en estos casos se debe favorecer que el cuidado se extienda y se reparta entre el máximo número posible de personas. Atendiendo a los objetivos de la directiva en torno a la igualdad y a la mayor utilización de los permisos por parte de los trabajadores varones, la modificación anterior es congruente y en absoluto supone un retroceso en el nivel general de protección.

Se introduce una modificación en el artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de manera que el otro progenitor pueda anticipar en diez días el comienzo del disfrute del permiso, flexibilidad que resulta coherente con el objeto de cuidado de la madre biológica durante este periodo.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 5 y 8 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, se regula, a través de la introducción de un nuevo artículo 48 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, un permiso parental específico que se ocupa del cuidado de los hijos e hijas, o de los menores acogidos por más de un año, y hasta la edad de 8 años, pero que presenta la peculiaridad, de acuerdo con las exigencias de la directiva (“Los Estados miembros deben fijar en un nivel adecuado la remuneración o prestación para el período mínimo no transferible de permiso parental que se prevé en la presente Directiva”).

Se modifican los artículos 53.4 y 55.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para asegurar el pleno ajuste de nuestro ordenamiento jurídico al artículo 12 de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, en lo relativo a la protección contra el despido derivada del disfrute de permisos de conciliación incluyendo los nuevos; en este sentido, se prevé la nulidad del despido relacionado con el disfrute de dichos permisos.

Asimismo, se introduce una disposición transitoria decimoquinta en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la aplicación gradual del nuevo permiso parental retribuido previsto en el artículo 48 bis, cumpliéndose así con las exigencias de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, según la cual para el cumplimiento de la retribución económica correspondiente a las ocho semanas del permiso parental, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2 en relación con el 8.3 de la citada directiva, los Estados Miembros cuentan un plazo de transposición que termina el 2 de agosto de 2024.

La **disposición final cuarta** modifica el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para introducir modificaciones en el régimen de permisos por motivos de conciliación como, por ejemplo, el nuevo permiso parental en paralelo a lo previsto en la modificación acometida en el Estatuto de los Trabajadores en la disposición final segunda.

La **disposición final quinta** modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, a fin de ampliar, incluyendo tanto al cónyuge como a las parejas de hecho registradas, los supuestos en que es posible beneficiarse del derecho a la excedencia por agrupación familiar y por cuidados familiares, en términos que no contempla la actual normativa militar.

La **disposición final sexta** modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, de forma acorde con las modificaciones llevadas a cabo en esta Ley en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a fin de reconocer determinados supuestos de prestación por parto, adopción o acogimiento familiar permanente o temporal o guarda con fines de adopción múltiples, haciendo extensibles dichos supuestos al ámbito de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

La **disposición final séptima** adapta los artículos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado aprobado por el Real Decreto Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con el objetivo de igualar los derechos y deberes de las parejas de hecho con los de las personas unidas por vínculo matrimonial.

La **disposición final octava** modifica diversos aspectos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a fin de dar nueva regulación a la actual deducción de maternidad ampliándola a nuevos supuestos y a las deducciones por familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza o personas con discapacidad a cargo, que incluye además de las familias numerosas las que tengan carácter monomarental o monoparental con dos hijos..

En la **disposición final novena** se introducen una serie de modificaciones de la ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, con el objeto de corregir las deficiencias técnicas detectadas durante su vigencia, de ampliar y mejorar la cobertura que dispensa dicha norma, así como de incorporar demandas que colectivos afectados han hecho reiteradamente a las administraciones públicas, tanto el propio de familias numerosas como en especial el de familias con una sola persona progenitora. Esta norma ha sido hasta ahora la única que con carácter general y transversal ha regulado a nivel estatal la protección a las familias en nuestro país, si bien a lo largo de los años ha ido ampliando su ámbito subjetivo para atender a las necesidades de familias con un número menor de hijas o hijos del que da derecho como regla general a la condición de familia numerosa (es decir, tres) pero que el legislador ha considerado que eran merecedoras de ello, como sucede en los casos de discapacidad de alguno de los descendientes o ascendientes o en caso de viudedad, con dos hijos a cargo. Esta circunstancia ha motivado reclamaciones de otros colectivos familiares para acceder a este régimen de protección social y económico o a que se definiera uno específico para ellos, con el efecto de ir desvirtuando el concepto original de familia numerosa (básicamente cuantitativo) y de ir generando sentimientos de agravios comparativos y de falta de equidad en la protección a las familias en nuestro país.

Por su parte, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, modificó en su Disposición Final Quinta de manera relevante la ley de familias numerosas y dirigió un mandato legal expreso al Gobierno para que se acometiera una revisión de la Ley de familias numerosas, a lo que esta ley da cumplimiento en esta disposición final.

En concreto, se modifica el título de la norma, que pasa a denominarse “Ley de protección a familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza” y se incluye un nuevo concepto legal de familia con especial necesidad de apoyo: se añade a las personas tutoras, acogedoras o guardadoras; en los supuestos equiparados se fija el grado de discapacidad en el 33% en lugar del vigente 65% y se incluye a las personas progenitoras en situaciones familiares en que exista una sola con dos hijos o hijas; se regulan también los supuestos de custodia compartida, para que puedan coexistir dos títulos, en casos de ruptura de la convivencia, y se pueda figurar en dos unidades familiares al mismo tiempo y se equiparan las parejas de hecho a las conyugales en el trato legal. En general, se incorpora una nueva regulación más beneficiosa de las categorías en que se clasifican las familias,

con ampliación de supuestos y modificación de umbrales, destacando la reducción del de hijos/as exigidos para que la familia numerosa pueda acceder a la categoría especial, de 5 a 4 hijas/os, y de 4 a 3 en caso de parto múltiple.

Además, se realizan adaptaciones terminológicas para incorporar un lenguaje más inclusivo y acorde con las actuales instituciones de derecho civil; se incluye expresamente la certificación en formato digital del título; se reconoce el mantenimiento de la categoría especial reconocida hasta el último hijo/a.

La **disposición final décima** modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo., a fin de posibilitar la extensión de las bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se prevean para familias numerosas a otros casos equiparados que tengan la consideración de familias con necesidades especiales de crianza.

La **disposición final undécima** se modifica el primer párrafo de la Disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, relativa el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos para aumentar su acción protectora.

En el mismo sentido y para su adaptación, la **disposición final décimo segunda** modifica el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos para ampliar su ámbito de cobertura, a fin de facilitar el acceso a los anticipos, flexibilizando algunas de las condiciones inicialmente previstas y agilizando los plazos para el procedimiento, así como mejorando la intensidad protectora en cuanto a importes y duración de los anticipos.

En la **disposición final décimo tercera** se establecen los plazos concretos en los que se deberán llevar a cabo determinadas modificaciones normativas. Así, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley el Gobierno deberá llevar a las Cortes un proyecto de ley con las modificaciones oportunas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 (adaptaciones normativas para garantizar la igualdad de trato de los descendientes con independencia del estado civil de sus progenitores y creación del Registro Estatal de Parejas de Hecho).

Por otro lado, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley se deberá dar efectividad al derecho reconocido en el apartado 1 del artículo 14 (garantía de plazas en centros que impartan primer ciclo de educación infantil para todos los niños y niñas menores de 3 años).

En el plazo que se acuerde en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se modificará la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado 5 del artículo 14 (derecho de acceso a servicios de seguimiento, apoyo y respiro para las personas cuidadoras de personas dependientes beneficiarias de una Prestación Económica por Cuidados en el Entorno Familiar).

La **disposición final décimo cuarta** establece los títulos competenciales, indicando que esta Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1. 1.^a, 7.^a, 13.^a, 17.^a y 18.^a de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación laboral; el establecimiento de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios, respectivamente.

De lo expuesto en el apartado anterior se exceptúan los siguientes artículos:

- a) El artículo 60, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.2ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- b) Los artículos 6, 8, 35, 55.1 y 55.2, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.8ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan
- c) El artículo 61, que se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación penitenciaria.
- d) Las disposiciones finales segunda y tercera, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
- e) El artículo 58 y las disposiciones finales octava y décima, que se amparan en el artículo 149.1.14ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de hacienda general.
- f) Los artículos 18, 19, 20 y 53, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.16ª de la Constitución Española atribuye al Estado para establecer las bases y coordinación general de la sanidad.
- g) Los artículos 26 y 27, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.21ª de la Constitución Española atribuye al Estado sobre el régimen general de comunicaciones.
- h) Los artículos 23, 24, 31, 41, 48.2 y 51.1, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.30ª de la Constitución Española atribuye al Estado para regular las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución.

La **disposición adicional décimo quinta** sobre incorporación del derecho de la Unión Europea, en concreto, se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

La **disposición final decimosexta** autoriza al Consejo de Ministros y a los titulares de los Ministerios en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo reglamentario y ejecución de la ley.

Finalmente, la **disposición final decimoséptima** establece la entrada en vigor de la ley a los veinte días (o al día siguiente) de su publicación en el BOE, sin perjuicio de aquellas previsiones cuya efectividad quede supeditada a la aprobación de las modificaciones normativas previstas en esta Ley

2º Referencias al derecho nacional e internacional

Derecho nacional: la protección social, jurídica y económica a la familia prevista en el art. 39 CE ha encontrado su desarrollo en diversas normas, entre las que cabe señalar:

- la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil, en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio y la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
- Ley 1/1982 de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la propia imagen
- Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil en materia de tutela.
- Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos de Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de adopción.
- Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código Civil en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo
- Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En los Capítulos II y III del Título XII, sobre alteración de la paternidad, estado y condición del menor y derechos y deberes familiares (quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio, sustracción de menores y abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección).
- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
- Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas.
- Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género.
- Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, para posibilitar que la institución matrimonial se extienda a contrayentes del mismo sexo.
- Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio
- Ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana asistida de 26 de mayo.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Dependencia
- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley 54/2007, de 28 de diciembre de adopción internacional
- Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada por Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
- Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Cabe señalar asimismo las normas de carácter sectorial referidas a protección social a la familia contenidas en textos refundidos como son:

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

En el ámbito autonómico, diversas comunidades autónomas han aprobado normas de protección a las familias en sus ámbitos territoriales y materiales de competencias con un enfoque global similar al de la ley estatal proyectada:

- Ley 18/2003, de 4 de julio, de Apoyo a las Familias (Cataluña)
- Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León
- Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias (País Vasco)
- Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia
- Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón

- Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias (Illes Balears)

También son numerosas las comunidades autónomas que cuentan con normativa específica en materia de parejas de hecho, mediación familiar, apoyo a la maternidad, apoyo a familias monoparentales o que incluyen previsiones específicas para la atención a las familias en sus leyes de servicios sociales, que son cuestiones que son abordadas también en la norma proyectada.

Derecho internacional: Sirven de marco para este anteproyecto de Ley de Familias las referencias a la obligación de proteger a las familias contenidas en Tratados Internacionales de gran relevancia, como son:

- Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 12, 16 y 25, entre otros)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10.3)
- Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989

En el ámbito europeo también los textos normativos abogan por un enfoque integrado y coherente de las políticas familiares, reconociendo el derecho de las familias a su protección social, jurídica y económica:

- Carta Social Europea, 1961 (artículo 16)
- Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miembros Nº R (94) 14 sobre políticas familiares coherentes e integradas, con ocasión del Año Internacional de la Familia proclamado por Naciones Unidas.
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000 (artículo 33)

Son innumerables las normas comunitarias referidas a aspectos sectoriales de la protección familiar como son la conciliación de la vida familiar y laboral, las relaciones filioparentales, la protección a la maternidad y la infancia, el cuidado de menores o de personas en situación de dependencia, la protección social, las migraciones, la educación o la salud, entre otras materias. Todas ellas son normas que se han incorporado al Derecho nacional ya sea por ser de aplicación directa en todos los Estados Miembro ya sea por haber sido objeto de transposición a fin de ofrecer a las familias mejores condiciones de vida o mejorar sus relaciones.

En la parte relativa a la transposición de la directiva

Desde una perspectiva comunitaria, como se ha señalado, el anteproyecto tiene por objeto la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por lo que su aprobación resulta necesaria para asegurar la congruencia del ordenamiento nacional con estas directivas europeas. Se recoge a continuación la tabla de correspondencias entre las modificaciones adoptadas y las disposiciones de las directivas cuya transposición se requiere.

TABLA DE CORRESPONDENCIAS		
NORMA NACIONAL	ARTÍCULO O DISPOSICIÓN DE LA NORMA NACIONAL	ARTÍCULO DE LA DIRECTIVA
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.	Artículo 4.2	Artículo 11 de la Directiva (UE) 2019/1158.
	Artículo 34, apartados 8	Artículo 9 de la Directiva (UE) 2019/1158.
	Artículo 37.3.b)	Artículos 3.1.c) y 6 de la Directiva (UE) 2019/1158.
	Artículo 37.3.b) bis	Se sitúa en esta nueva letra, para mejorar la sistemática de la norma, el anterior permiso por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el

		segundo grado.
	Artículo 37, apartados 4 a 6	Se incluyen modificaciones precisas para garantizar la motivación del aplazamiento de la empresa de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2019/1158
	Artículo 37.9	Artículo 7 de la Directiva (UE) 2019/1158.
	Artículo 46.3	Garantía de los derechos de corresponsabilidad y de conciliación de la vida familiar y laboral. Artículo 5.5 de la Directiva
	Artículos 45.1 y 48 bis	Artículo 5 y 8 de la Directiva (UE) 2019/1158.
	Artículos 53.4 y 55.5	Artículo 12 de la Directiva (UE) 2019/1158.

Por su parte, la congruencia con el ordenamiento jurídico nacional viene dada por la adecuación al ordenamiento laboral español respecto de los derechos de conciliación ya reconocidos, todo lo cual se complementa y desarrolla, corrigiéndose solo en los extremos necesarios para conseguir una transposición adecuada.

Así, el artículo 4 de la citada directiva relativo al permiso de paternidad se incluye en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores; la parte no retribuida del permiso parental con las modificaciones introducidas en los artículos 37.4, y 6 y 46.3 del Estatuto de los Trabajadores; y el artículo 11 de la directiva relativo a las medidas para prohibir la discriminación en esta materia ya está incorporado a través de los artículos 3 y 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y del artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores.

Por último, el artículo 13 de la directiva sobre sanciones, ya está incorporado a través de los artículos 7 y 8 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

En relación con los derechos laborales recogidos en artículo 10 de la directiva, se establecen en los diferentes regímenes jurídicos de los permisos de lactancia, reducción de jornada y excedencias.

Es importante subrayar, por último, la congruencia del anteproyecto de ley con la citada Ley Orgánica de 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

3º Base jurídica y rango.

La reforma planteada se realiza mediante Ley ordinaria, sobre la base, por una parte, de que no se regulan materias que constitucionalmente deben ser reguladas por Ley Orgánica (artículo 81.1 CE), y por otro lado por concretarse mandatos contenidos en el artículo 39 CE, que forman parte de los denominados "principios rectores de la política social y económica", contenidos en el Capítulo Tercero del Título I, artículos 39 a 52, en la medida en que según el artículo 53.3 CE, "El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen".

Asimismo, en el anteproyecto se modifican varios cuerpos legales a los que nuestro ordenamiento jurídico ha atribuido carácter de Ley ordinaria, véase por ejemplo las modificaciones llevadas a cabo del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado aprobado por el Real Decreto Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril; Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas o el propio Código Civil, entre otras leyes, por lo que resulta necesario que dichas modificaciones se lleven a cabo a través de una norma que posea el mismo rango.

En atención a este rango normativo se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el que se especifica cuál deba ser el que corresponda a normas con rango de Ley y reglamentos: estudios, consultas, memoria, etc.

4º Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias.

Tal y como se dispone en la disposición final duodécima, el contenido fundamental de esta Ley se ampara en la competencia exclusiva que el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, como título competencial prevalente.

Igualmente, como títulos competenciales prevalentes, también se fundamenta la Ley en la competencia exclusiva del Estado para establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13ª); en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (artículo 149.1.17ª) y para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios (artículo 149.1.18ª).

No obstante, al tratarse de una norma que abarca diversos ámbitos de actuación para lograr una protección jurídica, social y económica integral que englobe a todos los modelos de familia que se reconocen, muchas de sus disposiciones son dictadas en base a otras competencias que la Constitución atribuye con carácter exclusivo al Estado, sin perjuicio de las competencias de desarrollo y ejecución que ostenten las Comunidades Autónomas, en su caso.

Así, las siguientes disposiciones se basan en los siguientes títulos competenciales:

- a) El artículo 60, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- b) Los artículos 6, 8, 35, 55.1 y 55.2, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan
- c) El artículo 61, que se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación penitenciaria.
- d) Las disposiciones finales segunda y tercera, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
- e) El artículo 58 y las disposiciones finales octava y décima, que se amparan en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de hacienda general.

- f) Los artículos 18, 19, 20 y 53, y la disposición final decimotercera que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.16.^a de la Constitución Española atribuye al Estado para establecer las bases y coordinación general de la sanidad.
- g) Los artículos 26 y 27, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.21.^a de la Constitución Española atribuye al Estado sobre el régimen general de comunicaciones.
- h) Los artículos 23, 24, 31, 41, 48.2 y 51.1, que se amparan en la competencia que el artículo 149.1.30.^a de la Constitución Española atribuye al Estado para regular las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución.

5º Normas que quedan derogadas.

De acuerdo con lo establecido con carácter general en el artículo 2.2 del Código Civil, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta ley.

6º Justificación de la entrada en vigor de la norma y vigencia de la misma.

De acuerdo con el apartado b) del artículo 2.1 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la vigencia de la norma que se propone será indefinida.

Este carácter indefinido es compatible con la mejora de las medidas reguladas en la Ley.

Por otro lado, según el artículo 2.1 del Código Civil “Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa”, y así se ha previsto en la disposición final décimo séptima de este proyecto, sin perjuicio de aquellas previsiones cuya efectividad quede supeditada a las modificaciones normativas posteriores previstas en la disposición final décimo tercera.

III) Descripción de la tramitación.

El borrador del anteproyecto ha sido elaborado por un equipo formado por personal del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Ministerio de Igualdad.

El anteproyecto se somete, durante su tramitación, a la consideración de la sociedad y de los departamentos ministeriales, así como de los organismos de asesoramiento o participación de la Administración. En este proceso abierto y participativo se recogen y analizan las propuestas recibidas y, de acuerdo con los objetivos definidos por el Ministerio, se aprovechan aquellas aportaciones que pueden suponer un claro enriquecimiento del texto, por lo que el anteproyecto se encuentra en continua evolución en este recorrido.

1. Trámite de Consulta Pública.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustanció del 25 de junio al 9 de julio de 2021, ambos incluidos, una consulta pública en la web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En respuesta a dicha consulta se recibieron un total de ciento sesenta y cinco aportaciones, cuyo resumen se recoge en el anexo I, correspondientes a:

- Dos entidades públicas: Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid-Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad y Dirección General de Derechos de Personas con Discapacidad - Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- Dos colegios oficiales: El Consejo General de los Colegios Oficiales de Psicólogos y del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales.
- Cincuenta asociaciones: Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), Federación de asociaciones de familias monoparentales (FAMS), Stei intersindical, Fipros, Comité reivindicativo y cultural de lesbianas (CRECUL), Federación de asociaciones de mujeres rurales (FADEMUR), Federación española de familias múltiples, Asociación de familias y mujeres del medio rural (AFFAMER), Atención y mediación para el cambio (ATYME), Confederación española de familias de personas sordas (FIAPAS), Federación de asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM), Fundación diagrama intervención psicosocial, Asociación familias numerosas Madrid, Asociación gallega de familias numerosas, Confederación estatal de personas sordas (CNSE), Fundación Aequitas, Confederación española personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE), Instituto de política familiar, Asociación familias numerosas Málaga, Asociación familias numerosas Sevilla (FANUSE), Federación andaluza familias numerosas, Asociación familias numerosas Almería, ONCE, Asociación de madres solas (AMASOL), Confederación ASPACE, Coordinadora de asociaciones de adopción y acogimiento (CORA), Plataforma por la atención temprana y los derechos de la infancia con diversidad funcional (PATDI), Asociación estatal de acogimiento familiar (ASEAF), Fundación de familias monoparentales Isadora Duncan, Asociación salud y familia, Save The Children, Asociación gallega de familias de acogida (ACOUGO), Federación española de familias numerosas, UNICEF España, Cruz Roja Española, Federación Española de enfermedades raras (FEDER), Asociación de familias numerosas de la rioja (AFNR o FANURIOJA), Federación de asociaciones de familias numerosas de Euskadi, Confederación autismo España, Fundación secretariado gitano, Unión de asociaciones familiares (UNAF), Asociación de familias monoparentales con diversas capacidades-capacidad positiva, Copaping, Asociación española de padres solteros (MONOPAPIS), Asociación de familias LGTBI-(GALEHI), Sociedad española de cuidados paliativos pediátricos (PEDPAL), PETRA-Maternidades Feministas, Asociación Madres Solteras por elección, Asociación Madres Solas-Marisa Sendón.
- Ciento doce propuestas de particulares.

2. Trámite de información pública. (Pendiente este trámite)

Por otro lado, y al tratarse de una disposición que puede afectar a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se ha publicado el anteproyecto de ley en la web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del XXXXXXXX de 2022, ambos inclusive.

Durante dicho trámite se recibieron XX aportaciones de distintas entidades y particulares.

3. Se ha solicitado **informe a las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla**, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, **y a las entidades locales**, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Pendiente.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, **durante el proceso se van a solicitar los siguientes informes:**

- Informe del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre)
- Informe del Ministerio de Igualdad (artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre)
- Ministerio de Trabajo y Economía Social (artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre)

- Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en aplicación del artículo 26.9 de la Ley del 50/1997, de 27 de noviembre
- Informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública (artículo 26.5, párrafo quinto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre).
- Informe del Ministerio de Política Territorial sobre posible afectación a las competencias de las comunidades autónomas (artículo 26.5 párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre).
- Informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de los siguientes departamentos:
 - Ministerio de Hacienda y Función Pública
 - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 - Ministerio de Justicia
 - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 - Ministerio de Educación y Formación Profesional
 - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
 - Ministerio de Sanidad
 - Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
 - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 - Ministerio del Interior
 - Ministerio de Defensa
 - Ministerio de Cultura y Deporte
- Otros informes y dictámenes
 - Agencia Española de Protección de Datos.
 - Consejo General del Poder Judicial.
 - Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
 - Consejo Nacional de la Discapacidad.
 - Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
 - Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
 - Dictamen del Consejo Económico y Social.
 - Dictamen del Consejo de Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.10 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

5. Descripción de la tramitación de la parte correspondiente a la transposición de la Directiva En relación con la parte correspondiente a la transposición de la Directiva 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, la tramitación ha sido la que sigue:

5.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el texto del anteproyecto ha sido objeto de publicación en el portal web del Ministerio de Trabajo y Economía Social a efectos de consulta pública del 14 al 28 de junio de 2022.

Durante dicho periodo se han realizado un total de 15 aportaciones.

5.2. De conformidad con artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Consejo de Ministros puede acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley cuando fuera necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias. Así, el Consejo de Ministros en su reunión de 1 de agosto de 2022, acordó lo siguiente:

«Primero. Autorizar, al amparo de lo previsto en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la tramitación administrativa urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, y la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Segundo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 a) de la citada ley, y sin perjuicio del resto de los efectos previstos en dicho precepto, se autoriza a requerir con carácter de urgencia la emisión de los informes de órganos consultivos que resulten preceptivos»

En relación con este anteproyecto de ley era precisa, por tanto, su tramitación urgente atendiendo a la necesidad de cumplir con el mandato de transposición que exige los citados cambios en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el y en el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información a la persona trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo.

El plazo para cumplir el mandato adoptando las disposiciones legales o reglamentarias necesarias se agota el 2 de agosto de 2022, salvo para la remuneración o la prestación económica correspondientes a las últimas dos semanas del permiso parental que concluye el 2 de agosto de 2024.

Las consideraciones anteriores justificaban la necesidad de solicitar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, y la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, al concurrir las circunstancias descritas en el artículo 27.1 letras a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, esto es, cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.

5.3 El texto ha sido publicado en el portal web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, conforme al artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, en tanto que la norma afecta a los derechos e intereses legítimos de las personas. El plazo de audiencia e información públicas ha sido de 7 días hábiles de acuerdo con el artículo 27.2 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 14 al 23 de septiembre de 2022.

Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto, de manera que el anteproyecto ha sido enviado para su informe a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

5.4 El anteproyecto se ha sometido a informe, de conformidad con el artículo 26, apartados 5 y 9, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de los siguientes órganos y Departamentos:

- ✘ Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- ✘ Ministerio de Igualdad.
- ✘ Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- ✘ Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, perteneciente al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- ✘ Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- ✘ Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- ✘ Ministerio de Justicia.
- ✘ Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Se han recibido los informes de los Ministerios siguientes: del Ministerio de Igualdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50 /1997, de 27 de noviembre; del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, sobre el “*Anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, y la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.*”

Como se dice en el párrafo anterior se incluyen todas las aportaciones recibidas hasta esa fase de tramitación que incluían la tramitación de sendas directivas y en **la versión de 14 de septiembre de 2022.**

APORTACIONES RECIBIDAS POR LOS MINISTERIOS DURANTE LA FASE DE INFORME (ARTÍCULO 25.6 LG)

Aportaciones sobre la Directiva 2019/1152, de 20 de junio de 2019, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles		
APORTACIÓN	MINISTERIO	VALORACIÓN
Con carácter general se resalta la necesidad de coordinar esta iniciativa con las que está impulsando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	MDSA2030	El objetivo de este APL es cumplir con el mandato de transposición de sendas directivas lo que incluye no solo hacerlo en un determinado plazo sino también con unas determinadas exigencias.
Modificación del artículo 4.2.c eliminando la frase final del apartado c) “tampoco podrán ser discriminados por razón de		Sobrepassa las exigencias de transposición de la directiva

discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el empleo o el trabajo de que se trate”		
<p>Artículo 4.2.c) señalando la redacción siguiente:</p> <p>“A no ser discriminadas directa o indirectamente para el empleo o una vez empleadas, por razones de estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, identidad de género (...) derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral”.</p>	Ministerio de Igualdad	<p>Se admite la corrección sobre el lenguaje inclusivo</p> <p>Respecto de la identidad de género ha sido incluida en APL promovido por el Ministerio informante.</p> <p>Respecto de la vida personal como supuesto discriminatorio no resulta tan claro. No existe jurisprudencia interna o comunitaria que avale el que el trato desfavorable por motivos de conciliación personal sea discriminatorio y que lo anterior conlleve las consecuencias que de esta calificación se derivan (nulidad).</p> <p>Hay que recordar que la directiva no habla en ningún momento de conciliación de la vida personal y que la adopción de mecanismos de protección señalados en los artículos 11 y 12 lo son frente a las medidas relacionadas para asegurar la conciliación de la vida profesional con las responsabilidades y obligaciones de cuidado.</p>
Idéntica referencia al 34.2 en relación con la vida personal		Ídem
<p>En el artículo 12.4 se señala que se debe incluir lo siguiente:</p> <p>A fin de garantizar la igualdad real y efectiva de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y corregir la sobre representación de mujeres en los contratos a tiempo parcial la empresa mediante negociación colectiva o por acuerdo con la representación legal de los trabajadores podrá establecer medidas de acción positiva</p>		<p>Las medidas de acción positiva ya se recogen con el alcance y régimen jurídico oportuno para esta o cualquiera otra situación en el artículo 17 en su párrafo cuarto.</p> <p>Además, no es este el objeto ni el contenido del mandato de transposición</p>
Se incluye una referencia expresa a las medidas de acción positiva, así como la obligación de tener en cuenta los contratos a tiempo parcial en el diagnóstico de los planes de igualdad		Ídem valoración anterior.
Modificación del artículo 21 bis e inclusión expresa de las medidas de acción positiva en este artículo sobre la transición		Ídem valoración anterior
<p>Artículo 34 que incluye modificaciones como las siguientes:</p> <p>Conciliación de la vida personal</p> <p>Descripción del derecho a solicitar adaptaciones incluida una relación</p>		<p>En relación con la vida personal, hay que reiterar que la modificación del artículo 34.8 responde a la transposición de la directiva y a sus exigencias de atención de las responsabilidades familiares.</p>

<p>(entendemos que meramente ejemplar) de las distintas formas de adaptación que favorecen la conciliación y la corresponsabilidad</p> <p>Inclusión de “otras personas dependientes o con discapacidad”</p> <p>Negociación colectiva, acuerdos y planes de igualdad</p> <p>Derecho a volver a la situación anterior sin condiciones o limitaciones aun no habiendo transcurrido el periodo acordado</p> <p>Inclusión en convenios, acuerdos y planes de procedimientos para resolver las posibles discrepancias</p>		<p>El régimen del derecho se entiende suficiente: derecho a la adaptación de la jornada de las personas con dependientes a cargo, conforme a las exigencias del artículo 9 de la Directiva.</p> <p>Sin perjuicio de su valoración, en principio, se considera innecesario incluir “discapacidad”-que remite de manera necesaria a la definición del RD legislativo 1/2013- o la relación de acuerdos y planes que se integran en el concepto general de negociación colectiva.</p> <p>En cuanto al derecho a volver a la situación anterior el artículo 9 distingue claramente entre el transcurso o no transcurso del tiempo previsto y de ahí la diferencia.</p> <p>Por último, se entiende que cuando la negociación colectiva incluye una forma concreta para su ejercicio, incluirá asimismo los criterios para resolver posibles discrepancias</p>
<p>Modificaciones en el artículo 37.3 relativas a las parejas de hecho y a la ampliación a 7 días del permiso de cuidadores</p>		<p>Se acepta y se corrige la redacción</p>
<p>Al artículo 37.4 sobre permiso de lactancia suprimiendo la referencia al plan alternativo y recuperando el párrafo cuarto del citado artículo</p>		<p>Se acepta parcialmente Se recupera el citado apartado cuarto. En cuanto al plan alternativo no es sino la exigencia del artículo 5 de la Directiva sobre justificación del aplazamiento del disfrute de determinados permisos relacionados con el cuidado de los hijos e hijas</p>
<p>Artículo 37.6 sobre inclusión de las parejas de hecho registradas en el ámbito subjetivo.</p> <p>Se incluyen dependencia y discapacidad como hechos causantes. Se sustituye el plan alternativo por redacción distinta en el caso de que fuese necesaria la limitación en el reconocimiento de su disfrute</p>		<p>Se acepta la inclusión de las parejas de hecho coherente además con el objeto y la relación de causantes establecida en la directiva como susceptibles de generar la necesidad de cuidado con trascendencia laboral</p> <p>En relación con la inclusión expresa como dos supuestos distintos de la dependencia y la discapacidad en principio se considera innecesario, pero se valorará</p>

<p>En relación con la fuerza mayor familiar, artículo 34.9, se introduce en coherencia con otras modificaciones “otras personas convivientes” Se da nueva redacción indicando en defecto de...convenio colectivo, señalando que es confusa la redacción del precepto</p>		<p>El artículo 34.9 habla de motivos familiares urgentes e imprevisibles, sin indicación expresa de los familiares que no tienen por qué coincidir con los de otros artículos. De hecho, en la Directiva se refiere de manera expresa en el caso de “familiares” a la pareja de hecho</p>
<p>Cambios en el artículo 39, 40 y 41 ET</p>		<p>No se admiten dado que trascienden el objeto y el mandato de la transposición.</p>
<p>Artículo 46.3 sobre ampliación del ámbito subjetivo de los causantes y la supresión del plan alterativo</p>		<p>Idéntica contestación 37.6 ET</p>
<p>Sobre las modificaciones del artículo 48 en sus apartados 4, 5 y 6</p>		<p>Se aceptan parcialmente y se modifica la redacción del citado artículo 48 en los siguientes extremos: - la posibilidad de que el progenitor distinto pueda adelantar el disfrute del permiso. - ampliación del periodo de permiso para las familias monoparentales y monomarentales de acuerdo con las exigencias del defensor del pueblo</p>
<p>Respecto del artículo de modificación del TRLGSS debe ser tenido en cuenta por el MISSM y sobre los impactos de la MAIN serán completados</p>		
<p>Respecto del primero se refiere a la necesidad de recuperar el párrafo cuarto del artículo 37.4 relativo a la ampliación del permiso de lactancia</p> <p>La reforma que se pretende, por un lado, en el segundo párrafo del artículo 37.6 del TRLET, amplía el ámbito subjetivo del derecho a la reducción de jornada de trabajo prevista hasta ahora a la pareja de hecho. Ello tiene incidencia, en concreto, en la prestación familiar en su modalidad contributiva, ya que de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 237.3 del TRLGSS las cotizaciones realizadas durante el primer año del período de reducción de jornada, se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones de Seguridad Social por</p>	<p>MISSM</p>	<p>Se acepta</p> <p>Sobre lo anterior no es posible obviar que los permisos de cuidado respecto de las personas a cargo de la persona trabajadora deben recoger el supuesto de la pareja de hecho, so pena de desvirtuar su propósito que no es otro que favorecer el derecho efectivo a la conciliación</p>

jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor. Por ello, se quiere destacar que esta medida conlleva ampliar el ámbito subjetivo de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social, con la correspondiente incidencia en el aumento del gasto, en el volumen de gestión y en las necesarias modificaciones de los procedimientos		
En cuanto al nuevo permiso parental desde el punto de vista del MISSM se considera inviable la opción de una nueva prestación de la Seguridad Social ya que ello supondría un aumento de gasto considerable, así como un aumento del volumen de gestión que el INSS no podría asumir teniendo en cuenta el actual volumen dentro de un marco de déficit de personal elevado		

5.5 En cuanto a las aportaciones de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y las recogidas en trámite de audiencia e información públicas sobre el anteproyecto que ha sido objeto de información, se recogen a continuación junto con su valoración:

APORTACIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y EN AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA DIRECTIVA 2019/1158

En la nueva redacción del artículo 37.3 b) (a) Incluir el derecho a ausencia del trabajo en caso de enfermedad no grave de hijo menor de 12 años a cargo. (b) En la nueva redacción del artículo 37.3 b bis) ampliar de 2 a 10 días en el caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o hijos. Valorar en este caso, si corresponde de forma más adecuada una suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo, que se pueda asociar a una prestación económica equivalente a la de incapacidad temporal transitoria.	ANNA ESCOBEDO CAPARRÓS	Ya existen y van a ampliarse (el nuevo artículo 37. 9 relativo a la FM) que se ocupa de dicha circunstancia. No se entiende en absoluto la ampliación sugerida, así como el cambio de naturaleza. Hay que recordar que la directiva objeto de transposición se refiere a los cuidados
En la nueva redacción del 37.6 mantener el supuesto de afinidad junto al de consanguinidad en atención a la complejidad de las nuevas familias recompuestas		La afinidad se incluye, pero es necesario por razones de corresponsabilidad establecer la consanguineidad con carácter prioritario en estos permisos de larga duración
Art. 37.9 ampliar de 4 hasta 10 días al año cuando se trate del cuidado de hijos menores de 12 años, y en caso de que se este permiso se utilice en jornadas completas que se equipare a incapacidad temporal transitoria, para		La nueva redacción de la fuerza mayor familiar se ajusta a lo establecido en la directiva en cuanto al supuesto (recuérdese que estamos ante una fuerza

posibilitar el cuidado de los hijos pequeños enfermos y evitar la propagación de enfermedades a través de las escuelas infantiles		mayor y no ante una situación de necesidad de cuidado sostenido)
En la nueva redacción del apartado 46.3 incluir derecho a excedencia para el cuidado del cónyuge o pareja de hecho		Se acepta
En la nueva redacción del apartado 6 del artículo 48 establecer la misma extensión de tiempo que para las familias monoparentales, a los casos de nacimientos/adopciones/acogimientos múltiples o con discapacidad. Plantear asimismo la posibilidad de determinar reglamentariamente situaciones equiparables a la monoparentalidad, que permitan gozar de esas diez semanas adicionales en determinadas situaciones familiares.		Se recoge y trasladan los cambios exigidos por el Defensor del Pueblo como consecuencia de las sentencias recientes
un nuevo redactado del apartado 4 del artículo 48 para reducir la obligatoriedad de seis a dos semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, para el permiso de nacimiento del progenitor distinto a la madre biológica. Asimismo, permitir la transferibilidad de las semanas no obligatorias, o de parte de ellas, cuando el progenitor distinto de la madre biológica no las pueda utilizar por razones fundamentadas o bien la madre biológica sólo tenga derecho a la prestación no contributiva por maternidad		Excede del objetivo de la transposición
En vez de situar el Permiso parental como un nuevo artículo 48 bis, incluirlo en el permiso por nacimiento, alargando el periodo de disfrute hasta los 24 meses, incentivando o estableciendo el uso consecutivo no simultáneo por ambos progenitores, con 2 semanas extra por progenitor, así como fijar el nivel de la prestación económica por la pérdida de salario como en el permiso por nacimiento. Como en el anterior apartado Doce establecer supuestos de ampliación del permiso parental o transferibilidad en supuestos de monoparentalidad o equiparables, cuando el progenitor distinto de la madre biológica no las pueda utilizar por razones fundamentada		El permiso parental no se concibe como un permiso de paternidad/maternidad y debe de distinguirse
Reducir el periodo forzoso de disfrute simultáneo del existente permiso por nacimiento y cuidado de menor a dos semanas. Asegurar el derecho de la persona trabajadora a decidir cuándo disfrutar	PLATAFORMA POR PERMISOS IGUALITARIOS	El objetivo de la transposición no es el permiso por nacimiento de hija o hijo, sino facilitar la conciliación de las personas trabajadoras con sus responsabilidades de

<p>del existente permiso por nacimiento y cuidado de menor en régimen de jornada completa mediante un preaviso a la entidad empleadora de 15 días y sin necesidad de aprobación alguna por parte de esta, recuperando así el derecho anteriormente existente para el antiguo permiso de maternidad. No crear un nuevo permiso parental disfrutable hasta que el menor cumpla 6 años como hace este borrador de anteproyecto, sino ampliar en ocho semanas el actual permiso por nacimiento y cuidado de menor después de:</p> <ul style="list-style-type: none"> o a. Implementar los puntos 1 y 2 a partir de enero de 2023. o b. Evaluar dicha implementación durante dos años (2023 y 2024) mediante el análisis de los datos de registro administrativo del INSS sobre el uso durante ese periodo o c. Una vez evaluado, y cuando se ampliase el permiso por mostrarse bien diseñado y con un uso igualitario, se podría establecer el tiempo de disfrute del permiso parental hasta un máximo de 15 meses del menor, para asegurar un uso corresponsable por parte del segundo progenitor. o d. Una vez evaluado, y cuando se ampliase el permiso por mostrarse bien diseñado y con un uso igualitario, sería obligatorio remunerar la ampliación en ocho semanas del permiso igual que el resto del permiso por nacimiento y adopción, esto es, al 100% de la base de cotización (cambiando el artículo 179 de la LGSS), garantizando la situación más favorable previa a la Directiva, tal como se señala en la misma. iv) Una vez implementados los cambios recogidos en los puntos anteriores, realizar una campaña de difusión del derecho al permiso por nacimiento y cuidado de menor en su nueva redacción y de los beneficios del uso corresponsable del mismo – turnándose los progenitores-. El uso sucesivo mejora el bienestar infantil y promueve un uso eficiente de los recursos públicos. v) Eliminar del anteproyecto la mayor duración del permiso parental para las personas progenitoras de familias monoparentales. 		<p>cuidado.</p> <p>Se acepta la ampliación hasta los 8 años del nuevo permiso parental</p>
--	--	--

<p>En art 37.6 2º párrafo hay un error en la última línea en, entendemos que la referencia a “la excedencia descrita”, se refiere a la reducción de jornada, no por tanto a una excedencia.</p> <p>Bien la modificación para monoparentales con las familias con dos progenitores, pero no equiparadas ya que estas últimas tendrían en total 32 semanas por nacimiento de hijo/ hija. Art 48 bis permiso parental que no aclara que sea retribuido.</p> <p>a) se limita hasta los 6 años, cuando la Directiva establecía como edad máxima 8 años. No estamos de acuerdo con que se establezca solo hasta 6 años del menor.</p> <p>b) no se aclara en el Anteproyecto que sea retribuido; y, en ese caso, quien lo retribuye si es un nuevo supuesto de suspensión del contrato, debería ser la Seguridad Social o es un permiso retribuido por la empresa.</p> <p>c) Por tanto, desde UGT no compartimos la redacción propuesta en el Anteproyecto para art 48 bis del ET para regular en nuestro ordenamiento jurídico el permiso parental, como está definido en la Directiva.</p>	<p>UGT</p>	<p>Se acepta</p> <p>En relación con el nuevo permiso parental del 48 bis se aceptan las indicaciones sobre la edad del menor.</p> <p>El carácter retribuido debe aclararse en una norma de SS y no en el ET que se ocupa de manera exclusiva de describir el supuesto de hecho y el régimen de disfrute</p>
<p>Podría aprovecharse la modificación para recoger expresamente el derecho a la desvinculación del pacto de horas complementarias para las mujeres víctimas de violencia de género o de violencias sexuales. El apartado 8 del artículo 37 no lo recoge expresamente.</p> <p>Apartado 8 del artículo 34:</p> <p>(a) el texto pasa a distinguir entre menores y mayores de 12 años. Para los primeros se mantiene el derecho sin condición alguna y para los segundos el proyecto recoge expresamente el derecho a efectuar la solicitud si se “acreditan” deberes de cuidado. Dificultades “logísticas” hacen conveniente que no se distinga entre mayores y menores de 12 años.).</p> <p>(b) debería incorporar claramente a los menores acogidos que, a estos efectos, se equiparan a los hijos. Aclarar a que se refiere “acreditar” el “deber de cuidado”. Para la Directiva, el</p>	<p>CCOO</p>	<p>Se puede valorar su inclusión</p> <p>La referencia del párrafo segundo del artículo 34.8 ET es en primer lugar una mejora con respecto a la redacción vigente en donde resultaba confusa la posibilidad de solicitar la adaptación en casos distintos de los menores.</p> <p>Por lo demás, la relación incluye todas las categorías de sujetos causantes que permiten a la persona trabajadora solicitar la adaptación en los términos establecidos en el artículo</p>

<p>cuidador es el que presta los cuidados independientemente de si resulta obligado legalmente. La exigencia de acreditar el deber de cuidado puede dificultar la aplicación de la norma innecesariamente (pareja de hecho).</p> <p>-rol del cuidador y se aparta del modelo del Estatuto en relación con los familiares afines. En el tratamiento de los derechos de conciliación la norma deberá promover la corresponsabilidad en su ejercicio sin que ello produzca ningún retroceso en derechos respecto del alcance de la protección actual.</p> <p>Artículo 37, apartados 3, 4, 6 y nuevo apartado 9</p> <p>Apartado 3 y 4:</p> <p>(a) permiso de cuidadores; puede interpretarse de una manera regresiva en relación con los derechos actualmente reconocidos. El actual precepto reconoce un permiso de dos días, pero no limita el número de personas ni el número de supuestos por persona ni vincula el permiso a la necesidad ni a la realización de “cuidado efectivo” “por la persona trabajadora”;</p> <p>(b) manteniendo los permisos por enfermedad, hospitalización o intervención quirúrgica que obedecen a presupuestos sociales y familiares no vinculados necesariamente al “cuidado efectivo”.</p> <p>Otros:</p> <p>(i) Sería el momento, por ejemplo, de recoger un permiso retribuido por atención sanitaria (consulta médica o de enfermería...) para hijos, otros familiares y para la propia persona trabajadora (con el alcance que se acuerde); un permiso de los progenitores para asistir a las tutorías en los centros educativos.....</p> <p>(ii) También es el momento de adaptar la norma a la interpretación judicial de la misma incorporando en el precepto que los permisos del artículo 37.3 b) y b bis) se computan por días laborables y que el disfrute de los permisos no se vincula necesariamente al momento del suceso causante...</p> <p>(iii) Sería también el momento de equiparar el matrimonio y las parejas de hecho a efectos del permiso de 15 días....</p> <p>d) Sin embargo, desaparece</p>		<p>34.8, relación que además coincide con la exigida por la directiva, en donde, fuera de una determinada edad-hasta los 12 años- en donde concurre de manera objetiva la necesidad de cuidado, el supuesto surge cuando existe la necesidad del cuidado, esta se acredita, y existe convivencia.</p> <p>No se está haciendo referencia a un deber civil de cuidado sino a la necesidad efectiva del mismo que justifique el disfrute del derecho de que se trate por parte de la persona trabajadora.</p> <p>Por lo que respecta a la modificación del artículo 37.3 ET, en su apartado b) no hay regresión alguna, antes, al contrario, se amplían los días (que pasan de 2 a 7, en su caso) y además no se recogen límites (estos pueden concurrir cuantas veces se dé el supuesto de hecho).</p> <p>Asimismo, y en relación con las personas convivientes distintas de los familiares, la necesidad del cuidado efectivo es una condición necesaria establecida por la propia directiva.</p> <p>Con todo, se aceptan algunas de las sugerencias</p> <p>En relación con las modificaciones de los artículos 37.6 y 46.3 ET sobre los afines, tal y como se indica en la exposición de motivos: También se modifican los artículos 37.6 y 46.3 del Estatuto de los Trabajadores para matizar el derecho a la reducción de jornada y excedencia para</p>
--	--	---

<p>injustificadamente el último párrafo del apartado: “Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses”. Recordamos que la reducción del salario se suple con la prestación de cuidado del lactante a cargo de Seguridad Social, art.183 TRLGSS.</p> <p>b). Apartado 6: Se condiciona la causa vinculada a los parientes por afinidad a la inexistencia de parientes consanguíneos y directos hasta segundo grado (hijos y nietos, padres y abuelos) con derecho a la excedencia del “inciso anterior”. Entendemos que quiere referirse a la reducción de jornada del inciso anterior. En el tratamiento de los derechos de conciliación la norma deberá promover la corresponsabilidad en su ejercicio sin que ello produzca ningún retroceso en derechos respecto del alcance de la protección actual. En consecuencia, el nuevo texto deberá abordar su regulación con el suficiente grado de amplitud y flexibilidad.</p> <p>Derecho a ausentarse por fuerza mayor: Esta disposición no abarca más que los supuestos urgentes e imprevisibles por lo que no sirve para atender las necesidades a las que nos hemos referido arriba.</p> <p>ARTÍCULO 46.3</p> <p>i) familiares consanguíneos directos que puedan ejercer el derecho, sin que alcancemos a entender las diferencias en el tratamiento. ii) la norma deberá promover la corresponsabilidad en su ejercicio sin que ello produzca ningún retroceso en derechos. Valorar: reiteramos comentarios anteriores.</p> <p>48 BIS NUEVO</p> <p>i) Este “permiso” tiene una protección limitada: (1) Es necesario darle el tratamiento de permiso retribuido. La directiva no quedaría debidamente transpuesta sin</p>		<p>cuidado de dependientes por afinidad. El reconocimiento de estos derechos que van conectados a periodos largos de duración en los que la persona sufre perjuicios en sus ingresos y puede sufrir perjuicios en sus expectativas profesionales debe tener una escrupulosa redacción que evite la perpetuación de roles y que promueva la corresponsabilidad. Dado que suele ser más frecuente que sean las mujeres las que acceden a estas situaciones para el cuidado de sus familiares políticos, y es poco frecuente que suceda, al contrario, procede que se limite, en principio, el derecho a la reducción de jornada y a la excedencia al cuidado de los familiares por consanguinidad. Es una corrección necesaria para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado familiar que requiere la Directiva 2019/1158. Ello, no obstante, y a efectos de evitar la desprotección, se incluye el parentesco de afinidad para el acceso a estos derechos de cuidado cuando no existieran parientes por consanguinidad de la persona que lo requiere. Se trata de situaciones que, por sus características, requieren este ajuste, lo que no sucede en el caso del permiso contemplado en el art. 37.3. b) del Estatuto de los Trabajadores que, por ser de corta duración y por referirse a situaciones excepcionales que implican cierta gravedad o urgencia, procede reconocer tanto a familiares consanguíneos o afines, dado que procede en estos casos favorecer que el cuidado se extienda y se reparta entre el máximo número posible de personas.</p>
--	--	---

<p>reconocer el derecho a retribución (art. 4) o el derecho a una prestación. Valorar Deben introducirse en el TRLGSS las reformas que garanticen la protección de alta y cotización suficiente (cabría utilizar una fórmula de protección semejante a la de las excedencias por cuidado de menor) y previsiones equivalentes que complementen la cotización en caso de ejercicio a tiempo parcial del derecho. Las formas de disfrute se remiten a un reglamento y las preferencias de la persona trabajadora no están tan protegidas como en otros derechos (reducción de jornada) porque se hace una llamada para que se tengan en cuenta las necesidades organizativas de la empresa. Esta referencia debería desaparecer de dicho párrafo toda vez que en el siguiente ya se tiene en cuenta la medida en la que debe protegerse ese interés empresarial. (4) En este sentido resulta urgente, entre otras cuestiones, extender el período de reserva de puesto de trabajo en la excedencia por cuidado de familiares.</p> <p>ARTÍCULOS 53.4, 55.5, DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA</p> <p>i) En todo caso, más allá de estos ajustes, deberían revisarse y actualizarse estos preceptos en su conjunto para asegurar la protección en todos los supuestos y por un tiempo suficientemente amplio.</p> <p>ii) Por otro lado, la norma debería recoger medidas de protección eficaz del ejercicio de todos los derechos que promueven la conciliación y la corresponsabilidad ante cualquier decisión empresarial que los perturbe. Protección que debe ser acorde a la dimensión constitucional de estos derechos (STC 3/2007, STC 26/2011). Valorar: Por eso se les da la protección que se les da. En este caso, el derecho laboral es pionero y la transposición de la Directiva superaría el objeto.</p> <p>iii) Finalmente, el Anteproyecto modifica la Ley de la Jurisdicción social para adecuar los supuestos de nulidad de las extinciones del contrato y de los despidos a las previsiones del ET. En</p>		<p>En relación con otras aportaciones se aceptan y recogen explícitamente dos de ellas:</p> <p>-equiparación de las parejas de hecho</p> <p>-se recupera el párrafo cuarto del artículo 37.4 relativo al permiso de lactancia.</p> <p>La fuerza mayor familiar, transposición del artículo 7 de la Directiva, es un supuesto distinto del establecido en el artículo 6 sobre permiso de cuidadores, ni se trata del mismo hecho a proteger ni tan siquiera coinciden los sujetos causantes. Se trata de un supuesto no previsto en la normativa actual y que debe ser recogido y atendido con mejoras respecto de la redacción de la directiva -aquellas situaciones imprevistas en donde el trabajador tiene que acudir de manera personal y urgente por razones “familiares”.</p> <p>Sobre la referencia a los familiares consanguíneos directo, se acepta y corrige dado que es una errata</p> <p>Sobre el artículo 48 bis, hay que estar a la posible modificación de la normativa del TRLGSS En cuanto a su régimen de disfrute no estamos ante el mismo permiso que el recogido en el artículo 37.6, reducción por razones de guarda legal, sino ante un permiso con condiciones de disfrute propias y más flexibles.</p> <p>Sobre la ampliación del periodo de reserva del puesto</p>
---	--	---

<p>este punto debe corregirse la redacción porque, como ya se ha dicho, contiene errores que suponen la eliminación de algunos apartados de la actual norma</p>		<p>de trabajo en el artículo 46.3 excede del objeto de la transposición.</p> <p>Los cambios en los artículos 53 y 55 ET son exigencias de lo recogido en el artículo 12 de la Directiva y por eso se modifican al igual que lo artículos correspondientes de la LJS</p>
<p>Artículo 34.8 ET señala la falta de seguridad jurídica cuando se establece para los sujetos distintos de los menores de 12 años la convivencia y los deberes de cuidado, así como la figura de los dependientes.</p> <p>Asimismo, se critica la transposición efectuada del derecho de la persona trabajadora a regresar a su puesto de trabajo</p>	<p>CEOE</p>	<p>Se considera necesaria y legítima esta opción en la que se recoge un supuesto distinto de los menores de 12 años- cuya necesidad de cuidado es objetiva-como son los familiares dependientes que requieran cuidados y otras personas distintas de las anteriores en la medida en que convivan con la persona trabajadora.</p> <p>En cualquier caso, nada impide que tanto la necesidad de la asistencia como la condición de dependiente de familiares y convivientes pueda ser susceptible justificación.</p> <p>Sobre el derecho del trabajador a regresar a sus condiciones de origen no cabe duda por la letra del artículo 9 de la directiva que es una exigencia. Lo que requiere cierta matización son aquellos supuestos de retorno anticipado, respecto de los cuales, la empresa podrá valorar denegar el regreso solicitado cuando existan razones objetivas motivadas para ello.</p> <p>Es lo que se recoge en el párrafo del citado apartado.</p>
<p>Reitera respecto del artículo 37.3.b) la inseguridad jurídica del concepto cuidado efectivo y la necesidad de acreditación</p>	<p>CEOE</p>	<p>No se entiende en absoluto la observación, puesto que el supuesto viene precedido por unas situaciones objetivas-tales como enfermedad</p>

		<p>grave-. Lo que se añade por razones de certeza, seguridad jurídica y para acompasar el objeto del precepto es la necesidad del cuidado efectivo recogido del literal de la directiva para ampliar el permiso y para generar el derecho en el caso de convivientes que no sean familiares.</p> <p>Por lo demás, ya el propio artículo 37.3 exige la justificación.</p>
<p>Sin anclaje en la Directiva de conciliación, el Anteproyecto establece que la empresa tiene que “ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación”, con las dificultades que ello comporta especialmente en pymes y micropymes</p>	<p>CEOE</p>	<p>El ofrecimiento del plan alternativo en el caso de la reducción de jornada del 37.6- igual que en el caso del 46.3- viene exigido por la letra del artículo 5 de la Directiva en relación con los permisos parentales. No podemos olvidar que amen del nuevo permiso parental del 48 bis-de carácter retribuido- el resto del permiso se hace coincidir con los que ya vienen recogidos en nuestro ordenamiento, pero a los que hay que efectuar los necesarios ajustes para que respondan fielmente a las necesidades de transposición.</p> <p>El plan alternativo con sus distintos elementos no es sino la forma de garantizar el disfrute en el caso de aplazamiento justificado.</p>
<p>A la modificación del apartado 6, del artículo 37 del ET. En el caso de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad, además de la ampliación del ámbito subjetivo, al incluir junto a los parientes hasta el segundo grado por consanguinidad, al cónyuge o pareja de hecho de hecho, se cambia familiar de segundo grado de afinidad por “quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad del cónyuge o pareja de hecho siempre</p>	<p>CEOE</p>	<p>Se garantiza con esta nueva redacción que los permisos de cuidado sean ejercidos de manera corresponsable</p> <p>Lo único que se modifica es la prioridad de prioridad de los consanguíneos y la afinidad con carácter subsidiario, el resto de los términos ya vienen recogidos en el citado precepto.</p>

que no existieran familiares por consanguinidad hasta el segundo grado que pudieran acceder a la reducción de jornada.”		
<p>A través de un nuevo apartado 9, del artículo 37, se concede el derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia del trabajo por causa de fuerza mayor equivalentes a cuatro días al año.</p> <p>Sin embargo, el artículo 7 de la Directiva no indica duración ni que sea retribuida la ausencia, no habiéndose ponderado el coste e incidencia que tiene en las empresas, especialmente en las más pequeñas, esta regulación del Anteproyecto.</p> <p>Además, se aprecia cierto solapamiento con el permiso retribuido en caso de enfermedad o accidente del artículo 37.3.b) del ET.</p> <p>En definitiva, es preciso clarificar los supuestos que dan derecho a ausentarse del trabajo, sin exceder los mandatos de la Directiva al hacer recaer sobre las empresas el coste económico de dicha ausencia</p>	CEOE	<p>El supuesto descrito en el nuevo apartado 9 en absoluto se solapa con el previsto en el artículo 37.3.bis</p> <p>Ni coincide el ámbito objetivo ni el subjetivo: cuando sea necesario por motivos familiares urgentes e imprevisibles, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.</p>
Idéntico al comentario del artículo 37.6	CEOE	Ya respondido, tanto en relación con los sujetos como en relación con el plan alternativo
<p>La ampliación de los supuestos de nulidad de la decisión extintiva a los casos de disfrute de permiso parental, permiso de cuidadores o adaptaciones de jornada del artículo 34.8 del ET, genera amplios espacios de impunidad, por lo que debería bastar con la inversión de la carga de la prueba que contempla la Directiva de conciliación, sin incurrir en nuevos excesos en la trasposición de la misma que reabren debates sobre las sanciones aparejadas a ciertas decisiones extintivas cerrados en la reciente Reforma Laboral.</p>	CEOE	Esto resulta de la letra del artículo 12 de la directiva

5.5 Deberá recabarse dictamen del Consejo Económico y Social de acuerdo con el artículo 7.1.1.a) de la Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social.

5.6 Se solicitará dictamen del Consejo de Estado, conforme al artículo veintiuno, apartado 2, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

IV) Análisis de impactos.

1º Impacto económico.

De acuerdo con el artículo 2.1.d) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, la memoria de impacto normativo deberá contener un apartado en el que se valore y exponga el impacto económico y presupuestario de la norma que se proponga.

“El impacto económico evaluará las consecuencias de su aplicación sobre sectores, colectivos o agentes afectados por la propuesta de norma”, según se afirma en el citado artículo del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre.

El objetivo de este anteproyecto de ley es, como ya se ha indicado, intensificar la acción protectora del Estado a las familias e igualar el trato y la protección social que reciben los distintos tipos de ellas, independientemente de la composición de las mismas o de si su origen es o no matrimonial.

A la vista de lo expuesto, puede concluirse que este anteproyecto de ley no representa un impacto económico directo, ni sobre la competencia, la unidad de mercado, ni la competitividad. En ningún momento el contenido del anteproyecto de ley regula aspectos que supongan la ordenación o control de actividades económicas, ni tampoco afecta al acceso de los operadores económicos a las actividades económicas ni a su ejercicio.

No obstante, sí que se aprecia un impacto económico indirecto relevante al ser las familias un agente económico básico que suministra factores al proceso productivo mediante el aporte de capital humano a la sociedad y el reemplazo generacional, así como a través de la demanda de bienes y servicios. En este sentido, el impacto económico de esta Ley se concreta especialmente en tres cuestiones:

- El desarrollo de la infancia y la promoción de la igualdad de oportunidades por una reducción de la pobreza infantil.
- La activación de las mujeres y el incremento de las horas trabajadas gracias a una mayor corresponsabilidad del Estado en los cuidados.
- El incremento de la demanda agregada por una mayor renta disponible en las familias, especialmente aquellas con hijos e hijas a cargo.

1.1 Impacto de la inversión en el desarrollo de la infancia

España es un país con una tasa inaceptable de pobreza infantil, y sus niveles de inversión tanto en protección social a la familia e infancia como en cuidados y educación en los primeros años de vida son relativamente bajos si los comparamos con otros países de nuestro entorno o nivel de desarrollo. Sin embargo, desde un punto de vista económico, ambas inversiones son altamente rentables. Aunque no existen muchos estudios que cuantifiquen el impacto en la economía de la pobreza infantil, los publicados hasta la fecha apuntan a que en países como Estados Unidos o Reino Unido el PIB desciende varios puntos.²

Empezando por el impacto de la inversión en protección social en infancia y familia, en los países desarrollados con mayor renta per cápita, la relación entre el gasto en protección social a la infancia y el PIB per cápita es mayor. Luego aquellos países más desarrollados hacen un esfuerzo proporcionalmente mayor en proteger a niños y niñas y familias.³ De hecho, aquellos países de la UE con menos desiguales son aquellos en los que la desigualdad en la infancia es más baja que la

² Harry J. Holzera, Diane Whitmore Schanzenbachb, Greg J. Duncanc, and Jens Ludwigd, (2008), The economic costs of childhood poverty in the United States.

<https://www.sesp.northwestern.edu/docs/publications/501714952551f027e3ec0b.pdf>; Jo Blanden, Kirstine Hansen and Stephen Machin, (2008), The GDP cost of the lost earning potential of adults who grew up in poverty.<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.443.1187&rep=rep1&type=pdf>

³ Save the Children (2017), Desheredados.

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/desheredados_ii_vok_0.pdf

global.⁴ En España, el quinto país de la UE con un mayor índice de Gini, pasa justo lo contrario: el índice Gini en la infancia es más alto que el Gini general.

Por otro lado, la propuesta de Ley refuerza la atención a la primera infancia a través, fundamentalmente, de tres medidas: la configuración de la atención temprana como derecho subjetivo, la aplicación de este mismo trato al primer ciclo de educación infantil y la implementación en España del enfoque de los 1.000 primeros días para reforzar la atención que se presta a la primera infancia desde una perspectiva integrada.

La evidencia científica, basada tanto en estudios empíricos como en el desarrollo de la neurociencia, apunta a que las experiencias vividas en la primera infancia tienen un impacto profundo en el desarrollo de los individuos, sus habilidades cognitivas y sociales, así como en sus trayectorias vitales, educativas a laborales. Niños y niñas que en sus primeros años de vida no han recibido la protección, estimulación o cuidado adecuado ven condicionadas sus opciones de futuro. Si estas carencias son fruto de precariedad o falta de ingresos, es en los primeros tres años de vida en los que se consolida en gran parte la transmisión intergeneracional de la pobreza y la perpetuación de las desigualdades, con un consecuente impacto en la minoración del crecimiento económico o en la erosión de la cohesión social.

Es por esto que diversas instituciones internacionales apuntan a que la inversión en la primera infancia es sumamente rentable en términos económicos. Como, además, independientemente de lo que suceda en los años sucesivos, aquello que se aprende o las habilidades sociales que se adquieren en los primeros años de vida no se pierden, es también una inversión con una gran sostenibilidad. El Banco Mundial, tras analizar evidencia de países con distinto nivel de desarrollo, concluye que la tasa de retorno de la educación infantil de grupos vulnerables está entre el 7% y el 16% anual.⁵ Por su parte, la OCDE tiene un robusto cuerpo de evidencia sobre el impacto beneficioso en el rendimiento escolar de haber cursado educación infantil; un impacto que, además, es mayor en los niños y niñas de hogares vulnerables. Mientras más años se hayan cursado, menor la probabilidad de llegar a los 15 años con un rendimiento escolar bajo.⁶

Una más capaz fuerza de trabajo es una mejor economía. Un niño o una niña que se desarrolla plenamente independientemente de haber nacido en un hogar con falta de ingresos, es talento del que disfrutamos el conjunto de la sociedad.

1.2 La activación de las mujeres y el incremento de las horas trabajadas gracias a una mayor corresponsabilidad del Estado en los cuidados

La activación de la mujer es un objetivo en sí mismo en tanto y cuanto equiparar los niveles de activación y ocupación de las mujeres y los hombres es clave para promover la igualdad de género y autonomía de la mujer. No obstante, también ha de analizarse en tanto y cuanto tiene un impacto deseado en la economía. El ocaso demográfico, con la salida de miles de trabajadores del mercado laboral hacia la jubilación y sin reemplazo asegurado, intensifica la necesidad de lograr una mayor activación de mujeres y personas jóvenes.⁷ Uno de los cuellos de botella que impide incrementar esta participación de las mujeres en el mercado laboral es un reparto inequitativo de los trabajos de cuidado entre las mujeres, los hombres y el Estado.

⁴ Ibid.

⁵ HANSEN, K (2016), Desarrollo en la primera infancia: Una inversión inteligente para toda la vida. <https://blogs.worldbank.org/es/education/desarrollo-en-la-primera-infancia-una-inversi-n-inteligente-para-toda-la-vida>; World Bank, (2016), Later Impacts of Early Childhood Interventions: A Systematic Review. https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/Evaluation/files/ImpactsofInterventions_EarlyChildhoodonLaterOutcomes.pdf

⁶ OCDE (2017), Starting Strong: 2017. Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. <https://www.oecd.org/education/starting-strong-2017-9789264276116-en.htm>

⁷ Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Gobierno de España (coord.), España 2050, Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf

A este respecto, mayores tasas de escolarización 0-3 y una mayor disponibilidad de plazas, tienen un impacto directo en la cantidad de mujeres activas. En aquellos países donde la participación laboral de las mujeres es mayor (Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos... con más de un 70% de ocupación entre las mujeres de 15 a 64 años con al menos un hijo o hija de menos de tres años), la tasa de escolarización en primer ciclo de educación infantil es también mayor. Igualmente hay una relación entre más horas de escolarización media a la semana de los menores de 0 a 3 y una menor proporción de contratos parciales entre las mujeres.⁸

1.3 El incremento de la demanda agregada por una mayor renta disponible en las familias, especialmente aquellas con hijos e hijas a cargo:

La suma de bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios, o “demanda agregada” es un elemento fundamental de la economía al ser el motor que mueve la producción y permite el crecimiento. En dicha demanda agregada las familias son protagonistas. En términos de precios corrientes, el gasto en consumo final de los hogares representaba en España el 54,9% del PIB en el año 2020.

Cuando los hogares reducen en conjunto su consumo, la demanda agregada se resiente repercutiendo en el PIB. Tal es así, que las políticas de transferencia de rentas a los hogares y, especialmente, a los hogares con baja renta y menor capacidad de ahorro, son opciones recurrentes políticas económicas expansivas. Las familias de menores ingresos tienen mayor propensión marginal al consumo, según la literatura económica especializada, lo que implica que las transferencias de renta focalizadas o de carácter universal deberían tener mayor impacto sobre la actividad económica que deducciones fiscales de carácter más regresivo.

El conjunto de la propuesta Ley, mediante refuerzos en distintas transferencias o beneficios fiscales a las familias, supone un traspaso importante de rentas desde el Estado a los bolsillos de los consumidores. Al impacto económico de este aumento del consumo hay que añadir el retorno en forma de impuestos tanto directos como indirectos.

La conciliación y el margen de crecimiento en el PIB y en la participación de las mujeres

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión Europea. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos de la Unión Europea. Además, en el artículo 8 del TFUE se establece que la Unión, en todas sus acciones, se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.

Es este el objetivo fundamental que busca la Directiva de manera que el ejercicio de responsabilidades de cuidado no equivalga a una reducción de las expectativas profesionales de las mujeres.

La propuesta también facilita el ejercicio de los derechos reconocido en los artículos 23 y 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que se refieren de manera específica a la igualdad entre mujeres y hombres y a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.

⁸ OCDE (2017), Starting Strong: 2017. Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. <https://www.oecd.org/education/starting-strong-2017-9789264276116-en.htm>

LAS JORNADAS PARCIALES SIGUEN ESTANDO FEMINIZADAS

Pese a la evolución positiva de las variables de mercado del trabajo femenino, el desigualdad reparto de las tareas de cuidado sigue teniendo consecuencias negativas para las mujeres en el ámbito laboral, puesto que recae sobre ellas la mayor parte del trabajo reproductivo de cuidados.

Las diferencias en tasa de parcialidad son las mayores que se observan en todos los indicadores laborales: **la parcialidad femenina es casi cuatro veces más alta que la masculina**, con 16 puntos de diferencia.

Mientras el 24,5% de las mujeres declara que tiene una jornada parcial por razones de cuidado, en el caso de los hombres es solo el 5,3%.



El 76% de las jornadas parciales están ocupadas por mujeres, que suponen más de 2 millones de mujeres.

EL TRABAJO DE CUIDADOS SIGUE RECAYENDO SOBRE LAS MUJERES CON CONSECUENCIAS SOBRE SU DESEMPEÑO LABORAL

En España hay 4,8 millones de mujeres inactivas entre 16 y 64 años, frente a los 3,3 millones de hombres inactivos, es decir, **1,5 millones de mujeres inactivas más en edad de trabajar.**

Por edades, se observa que las inactivas son casi el 64% entre las edades adultas y casi el 69% en las edades avanzadas.

La **razón principal** para la inactividad de las mujeres es por **responsabilidades de cuidados**, mientras que en el caso masculino es por dedicación a los estudios.



Hay un millón y medio de inactivas más que de inactivos y son mayoría de los grupos de edad con mayores necesidades de cuidados. De media, las mujeres le dedican unas 26,5 horas semanales al trabajo no remunerado mientras que los hombres sólo 14, casi la mitad.

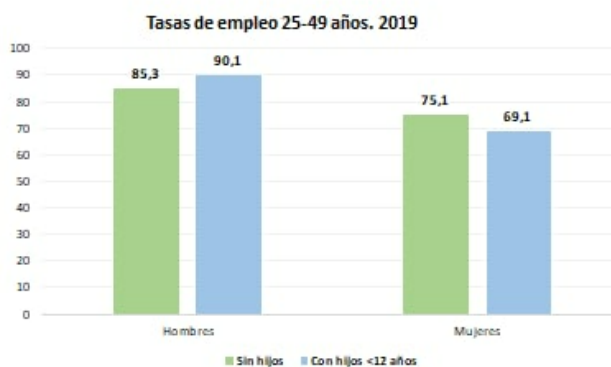
LA MATERNIDAD AFECTA NEGATIVAMENTE AL EMPLEO FEMENINO Y FAVORECE EL MASCULINO

El empleo de las mujeres con hijos es menor mientras que en los hombres con hijos aumenta

La tasa de empleo se reduce en el caso de las mujeres con hijos en hasta 6 puntos con respecto a las mujeres sin hijos.

Sin embargo en el caso de los hombres con hijos su tasa de empleo aumenta en 4,8 puntos con respecto a los hombres sin hijos.

Las diferencias entre géneros son abrumadoras: 21 puntos entre las personas con hijos y de 10,2 puntos entre las personas sin hijos



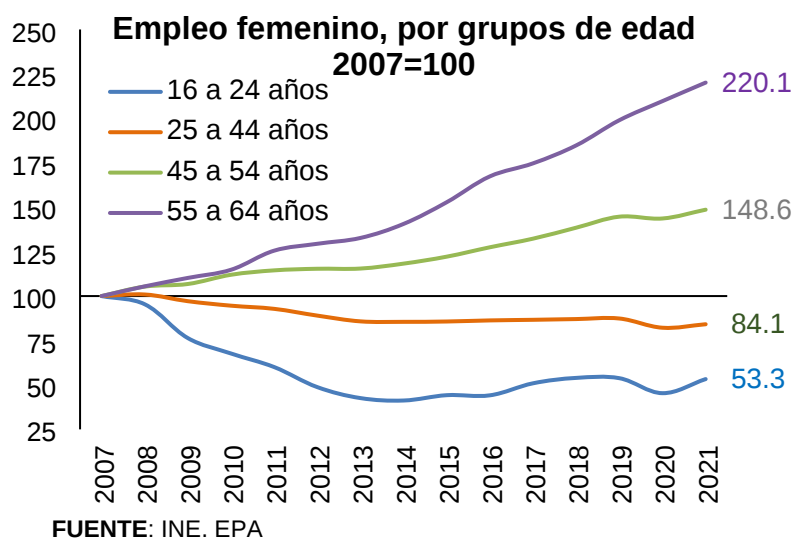
Fuente: INE. EPA

La tasa de empleo de las madres es del 69% mientras que la de los padres supera el 90%, más de 21 puntos de diferencia.

Mujer y mercado de trabajo. Las medidas de conciliación, la tasa de actividad y la calidad en el empleo.

La población femenina en España de 16 y más años era en 2021 de 20.383.500. Si bien supone un incremento del 0,2% respecto a 2020 en términos generales, desagregándolo por grupo de edad, se observan descensos en la población femenina de 25 a 44 años de hasta el 2,4% respecto al año anterior, de acuerdo con los datos de la EPA que publica el INE. En cuanto a la **ocupación**, en 2021 el número total de ocupados ascendió a 19.773.600 personas, de las que **9.121.900** (es decir, el 46,13%) son mujeres. De ellas, las mujeres cuyo rango de edad está entre los 40 y los 44 años constituye, en términos absolutos, el mayor número de ocupadas con 1.412.900 en 2021 según la EPA.

En términos de evolución, el empleo femenino ha venido experimentando desde 2007 un mejor comportamiento en los grupos de mayor edad, especialmente en el de 55 a 64 años. Sin embargo, el peso de las responsabilidades familiares hace que la tasa de empleo siga siendo inferior para las mujeres entre los 16 y los 44 años.



La participación de la mujer en el mercado laboral está en buena parte condicionada por el cuidado de la familia y los hijos, dado que recae en mayor medida sobre ellas. Por número de hijos, y según refiere el propio INE en el módulo de la EPA sobre conciliación entre la vida familiar y la laboral, para las mujeres de 25 a 49 años, la tasa de empleo sin hijos en 2021 fue de 74,7%, cifra que desciende hasta el 69,7% en el caso de tener hijos menores de 12 años. Datos que, en el caso de los hombres, ascienden al 83,6% y el 89,7%, respectivamente⁹.

En cuanto a los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia por tener permiso por nacimiento en 2021, de un total de 119.900 personas, 69.600 eran mujeres, lo que supone el 58,1%, 5,5 p.p. menos que en 2020. “La tendencia de este colectivo de mujeres -según señala el informe **La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2020**, que elabora la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del MITES¹⁰- es a reducirse proporcionalmente y a aumentar el de hombres, como consecuencia de la equiparación de los permisos parentales por nacimiento de hijo”.

En lo que se refiere a los inactivos, es interesante observar los cambios -en el tiempo y por sexo- que se han producido en lo que se refiere a los motivos por los que no buscan empleo. Así, y con datos de la EPA, en 2007 el cuidado de niños y familiares suponía la principal causa para 3.252.800 mujeres y para 120.200 hombres. En 2021, en el caso de las mujeres se redujo más de la mitad hasta las 1.453.400; y, en el de los hombres, aumentó hasta los 185.700. Más allá de las cifras absolutas, del análisis que se infiere se intuye un leve cambio en el comportamiento, a pesar de que siguen siendo las mujeres las que en mayor medida dejan a un lado su proyección laboral y profesional para encargarse de los cuidados de la familia.

Inactivos por motivo de no buscar empleo (miles)

⁹

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925463094&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayoUt¶m1=PYSDetalle¶m3=1259924822888

¹⁰ https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/analisis_mercado_trabajo/situacion-mujeres/Mujeres-y-Mercado-de-Trabajo-2021.pdf

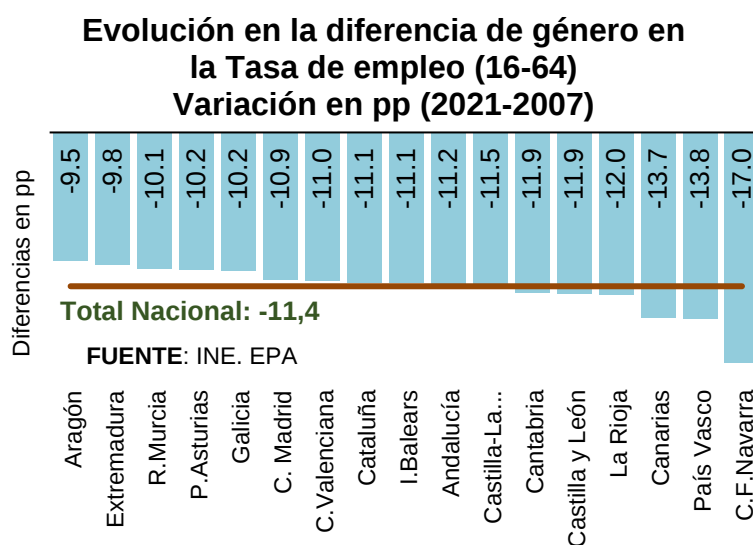
	2007	2020	2021
MUJERES	9.721,3	9.712,5	9.430,9
Desanimadas	176,3	209,6	123,5
Cuidado de niños y familiares	3.252,8	1.516,9	1.453,4
Estar jubilada	1.020,5	1.572,3	1.618,3
Estudios	1.081,3	1.368,4	1.383,1
Resto	4.190,5	5.045,3	4.852,7

Fuente: INE. EPA.

	2007	2020	2021
HOMBRES	5.685,8	7.133,0	7.020,2
Desanimados	49,3	113,7	70,9
Cuidado de niños y familiares	120,2	138,4	185,7
Estar jubilado	1.955,4	2.263,3	2.256,8
Estudios	966,7	1.307,6	1.358,2
Resto	2.594,2	3.310,1	3.148,7

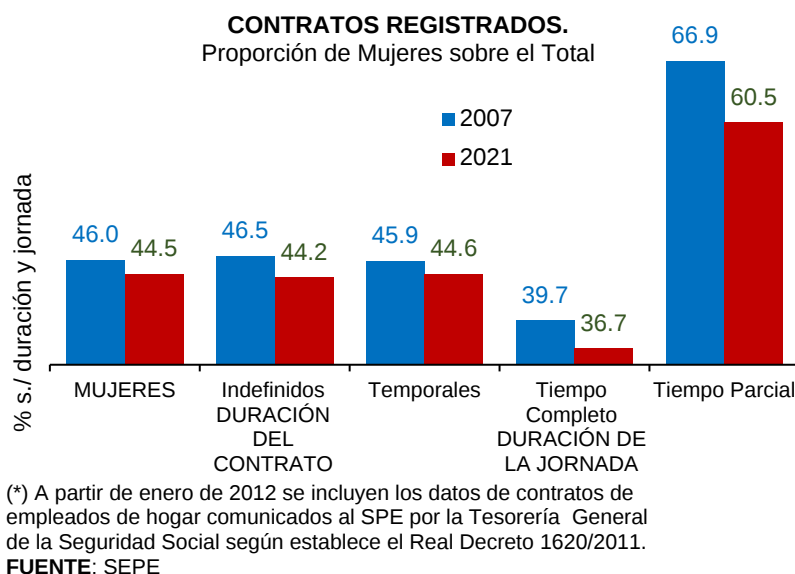
Fuente: INE. EPA.

Por otro lado, la evolución de la brecha de género en la tasa de empleo se ha ido reduciendo desde 2007 hasta en -11,4 p.p. desde el año 2007. Por CC.AA., la evolución ha sido desigual, si bien en todos los casos ha experimentado descensos.



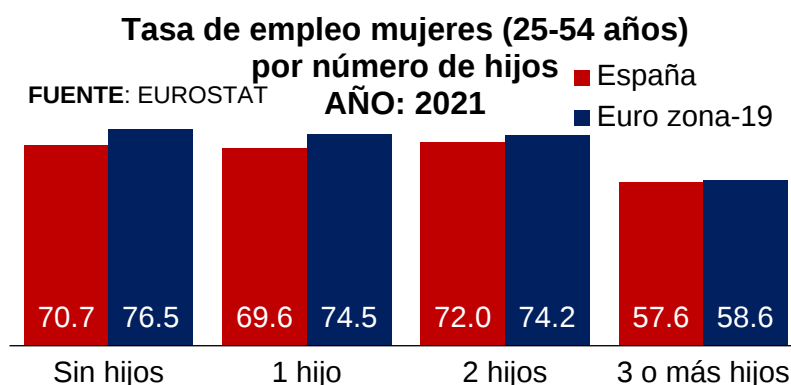
En cuanto a la calidad del empleo, a partir del análisis de los contratos celebrados en 2007 y 2021, se advierte un retroceso de la proporción de mujeres sobre el total de contratos. La diferencia ha

sido mayor en términos de mayor temporalidad (de 2,3 p.p. de 2021 respecto a 2007) y de parcialidad (de 6,4 p.p.) para el mismo periodo.



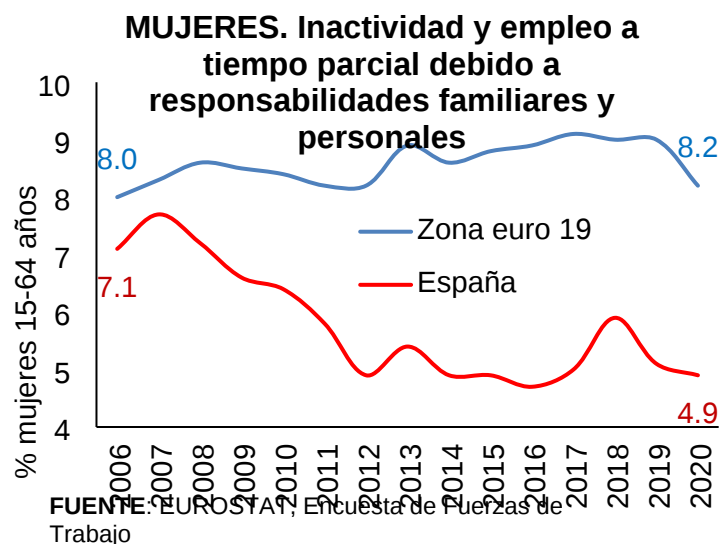
No obstante, estos datos se han tomado con una referencia temporal anual que no recoge aún los efectos de la reforma laboral¹¹, que precisamente expresa en su preámbulo que son las mujeres, junto con los jóvenes, quienes en mayor medida sufren la precariedad laboral derivada de una tasa de temporalidad inasumible con efectos mucho más allá de la duración efímera de los contratos de trabajo. Es precisamente este colectivo, el de mujeres, uno de los prioritarios que ha tratado de abarcar la norma.

En contexto europeo, se da la circunstancia de que en España las diferencias frente a la media de la Eurozona-19 disminuyen a medida que aumenta la familia. La diferencia entre la tasa de empleo en mujeres de 25 a 54 años en España frente a la Eurozona es de casi 6 p.p., mientras que la diferencia de la misma tasa en mujeres con 3 o más hijos es de 1 p.p.



Respecto a la inactividad y el empleo a tiempo parcial, la evolución que ha venido experimentando España frente a la Eurozona ha sido sensiblemente positiva. Aunque aún existen diferencias en este sentido entre hombres y mujeres, la tendencia advierte de que progresivamente se van reduciendo, tal y como se señalaba anteriormente.

¹¹ El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, entró en vigor el 31 de diciembre de 2021. Enlace a la publicación en el BOE: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-21788-consolidado.pdf>



No obstante, la propia Comisión Europea reconoce que “las mujeres aún soportan la mayor parte de las responsabilidades de los cuidados, con el 90% de la fuerza laboral formal de cuidados compuesta por mujeres, y 7,7 millones de mujeres sin empleo debido a las responsabilidades de cuidados”¹².

En materia retributiva, la **Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación**, viene a consolidar legislativamente la igualdad, siguiendo la pauta normativa de la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres**. Establece, en su artículo 3, como el primer ámbito objetivo de aplicación, el “Empleo, por cuenta ajena y por cuenta propia, que comprende el acceso, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, la promoción profesional y la formación para el empleo”¹³.

El hecho de que progresivamente la mujer tenga mayor participación en el mercado de trabajo redundará en la dinamización del mismo, haciendo también que, al aumentar su aportación a la Seguridad Social en materia de cotizaciones en los distintos regímenes, mejoren a su vez sus prestaciones y coberturas en materia de protección social, así como en su jubilación una vez terminada su vida laboral.

Análisis de impacto económico a nivel UE

Asimismo, y respecto de la directiva, el 18 de enero de 2017 se presentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) la evaluación de impacto para debate. El 8 de marzo de 2017 se presentó una versión revisada de la evaluación de impacto en la que se abordaban debidamente las cuestiones planteadas por el CCR. El 20 de marzo, el CCR emitió un dictamen favorable con observaciones, que se han tenido en cuenta en la evaluación de impacto definitiva.

A lo largo de todo el trabajo de evaluación de impacto se estudiaron diversas medidas legislativas y no legislativas en todos los ámbitos considerados importantes para abordar la infrarrepresentación femenina en el mercado laboral, a saber: permiso de maternidad, permiso de paternidad, permiso parental, permiso para cuidadores y fórmulas de trabajo flexible.

¹²

<https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285203804955/Comunicacion#:~:text=El%207%20de%20septiembre%20de.cuidan%2C%20de%20manera%20profesional%20o>

¹³ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-11589-consolidado.pdf>

A raíz de una evaluación de la eficacia, la eficiencia y la coherencia de cada opción, se estableció una combinación de opciones preferidas, presentadas inicialmente por la Comisión:

- Permiso de paternidad: introducción de un derecho individual de diez días laborables, remunerados como mínimo al nivel de la baja por enfermedad.
- Permiso parental: revisión del derecho vigente en la actualidad para regular: i) el derecho a acogerse a él de manera flexible (tiempo parcial o fragmentado); ii) derecho de cuatro meses intransferible entre progenitores; y iii) derecho de cuatro meses remunerado como mínimo al nivel de la baja por enfermedad (finalmente cambia en número de meses retribuidos, así como el nivel de retribución).
- Permiso para cuidadores: introducción de un derecho individual de cinco días al año, remunerado como mínimo al nivel de la baja por enfermedad (finalmente sin retribución).
- Fórmulas de trabajo flexible: derecho de los progenitores con hijos a cargo de hasta doce años y de los cuidadores a solicitar flexibilidad de horarios, de calendario o de lugar de trabajo durante un período de tiempo establecido, sin obligación por parte del empleador de conceder el cambio solicitado.

Pese al cambio que finalmente recoge la Directiva sobre las propuestas iniciales de la Comisión, las conclusiones sobre el impacto positivo de las medidas de conciliación, debe mantenerse:

Así: Por lo que respecta al impacto esperado de la combinación de opciones preferidas, el análisis cuantitativo realizado en la evaluación de impacto muestra que dicha combinación repercute de manera positiva en el PIB (+ 840 000 millones EUR, VAN 2015-2055), el empleo (+ 1,6 millones en 2050) y la mano de obra (+ 1,4 millones en 2050). El análisis muestra que el aumento de la participación en el empleo y la mano de obra será sobre todo femenino. Esta combinación supone un coste, aunque relativamente pequeño, para las empresas. No obstante, la mayor parte de ese coste se debe a la opción de fórmulas de trabajo flexible, que da por sentado que el nivel tanto de la demanda de esas fórmulas como de su aceptación será muy elevado, si bien los empleadores pueden denegar las peticiones de trabajo flexible, en particular cuando supongan un coste excesivo para la empresa. El coste total de dicha combinación para las empresas podría, por tanto, ser mucho menor.

Debe tenerse en cuenta, además, que las opciones preferidas de la combinación tienen fuertes sinergias y que los costes de la combinación de opciones preferidas podrían ser inferiores a la suma de los costes individuales de cada opción.

2º Impacto presupuestario.

En los siguientes apartados se desglosa el conjunto de medidas y previsiones que incorpora el anteproyecto junto con los recursos económicos necesarios para darles cumplimiento. El hecho de mejorar, con actualizados instrumentos legales, la regulación jurídica y de reforzar las garantías de los derechos de familias, niños, niñas y adolescentes, supondrá un incremento de las medidas a adoptar y, por tanto, un aumento de las cuantías de las partidas presupuestarias destinadas a estos fines.

A continuación, se listan las medidas incluidas en la Ley y su impacto presupuestario:

	Medida	Coste neto del despliegue total de la medida (millones de euros)
1	Expansión de la deducción para madres trabajadoras de niños y niñas de 0-3 años	284,2
2	Equiparación de las familias con una persona progenitora sola y 2 hijos a las familias numerosas	291,62
3	Incremento de la cobertura del subsidio por nacimiento	0,86
4		
5	Se incluye a familias que acogen permanentemente niños y niñas entre los beneficiarios de la prestación económica por nacimiento o adopción	0,285
6	Garantía de plaza gratuita de educación infantil a niños y niñas de hogares monoparentales durante 16 semanas	45,5
	Total	628,72

2.1 Expansión de la deducción para madres trabajadoras de niños y niñas de 0-3

La Ley recoge los cambios incluidos en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en el artículo 65 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que extienden la cobertura de la hasta ahora deducción para madres trabajadoras de niños y niñas de 0 a 3 años.

A las actuales beneficiarias –mujeres empleadas- hay que añadir a madres que en el momento de parto estén recibiendo o la prestación por desempleo o un subsidio, así como a aquellas que coticen 30 días en algún momento después del parto y antes de que el niño o niña cumpla los tres años de edad. Igualmente, mujeres con empleos parciales se verán beneficiadas al cobrar el máximo posible de la deducción a pesar de que su base imponible sea baja.

Empleando la Muestra Continua de Vidas Laborales se calcula el impacto tanto en incremento de cobertura como presupuestario de los cambios descritos.

Estimación gasto presupuestario deducción por maternidad

	#	millones de €	Prestación anual (€)
Beneficiarias actuales (0 a 3 años)	534.326	477,17	
__ tiempo completo	361.774	385,29	1.065
__ tiempo parcial	172.552	91,88	533
(1) Aumento deducción tiempo parcial			
Beneficiarias actuales	534.326	569,06	1.065
(2) Madres que estaban cotizando por desempleo			
Beneficiarias totales	579.734	617,42	1.065
__ beneficiarias actuales	534.326	569,06	1.065

__nuevas beneficiarias	45.408	48,36	1.065
------------------------	--------	-------	-------

(3) Madres que cotizaron 30 días post-parto

Beneficiarias totales	782.501	761,38	
------------------------------	----------------	---------------	--

__beneficiarias actuales	579.734	617,42	1.065
--------------------------	---------	--------	-------

__nuevas beneficiarias*	202.767	143,96	710
-------------------------	---------	--------	-----

* las nuevas beneficiarias tardan 13 meses en cotizar 30 días después del parto, por ello la prestación media se reduce en un tercio

Incrementos	#	Millones de €	Tasa de cobertura*
_ tiempo parcial		0	91,88
_ cotización desempleo	45.408	48,36	66,37
_ 30 días cotización post parto	202.767	143,96	89,58
Total	248.175	284,2	

*Calculada sobre los totales correspondientes

	millones de €	Δ millones de €
Diseño actual	477,17	
Aumento parcialidad	569,06	91,88
Aumento cotización desempleo	617,42	48,36
Aumento 30 días cotiz. post-parto	761,38	143,96
Total		284,2

	Beneficiarias	Δ beneficiarias	Tasa de cobertura
Diseño actual	534.325,85		61,17
Aumento parcialidad	534.325,85	-	61,17
Aumento cotización desempleo	579.734,32	45.408,47	66,37
Aumento 30 días cotiz. post-parto	782.501,33	202.767,01	89,58
Total		248.175	

2.2 Equiparación de las familias integradas por una única persona progenitora con 2 hijos a las familias numerosas

La propuesta consiste en que las familias integradas por una única persona progenitora con dos hijos menores de 26 años puedan acceder a las mismas ventajas que las familias numerosas.

Entre los beneficios que se establecen en el ámbito estatal están:

- Bonificación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social** (del empleador) por la contratación de un cuidador al servicio de una familia numerosa, siempre que los dos ascendientes o el ascendiente único, en su caso, ejerzan una actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar. Cuando la familia numerosa tenga la categoría de especial no será necesario que ambos progenitores trabajen fuera del hogar. Sólo será aplicable por la contratación de un único cuidador por cada unidad familiar que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa.

- Deducción para contribuyentes con derecho a la deducción del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad y los ascendientes o hermanos huérfanos de padre y madre, que formen parte de una familia numerosa.** Puede aplicarse en la declaración del IRPF o bien recibir su abono por anticipado cada mes: 1.200€ anuales o 100€ al mes por familia numerosa de 3 hijos; 1.800€ anuales o 150€ al mes para las de 4 hijos; 2.400€ anuales o 200€ al mes para las de 5 hijos; 3.000€ anuales o 250€ al mes para las de 6 hijos. Es decir, en el caso de las de categoría general, hasta 1.200 euros anuales y hasta 2.400 euros anuales para las de categoría especial. La cuantía de la deducción se incrementará hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que exceda

del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial. Las familias numerosas con un ascendiente o descendente con discapacidad también podrán deducirse adicionalmente 1.200 euros en el IRPF o percibir mensualmente 100€.

- Ampliación del período considerado como cotizado y del de reserva del puesto de trabajo en caso de **excedencia por cuidado de hijo**, que se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses.
- Derechos de **preferencia para conseguir becas**, reducción del 50% (para la categoría general), o exención (para la categoría especial) de tasas y precios públicos en el ámbito de la educación (matrículas, exámenes, expedición de títulos y diplomas).
- Deducción específica para el cálculo de la **renta familiar computable a efectos de solicitud de beca o ayuda**: se aplicarán 525 euros por cada hermano que sea miembro computable y conviva en el domicilio familiar, incluido el solicitante, cuando se trate de familias numerosas de categoría general, y 800 euros si se trata de familias numerosas de categoría especial, siempre que tenga derecho a este beneficio. Esta deducción será de hasta 2.000 euros en la convocatoria de ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
- Derecho a un subsidio que se concederá al **alumnado con necesidades educativas especiales que pertenezca a familias numerosas**, y que atenderá tanto a los gastos de comedor escolar como a los de transporte escolar. Para la concesión de los subsidios no se atenderá a la renta ni al patrimonio familiar.
- Bonificaciones del 20% o el 50% en las tarifas de **transporte por carretera, ferrocarril y marítimo** (dependiendo de la categoría, general o especial). Estas bonificaciones son acumulables a otros descuentos establecidos. Descuento del 5% o el 10% (según categoría) en las **tarifas aéreas nacionales**.
- Derechos de **preferencia en el acceso de actividades de ocio del IMSERSO** (turismo y termalismo social) y bonificación en las cuotas a abonar.
- **Bonificaciones** en los precios de museos, auditorios y teatros estatales.
- Beneficios en materia de **vivienda**, como acceso a ayudas financieras o preferencia en el acceso a viviendas protegidas.
- **Bono social** en la tarifa eléctrica consistente en que a las familias numerosas se les aplica un descuento del 25% sobre el total del consumo realizado de 4.140 kWh que se extenderá al periodo en que se encuentre vigente el correspondiente título de familia numerosa sin necesidad de renovación anual. No obstante, si la renta anual de la unidad familiar es igual o inferior a 2 veces el IPREM en 14 pagas (15.817,2 € en 2021), el descuento será del 40% al tener la consideración de consumidor vulnerable severo.
- Exención del pago de **tasas** por la expedición o renovación del DNI y del Pasaporte a los miembros de familias numerosas
- Acceso a medidas de apoyo para **familias numerosas en situación de vulnerabilidad en relación con su vivienda habitual** (Fondo Social de Viviendas y otras medidas de protección para familias con dificultades en el pago de deudas hipotecarias).

Del listado anterior se desprende que el principal impacto en los Presupuestos Generales del Estado que tendría esta medida se derivaría de la deducción por familia numerosa. Para estimar cual sería el impacto hay que considerar dos aspectos: 1) las deducciones que en media están recibiendo las familias numerosas y 2) el número de familias monoparentales que potencialmente podrían recibir la nueva deducción.

1) Deducciones que en media están recibiendo las familias numerosas

- El número¹⁴ de declaraciones de las deducciones en la cuota en el concepto de familia numerosa ascendió en 2017 hasta las 680.494 declaraciones.
- El número de familias con título de familia numerosa en ese período era de 696.798, según las Estadísticas de Títulos de Familia Numerosa¹⁵, esto supone el 97,7%.
- La cuantía total por deducciones en la cuota en concepto de familia numerosa es de 670,3 millones¹⁶.
- Esto significa que en media la deducción asciende hasta los 985€ por familia numerosa y año.

2) Hogares monoparentales.

- Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) el INE¹⁷ en España hay 1.944.800 hogares monoparentales. Sin embargo, hogares monoparentales con 2 hijos menores de 26 años hay 339.683 hogares.
- De acuerdo a la Estadísticas de Títulos de Familia Numerosa, 168.370 familias con 2 hijos tienen el título de familia numerosa¹⁸, de ellas 82.848 son familias sin hijos con discapacidad y 85.522 son familias con hijos con discapacidad. Sin embargo, no todas estas familias cuentan necesariamente con una única persona progenitora ya que también se les reconoce esta categoría si en una familia con dos hijos, sean o no comunes, al menos uno de éstos tenga una discapacidad o si ambos ascendientes fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100; así como dos o más hermanos huérfanos de padre y madre.
- Asimismo, esta misma estadística muestra que de los 754.645 títulos de familia numerosa, 163.729 tienen un ascendiente (son monoparentales), de los cuales en 33.675 casos el ascendiente es varón y en 130.054 el ascendiente es mujer. Esto supone que el 21,7% del total de las familias numerosas están compuestas por un único ascendiente.
- Aplicando este porcentaje del 21,7% a las 168.370 familias con 2 hijos que tienen el título de familia numerosa, se obtiene que 36.530 familias con título de familia numerosa cumplen las dos características de tener 2 hijos y un ascendiente.

¹⁴ Cuadro V.25. Número de declaraciones de las deducciones en la cuota. Período 2007-2017. Informe de Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español 2008-2018:

<https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/Tributos/Estadisticas/Recaudacion/2018/Analisis-estadistico-recaudacion-2018.pdf>

¹⁵ <https://www.msbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/estadistFNumeros/Enlace.htm>

¹⁶ Cuadro V.27. Deducciones en la cuota. Importes. Período 2007-2017. Informe de Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español 2008-2018:

<https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/Tributos/Estadisticas/Recaudacion/2018/Analisis-estadistico-recaudacion-2018.pdf>

¹⁷ <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/p274/serie/prov/p01/0/&file=01017.px&L=0>

¹⁸ <https://www.msbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/estadistFNumeros/Enlace.htm>

- Por tanto, de los 339.683 hogares que según el INE son monoparentales con dos hijos, 36.530 ya tienen título de familia numerosa y no les afectaría el cambio normativo. En consecuencia, **la medida afectará a 303.153 familias.**
- Suponiendo que la relación entre el número de hogares y declarantes es el equivalente al que se observa en el caso de las familias numerosas (97,7%) el número de potenciales beneficiarios de la deducción es de 296.060.
- Multiplicando ese número de 296.060 nuevas declaraciones por la cuantía media de 985€/año se obtiene un **presupuesto total de 291.624.792€/año.**

Cuadro resumen		
Familias monoparentales con 2 hijos	(1)	339.683
Familias monoparentales con 2 hijos y título de familia numerosa	(2)	36.530
Familias beneficiadas	(3)=(1)-(2)	303.153
Declarantes	(4)=(3)*97,7%	296.060
Presupuesto	(5)=(4)*985€/ año	291.624.792 €

2.3 Incremento de la cobertura del subsidio por nacimiento

Se extiende el subsidio por nacimiento, actualmente vigente solo para trabajadoras en caso de parto que reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor salvo el período mínimo de cotización, a todas las personas trabajadoras incluidas en el Régimen General en la situación de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar.

Situación actual				
	Beneficiarias	Prestación	Coste	Incremento
<i>Madres biológicas en alta</i>	358	850 €	304.228 €	
Modificaciones				
<i>Madres (adop., acog, guarda) en alta</i>	364	850 €	309.441 €	5.213 €
<i>Padres (adop., acog, guarda) en alta</i>	1.012	850 €	860.383 €	860.383 €
Total	1.377	850 €	1.169.824 €	865.596 €

Fuente: MCVL, Seguridad Social y Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Observatorio de la Infancia

2.4 Se incluye a familias que acogen permanentemente niños y niñas entre los beneficiarios de la prestación económica por nacimiento o adopción

A efectos de la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad y de la prestación por parto o

adopción múltiples, se incluye el supuesto de acogimiento familiar (en la actualidad solo es aplicable para los casos de nacimiento o adopción).

Nuevos acogimientos 2021	3.138
acogimientos 2021 sin disc	17.178
acogimientos 2021 con disc	1.714
% discapacidad	9
Nuevos acogimientos con discapacidad	285
Impacto presupuestario	284.698,92 €

Fuente: Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia
Observatorio de la Infancia

De manera adicional, se aclara que la normativa ya en vigor ya se está reconociendo como derecho subjetivo a la atención al desarrollo infantil temprano, sin que ello exija, por tanto, la dotación de recursos adicionales.

Por otro lado, el incremento de cotización sobre la cuantía resultante de la aplicación del artículo 43.2.b) será a cargo del cuidador tal y como establece el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 615/2007.

2.5. Garantía de plazas gratuitas en centros de educación infantil para niños y niñas de familias con una única persona progenitora

La ley recoge que las CC.AA. garantizarán que los niños y niñas de familias con una única persona progenitora tendrán garantizado el acceso gratuito en centros de educación infantil durante, al menos, 16 semanas dentro de los veinticuatro meses a contar desde su nacimiento, desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien desde la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

A continuación, se incluye un cálculo estimativo del coste de esta medida. Para su cálculo no se ha tenido en cuenta cuántos niños y niñas de familias monoparentales o monomarentales ya acceden a educación infantil gratuita; ni puede saberse cuántas, a pesar de la gratuidad, optarán por otro tipo de cuidados de los menores de edad. Por lo tanto, es una estimación por lo alto.

Nacimientos de niños y niñas de familias monoparentales	37.928
Precio medio mensual	300 €
Precio medio semanal	75 €
Semanas	16
Impacto presupuestario	45.513.600 €

Fuente: ECH y Federación de Usuarios y Consumidores Independientes

3º Detección y medición de las cargas administrativas.

Para el análisis de las cargas administrativas asociadas al anteproyecto se ha tenido en cuenta el anexo V de la Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis del impacto normativo.

Así, se considera carga administrativa aquella actividad de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. Dentro de esta definición se encuentran las actuaciones de solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos, la comunicación de datos y presentación de documentos, la conservación de documentos, la inscripción, baja o modificación en un registro, la llevanza de libros o la acreditación de avales entre otros aspectos.

En atención a lo anterior, una vez examinado el articulado se han identificado una serie de obligaciones que, tras la aprobación de la Ley, podrían generar cargas administrativas. Concretamente, dichas cargas se encuentran reflejadas en los siguientes artículos: (Pendiente cuantificación).

- Artículo 22: en la elaboración de planes de urbanismo se contemplará un informe de evaluación del impacto convivencia y de género, en las familias y en la infancia, que tenga en cuenta, para el diseño y planificación urbanística, las necesidades relacionadas con los cuidados y el uso, accesibilidad y reserva de espacios y entornos habitables para las familias, incluyendo especialmente las necesidades que afectan a la infancia, la juventud y las personas mayores y personas con discapacidad o en situación de dependencia.
- Artículo 37: El reconocimiento de la condición de familia monoparental, referido a las situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora, exige la acreditación mediante título oficial expedido por la comunidad autónoma donde tengan su domicilio, previa solicitud de la persona progenitora, tutora, acogedora, guardadora u otra de la unidad familiar con capacidad legal.
- La creación en aplicación de lo previsto en la Ley de nuevas prestaciones o beneficios exigirá de las personas que quieran acceder a ellos los correspondientes trámites de solicitud y aportación de la documentación acreditativa de las condiciones que dan derecho a su disfrute.

4º Impacto por razón de género.

El análisis del impacto por razón de género que supone este anteproyecto de ley se lleva a cabo en virtud de las previsiones contenidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 2.1.f) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo.

4.1 Descripción de la situación de partida

Los cuidados, tradicionalmente invisibilizados e infravalorados, son una actividad esencial para la vida y para el sistema socioeconómico; y las familias –y dentro de éstas la mujeres- son sus grandes sostenedoras. Ante la expansión generalizada del virus, que reveló la extrema vulnerabilidad de las personas mayores en centros residenciales, provocó el cierre de los centros educativos, de todo tipo de servicios, y quebró las redes de apoyo familiar, constatamos cómo las mujeres suplieron estas carencias soportando una responsabilidad desproporcionada en la primera línea de la crisis de la Covid-19 en cuanto trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias.

Según la información de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres dedican 63,6 horas semanales al trabajo remunerado y al no remunerado, incluyendo desplazamientos, frente a las 56,7 horas semanales que dedican los hombres. Según la misma encuesta, el porcentaje más alto de las mujeres trabajadoras que dedican tiempo al cuidado y educación de hijos o nietos (33,9%) le dedican cuatro horas diarias; en cambio, el porcentaje más alto de hombres trabajadores que así lo hacen (36,7%) dedican dos horas diarias

a este tipo de cuidados y educación. De todos los contratos a tiempo parcial vigentes a día de hoy en España, el 75% corresponden a mujeres, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Estas incrementan el tiempo dedicado al trabajo no remunerado (30 horas a la semana) cuando tienen jornada a tiempo parcial. Los hombres, en cambio, dedican habitualmente el mismo número de horas al trabajo no remunerado (14 horas a la semana) independientemente de que trabajen a tiempo parcial o a jornada completa. Como consecuencia de todo ello, y tal y como acreditan los datos del INE correspondientes a 2019, en España la renta anual media del hogar cuando la persona de referencia es una mujer equivale al 82,6% de la renta anual de los hogares cuando la persona de referencia es el hombre.

Los derechos de conciliación parten de la necesidad de comprender que la vida es una realidad vulnerable, que todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos cuidar y ser cuidadas. Sin embargo, el actual sistema funciona sobre una suerte de ficción de autosuficiencia de las personas: se nos supone libres de cuidados, con todas las necesidades de reproducción resueltas y sin responsabilidades que condicionen nuestra presencia en el mercado laboral y en el ámbito público.

Superar esta situación pasa por visibilizar, reconocer y dar valor a los cuidados como un trabajo indispensable para la sostenibilidad de la vida, y por avanzar en una reorganización socialmente justa de los mismos, priorizando su universalidad, su calidad, y su carácter público, garantizando su dignificación y profesionalización, y promoviendo la corresponsabilidad para evitar que sigan recayendo en las familias y, dentro de éstas, casi en exclusiva en los hombros de las mujeres, con las innegables consecuencias que esto tiene para su acceso al mercado de trabajo y, por tanto, para sus ingresos e independencia económica presente y futura. Son necesarias, por tanto, políticas públicas que aseguren la protección jurídica, social y económica de la familia, promuevan el reparto equitativo de responsabilidades entre mujeres y hombres dentro de las mismas y garanticen la protección integral de las hijas e hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación.

4.2 Análisis del Impacto de género

Esta Ley cuenta, en principio, un impacto positivo por razón de género, ya que la perspectiva de género, no discriminación y fomento de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades es uno de sus principios rectores. Así, la ley prevé entre otras medidas:

- Medidas de apoyo específico a las familias en las que existe una única persona progenitora (el 82% del total cuentan con una mujer al frente).
- Hacer efectivo el derecho a la conciliación de su vida personal, familiar y laboral y a ejercer de forma corresponsable estos derechos garantizando las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres con el fin de que todas las personas puedan atender sus responsabilidades familiares, progresar profesionalmente y desarrollarse en todos los ámbitos vitales.
- Priorizar en políticas de activación para el empleo a las personas desempleadas con responsabilidades familiares, de manera singular a las mujeres y en particular a las mujeres víctimas de violencia de género, y mandatando a las administraciones públicas a promover las actuaciones necesarias para que las personas, en particular las mujeres, no se vean obligadas a abandonar sus trabajos, ni sus carreras profesionales por razones de cuidado

4.3 Valoración del Impacto de Género

Se prevé que esta norma tenga un **impacto positivo por razón de género**, ya que incorpora la perspectiva de género en todo su articulado, prevé medidas específicas para atajar las brechas de género en el ejercicio de los derechos de conciliación, y establece acciones positivas para facilitar el acceso al empleo de las personas desempleadas con responsabilidades familiares, de manera singular a las mujeres, y en particular a las mujeres víctimas de violencia de género

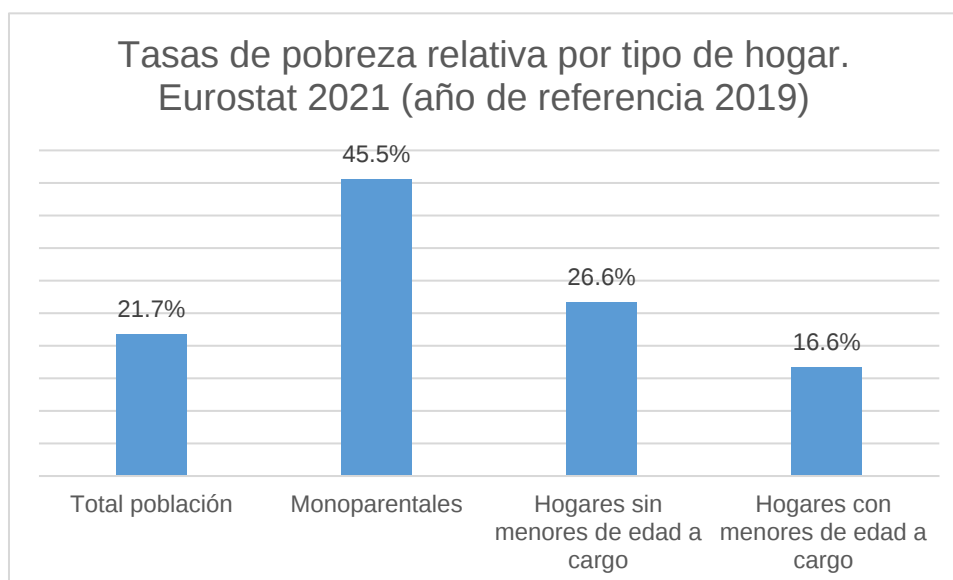
5º Impacto en la infancia y adolescencia

El análisis del impacto debe identificar el efecto previsible que el proyecto normativo tendrá en la infancia y la adolescencia.

Este Anteproyecto de Ley de Familias se vincula con el interés superior del menor y está relacionado con los objetivos de las políticas de infancia y adolescencia y de familia. Estos principios y objetivos forman parte de la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Tal y como se recoge en el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta nueva ley pretende ampliar la cobertura y suficiencia del sistema de prestaciones de apoyo a las familias, convergiendo paulatinamente con la media de la Unión Europea en gasto público en protección social de la familia y la infancia (de la que actualmente España se encuentra a 1 p.p. en relación al PIB) e incrementando la eficacia de las políticas familiares mediante una mejora del diseño conjunto del *mix* de beneficios fiscales y transferencias sociales.

El impacto en la infancia de incrementar y mejorar la protección social a la crianza se ha de reflejar en una reducción de la incidencia de la pobreza en familias con niños y niñas a cargo; que supera en 10 p. p. la tasa de pobreza del conjunto de la población y que llega hasta el 45,5% de las familias en hogares monoparentales y monomarentales.



La expansión de la deducción a madres trabajadoras, que potencialmente puede cubrir a un 90% de los niños y niñas menores de tres años, su combinación con el Complemento de Ayuda a la Infancia del IMV, y la protección reforzada a las familias monoparentales incluyendo aquellas con dos descendientes o más en la definición de familia numerosa, incrementa la acción pública del estado dirigida a reducir la pobreza infantil.

En relación a la evaluación del impacto en la infancia y la adolescencia, exigido en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en el artículo 2.1.f) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, se considera que el Anteproyecto de Ley de Familias tiene un **impacto positivo en relación con la protección y bienestar de las personas menores de edad**, ya que las políticas de apoyo a las familias se basarán en una serie de valores fundamentales entre los que se destacan entre otros:

- El reconocimiento de las familias como agentes de solidaridad, educación, cuidado, transmisión de valores cívicos y éticos y derechos humanos fundamentales y como ámbito privilegiado para el desarrollo personal, social, emocional y afectivo, **especialmente de la infancia.**

- El reconocimiento del valor social de la maternidad y la paternidad y de la necesidad de asegurar una **crianza positiva para las niñas, niños y adolescentes** y también en beneficio de sus madres, padres o personas responsables y de toda la sociedad.
- El reconocimiento del **interés superior de niñas, niños y adolescentes** dentro y fuera de la familia y de sus derechos sin sufrir discriminación por cuál sea su modelo de familia.
- La protección especial a las familias con situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social y/o necesidades de apoyo, así como a los miembros más vulnerables de las familias.

Por otro lado, entre los principios rectores de la futura norma se encuentran los siguientes:

- Perspectiva de género, no discriminación y fomento de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades, y la accesibilidad universal. Por el que se reconocerá a niñas, niños, adolescentes, y personas con discapacidad su dignidad y se promoverá el ejercicio pleno de los derechos y responsabilidades que tienen reconocidos en la normativa internacional y en nuestro ordenamiento jurídico.
- Promoción, prevención y protección de los derechos humanos. De manera singular, se promoverán recursos para prevenir, disminuir o encauzar los conflictos. Así mismo, se identificará y se dará respuesta a la violencia en las relaciones familiares, con especial atención a la violencia de género en el ámbito familiar y a la violencia intragénero, **así como a la violencia contra la infancia y la adolescencia.**

Además, resulta procedente resaltar la protección de las administraciones públicas a la familia estableciendo como medida general que ***ninguna previsión derivada de esta norma deberá aplicarse o interpretarse de forma que niñas, niños y adolescentes reciban diferente trato o vean menoscabados sus derechos en función de la situación personal jurídica o administrativa de sus progenitores o personas adultas responsables.***

Por otra parte, se recoge el derecho a la atención temprana (en línea con lo establecido en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia) no limitada a la primera infancia, así como incorporando en las políticas transversales la perspectiva de singularidad y necesidad de estas familias.

6º. Impacto en la familia.

De acuerdo a lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las familias numerosas, incorporada por la Disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la presente norma tiene un **impacto positivo en las familias.**

El objetivo fundamental de la norma es precisamente mejorar la protección social, jurídica y económica de las familias, atendiendo a la diversidad de modelos familiares, superando tanto la fragmentación como la debilidad en cuanto a intensidad protectora de la normativa vigente.

En este sentido, la norma tiene alcance universal e inclusivo y se proyecta sobre todas las familias que tienen su domicilio en España, de acuerdo con las definiciones y condiciones previstas en los artículos 2 y 3, siendo destinatarias todas las personas con independencia de cualquier otra condición o circunstancia personal o social que responda a motivos prohibidos de discriminación recogidos en los instrumentos internacionales.

Esta voluntad de beneficiar a todas las familias es compatible con un tratamiento específico a colectivos familiares que presentan necesidades o características singulares y que en la norma proyectada cuentan con una regulación ex profeso, en muchos casos, con carácter novedoso en el ordenamiento jurídico estatal para ordenar y garantizarles un nivel mínimo de protección que atienda a esas necesidades o singularidades. Así se incluye una regulación sistematizada de las situaciones familiares en que haya una única persona progenitora (que representan cerca del 10% del total de hogares de nuestro país y el 23% de los hogares con personas menores a cargo), que hasta ahora

carecían de un marco legal estatal integrado; se profundiza en la protección de las familias numerosas, con una actualización y mejora de su legislación específica (hasta ahora la única norma estatal en materia de protección a las familias de carácter general) y se amplía con la consideración de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza; se establecen garantías y medidas de apoyo para las situaciones familiares en que existan personas con discapacidad y/o en situación de dependencia; igualmente para aquellas en que existan personas pertenecientes a los colectivos LGTBI; se reconocen medidas específicas de apoyo a las familias con nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples; se prevén medidas de protección y apoyo a las familias adoptivas y acogedoras; se regula también con carácter novedoso en nuestro ordenamiento la protección a las situaciones familiares con hijas o hijos de uniones anteriores, , que constituyen una realidad familiar creciente pero bastante invisibilizada, incluso en términos estadísticos, y que requieren de un tratamiento jurídico y de protección social propios que atiendan a sus particularidades; igualmente se aborda la situación de las familias residentes en el medio rural y de las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros proceden de otro estado o territorio, se encuentran en el exterior o de emigrantes . Finalmente, también hay previsiones para otros colectivos con necesidades singulares de apoyo en sus relaciones familiares como son la población penitenciaria o la que se encuentra en situación de institucionalización.

Además de destacar la extensión del ámbito subjetivo de la norma, es preciso señalar que las disposiciones que contiene supondrán una mejora objetiva del nivel de protección en varias dimensiones, tanto en términos económicos expresado en porcentaje de PIB del gasto social destinado a la función Familia e Infancia (España presenta un diferencial de casi un punto de PIB en relación con la media de la UE), como en el ámbito estrictamente jurídico, al abordarse el reconocimiento y el principio de igualdad de trato de los diversos modelos familiares, en especial para garantizar a niñas, niños y adolescentes los mismos derechos con independencia de su modelo de familia y un tratamiento específico en supuestos de conflictividad familiar o violencia. Las normativas sectoriales deberán pues revisarse y adaptarse a la realidad plural de las familias.

Desde el punto de vista de la protección social, la norma contiene mejoras relevantes en materia de prestaciones económicas (destacando la nueva prestación económica por crianza), permisos parentales (ampliación de los permisos retribuidos por razones familiares, creación de un nuevo permiso parental), servicios sociales de apoyo a las familias, medidas de apoyo a la crianza (destacando el desarrollo de un marco estatal de apoyo a los primeros 1.000 días) y a la conciliación y la corresponsabilidad laboral y familiar.

Asimismo, la norma incorpora previsiones dirigidas a la protección de la salud y el bienestar de las familias, incluyendo la garantía del derecho de las personas menores de edad y sus familias a tener acceso universal a la atención temprana, gratuita y de calidad y no limitada a la primera infancia.

También se abordan otras materia relevantes para la vida familiar como son los planes y programas en materia de vivienda y urbanismo (previéndose la evaluación del impacto convivencial y de género, en las familias y en la infancia); el acceso a recursos y medidas de apoyo en materia educativa (especialmente en relación con los menores de familias vulnerables), actividades culturales, de ocio, tiempo libre y deportivas; así como relación con las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tanto en lo que se refiere a su uso en el ámbito familiar como a las garantías de acceso a internet a los hogares con personas menores o con discapacidad.

Debe destacarse, a efectos de evaluar el impacto de la norma en las familias, la atención particular y transversal que se hace a las situaciones de vulnerabilidad, que se definen en el artículo 29 y que recoge no sólo criterios económicos sino también sociales vinculados a la concurrencia de circunstancias adversas derivadas de una situación sobrevenida, negativa no programada, que genera fragilidad, precariedad, indefensión o incertidumbre, de acuerdo con la valoración realizada por los servicios sociales según criterios técnicos. A estas familias, que en buena parte son las que se consideran en riesgo de pobreza y exclusión, les dedica la norma proyectada un amplio abanico de medidas destinadas a compensar las desventajas y desigualdades de partida, especialmente cuando cuentas con personas menores a cargo, a efectos de combatir la llamada pobreza infantil, que en gran medida es la pobreza de sus familias.

También merece mención específica la regulación que se contiene para favorecer unas mejores relaciones familiares y el ejercicio positivo de las responsabilidades parentales. Con ello, se hace eco de la Recomendación Rec (2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad (Adoptada por el Comité de Ministros el 13 de diciembre de 2006 en la 983ª reunión de los Delegados de los Ministros). Dicha Recomendación tiene como eje inspirador el concepto de parentalidad positiva, un concepto integrador que permite reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad actual y al mismo tiempo desarrollar orientaciones y recomendaciones prácticas sobre cómo articular sus apoyos desde el ámbito de las políticas públicas de familia.

La Ley parte del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos también dentro de la familia, de la idea de que la parentalidad positiva favorece el desarrollo de relaciones paterno-filiales beneficiosas y la optimización del potencial de desarrollo de los mismos, debiendo tenerse en cuenta que el término progenitores, tutores o guardadores comprende a todas las personas que participan en el cuidado y la educación de niñas, niños y adolescentes. Por ello, la Ley establece medidas destinadas a favorecer y adquirir tales habilidades, siempre desde el punto de vista de la individualización de las necesidades de cada familia y dedicando una especial atención a la protección del interés superior del menor en los casos de conflicto familiar.

Finalmente, la norma proyectada también pretende facilitar un entorno favorable a la libre toma de decisiones de la ciudadanía sobre su modelo de vida familiar, la constitución de una familia, la tenencia de hijas o hijos, en un contexto sociodemográfico caracterizado por la baja natalidad (aunque al tiempo se manifieste un deseo de un mayor número de hijos que los realmente se tienen), el envejecimiento progresivo, la despoblación de amplias zonas de nuestro territorio, el retraso en la emancipación de los y las jóvenes y por ende en la formación de nuevos hogares y familias. Muchos de estos fenómenos obedecen a causa externas y ajenas a la voluntad de las personas y guardan relación con dificultades de acceso al empleo, a la vivienda o a los servicios de apoyo a la conciliación. Muchos de estos retos son abordados en esta norma.

A la vista de todo lo anterior, cabe concluir que el impacto en familias de la norma proyectada es totalmente positivo tanto por dirigirse directamente al conjunto de las familias de nuestro país como por atender a situaciones particulares merecedoras de apoyo especial, así como por la mejora evidente de los niveles de protección jurídica, social y económica que constitucionalmente se deben asegurar por parte de los poderes públicos, avanzando a la vez en la sistematización, coordinación, cooperación y participación de las políticas familiares en España, superando las fragilidades e insuficiencias que vienen lastrando desde hace tiempo su eficacia e intensidad protectora.

7º. Impacto en materia de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El análisis del impacto del anteproyecto de ley en este ámbito se lleva a cabo en virtud de la previsión contemplada en el artículo 2.1.g) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre.

De acuerdo con el análisis efectuado, el anteproyecto de ley propuesto tendrá un **impacto positivo en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La inclusión entre los principios rectores de la ley de la promoción del ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad coadyuva al impacto positivo de la ley en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad (art. 4.2).
2. Se prevé un apoyo específico por parte de las administraciones públicas competentes a las familias en las que concurre algún tipo de discapacidad en el desarrollo y bienestar de niñas y niños

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD)¹⁹, referidos al año 2008, existían en España prácticamente 3.850.000 personas con algún tipo de discapacidad declarada.

	Ambos sexos (en miles)
De 0 a 5 años	60,4
De 6 a 15 años	78,3
De 16 a 24 años	75,1
De 25 a 34 años	168,7
De 35 a 44 años	286,5
De 45 a 54 años	406,0
De 55 a 64 años	545,8
De 65 a 69 años	292,8
De 70 a 74 años	404,7
De 75 a 79 años	503,8
De 80 a 84 años	482,6
De 85 a 89 años	339,8
De 90 y más años	203,4
Total	3.847,9



Los datos más recientes de personas con discapacidad acreditada, a los que, por consiguiente, se les aplicaría el anteproyecto de ley (potenciales beneficiarios), los proporciona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). La Base Estatal de datos de personas con discapacidad -actualizada a 31 de diciembre de 2019-, se encuentra integrada por los datos aportados por todos los ámbitos territoriales del Estado, información a la que se ha aplicado proceso de validación y control de vivencia mediante cruce con fichero histórico de personas fallecidas facilitado por el INE, conteniendo finalmente un total de 3.257.058 registros relativos a personas que, efectuada la valoración de su discapacidad, han resultado con la consideración de personas con discapacidad; de ellas 1.637.077 son hombres y 1.619.981 son mujeres.

La información sobre el número total de personas con discapacidad ha de conjugarse con la que ofrece el INE en relación con la configuración de los hogares en los que se integran las personas con discapacidad. De conformidad con los datos de la Encuesta EDAD 2008 el 25%

¹⁹ En abril de 2022 se publicarán los datos actualizados, de acuerdo con la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.

de las personas con discapacidad conviven en un hogar biparental con hijos, mientras que un 10,2% vive en un hogar monomarental o monoparental.

Total (en miles)	Hogar unipersonal	Pareja sola	Pareja con hijos	Padre o madre solo, con algún hijo	Otro tipo de hogar
3.787,4	607,3	945,3	970,2	388,0	876,7

- La priorización de personas desempleadas con responsabilidades familiares y en particular aquellas familias en las que al menos uno de sus miembros es una persona con discapacidad en las políticas activas y de activación para el empleo, en la búsqueda y la consolidación para el empleo, tiene un impacto positivo en el colectivo de personas con discapacidad que adolece de dificultades añadidas en el acceso al mercado de trabajo.

De acuerdo con la publicación [El Empleo de las Personas con Discapacidad](#), del INE, el 34,3% de las personas de 16 a 64 años con discapacidad oficialmente reconocida, en 2020 eran activos. Esta tasa de actividad era 41,8 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. Por su parte, la tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 26,7% (del 64,3% para las personas sin discapacidad. El 89,6% de los ocupados eran asalariados y, de estos, el 75,0% tenía contrato indefinido. La tasa de paro para el colectivo con discapacidad fue del 22,2%. Esta tasa era 6,8 puntos superior a la de la población sin discapacidad.

- La Constitución, en su artículo 39.1, establece que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias. Por su parte, el artículo 44.1 de la norma fundamental regula la promoción y tutela de los poderes públicos en el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. En ejecución de dichas disposiciones, el anteproyecto de ley contempla la extensión de la oferta de servicios de atención socioeducativa, de ocio, tiempo libre y culturales, así como el impulso de programas de respiro familiar).
- Se contempla la garantía de la atención temprana a las personas menores de edad con discapacidad.
- La promoción, por parte de las administraciones públicas competentes, del acceso a internet a todos los hogares familiares con personas mayores de edad con discapacidad contribuye a reducir la brecha digital del colectivo.

La Fundación Adecco, en su [Informe Tecnología y Discapacidad](#) del año 2021, identifica las principales barreras en el acceso, uso y manejo de nuevas tecnologías por parte de las personas con discapacidad. El 45% de las personas con discapacidad, de acuerdo con este informe, considera que el manejo de las nuevas tecnologías es complejo; el 29% aduce problemas de accesibilidad, mientras que un 24% indica la insuficiencia de medios económicos como principal barrera de acceso a los medios digitales.

- El anteproyecto de ley reproduce de manera casi íntegra el artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo al respeto del hogar y de la familia, con lo que se afianza el compromiso del Estado español no solo con el citado instrumento normativo internacional sino con la igualdad efectiva de las personas con discapacidad en su derecho a formar una familia. Asimismo, se garantiza el mantenimiento de los lazos filiales mediante los adecuados apoyos para la crianza, especialmente de las madres con discapacidad o con problemas de salud mental.
- Se contemplan medidas de apoyo específico en materia sociosanitaria y de vivienda.
- Una de las circunstancias que pueden dificultar la efectiva igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad es la limitación de apoyos a los que se enfrentan aquellas que residen en entornos rurales. El anteproyecto de ley prevé el desarrollo de medidas y apoyos para que las familias con personas con discapacidad puedan permanecer en el entorno rural.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad publicó en 2027 el estudio “Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción”, del que extractamos algunas conclusiones:

“En España, prácticamente un millón de personas con discapacidad reside en el Medio Rural, es decir una cuarta parte de la población. La distribución por género y edad indica una población más envejecida que en el medio urbano, y con una mayoría de mujeres. Las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Cantabria y La Rioja presentan una tasa de ruralidad superior a la media española. Las provincias de Ávila, Cuenca, Teruel, Zamora, Segovia, Soria, Cáceres, Ourense, Lugo, Guadalajara, Toledo, León, Lleida, Badajoz, Navarra, Palencia y Huesca, tienen a la mitad o más de su población con discapacidad residiendo en el Medio Rural.

Entre los factores de riesgo, o barreras para la inclusión social se han detectado las siguientes:

- Las administraciones públicas y organizaciones que prestan recursos para la inclusión social (sistema sanitario, social, entidades deportivas, culturales...) tienen un despliegue primario en el Medio Rural, lo que limita su oferta de recursos.
- En relación con los apoyos específicos, las personas en el entorno rural se ven condicionadas a utilizar los servicios disponibles, usualmente fuera de su municipio, lo que dificulta el acceso a los recursos, por el deficiente estado de las comunicaciones y la ausencia de accesibilidad en los transportes.
- Accesibilidad y Diseño para todas y todos. El acceso a derechos de ciudadanía en el Medio Rural se encuentra muy mediada por condicionantes de accesibilidad, tanto en el interior de las viviendas, como en el entorno construido.
- Transporte. Las personas con discapacidad en el Medio Rural se ven obligadas a realizar con frecuencia desplazamientos para los que no cuentan con transporte público, y escasamente adaptado. Ello dificulta el acceso a recursos importantes para el bienestar, como el empleo, la formación o las actividades recreativas.
- Aislamiento. La escasez de oportunidades en el Medio Rural se alía con la falta de adaptación de las mismas, así como con la escasa presencia de las organizaciones de apoyo.
- Sobrecarga familiar. La ausencia de apoyos sobre el terreno obliga a las familias a atender tareas de asistencia que a la postre suponen un coste de oportunidad en forma de renuncia a otras actividades, ya sean estas productivas, formativas o de otro tipo.
- Los sistemas de apoyo específicos por discapacidad se despliegan de manera irregular en el Medio Rural, con existencia de zonas con escasa dotación de recursos y necesidad frecuente de servicios de transporte.
- Pobreza. La población con discapacidad no presenta situaciones de pobreza de manera más frecuente en el Medio Rural, pero sí se demuestra estadísticamente que el riesgo de pobreza es considerablemente más alto que el de la población con discapacidad en el Medio Urbano, y muy superior al de la población sin discapacidad.
- Empleo. Muy pocas personas con discapacidad en el Medio Rural se encuentran en situación activa y en las que lo hacen, la estabilidad laboral es escasa.
- Educación y Formación. Existen barreras para la inclusión de las personas con discapacidad en la información, sensibilización y formación del personal que gestiona y administra la enseñanza, ya sea esta reglada o no. Existen también dificultades relacionadas con los dispositivos de apoyo necesarios para los alumnos con distintas características y necesidades.
- Invisibilidad. Los sistemas de información sobre los servicios y programas comunitarios son escasos, no siempre accesibles, y no promocionan la participación de la población con discapacidad. Permanecen en el Medio Rural estereotipos negativos hacia la población con discapacidad.

- El acceso y uso de internet y las TIC en la población con discapacidad en el Medio Rural es muy escaso, lo cual redundará en menos oportunidades para la formación, el empleo y la participación social.
 - El tejido empresarial en el Medio Rural es casi inexistente, de pequeño tamaño y poco sensibilizado hacia la contratación de personas con discapacidad. A esta dificultad se unen las barreras para la financiación del emprendimiento.
 - Las mujeres con discapacidad en el Medio Rural enfrentan dificultades extraordinarias para la inclusión social, derivadas de una mayor invisibilidad y estereotipos de género”.
10. La modificación de la Ley General de Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, supone un espaldarazo a las familias con menores con discapacidad hasta los 26 años incluyendo a este colectivo a los efectos de la prestación económica por cuidado de menores. De acuerdo con las estadísticas, las personas con discapacidad soportan un riesgo de exclusión más elevado que las personas sin discapacidad y esto se debe a un rasgo definitorio de la discapacidad: su multidimensionalidad. Esta multidimensionalidad se refleja en varios aspectos tales como una mayor dificultad en el acceso al mercado laboral o el sobre coste agregado que supone tener una discapacidad para resolver los problemas de la vida cotidiana, tanto en términos de tiempo como de capacidad económica para disponer de instrumentos adaptados o ayuda personal. La prestación económica viene pues a suplir estas limitaciones económicas.
11. La reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y la del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, complementan la prestación económica de la seguridad social, con objeto de adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo, la ordenación del tiempo, la prestación del trabajo a distancia y otras medidas similares con objeto de garantizar la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad.

V) Evaluación *ex post*.

Esta norma debe estar sujeta a evaluación *ex post* conforme a los criterios previstos en el artículo 28.2 de la Ley del Gobierno, y el artículo 3.1.h) del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa: “Impacto relevante sobre la infancia y adolescencia o sobre la familia”.

De conformidad con las funciones atribuidas a este MDSA2030 y al Ministerio de Igualdad, se consideran los departamentos idóneos para efectuar dicha evaluación " *ex post*". Para llevarla a efecto se tendrán en cuenta los objetivos y fines de esta norma, previstos en esta MAIN, en el apartado oportunidad de la norma.

Los criterios para realizar esta evaluación serán los previstos en artículo 28.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre y el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, siendo necesario por lo tanto analizar la eficacia, eficiencia, sostenibilidad y los resultados de aplicación de esta norma.

Asimismo, se determinará la sistemática para llevar a cabo esta evaluación, que comenzará a realizarse en el plazo estimado de al menos un año desde la entrada en vigor de la norma, a no ser que el órgano evaluador determine uno distinto, al efecto.

VI) Vinculación del anteproyecto de ley con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “Plan de choque para la economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” incluye, en su reforma

3, la entrada en vigor de una ley de protección de las familias y de reconocimiento de su diversidad para proteger los diversos tipos de estructuras familiares existentes y la determinación de todas aquellas prestaciones y servicios a las que las mismas tienen derecho según sus características y niveles de ingresos.

Se trata del hito 316 y se debe cumplir en el segundo trimestre de 2023.

ANEXO I

INFORME EN RELACIÓN CON EL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE FAMILIAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustanció del 25 de junio al 9 de julio de 2021, ambos incluidos, una consulta pública en la web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En respuesta a dicha consulta se recibieron un total de 166 aportaciones, cuyos elementos más significativos fueron los siguientes:

112 propuestas de particulares, las cuales se pueden resumir en:

- Múltiples adhesiones de ciudadanas a la propuesta de reforma de la ley de familias numerosas presentada por la Federación Española de Familias Numerosas.
- Se observa cierta inquietud en las respuestas por la atención al requisito de rentas para acceder a los beneficios para las familias numerosas en la futura norma.
- Se han remitido varias propuestas relativas a la mejora de la protección social de las familias monoparentales.

Del resto de las aportaciones se puede destacar:

- Aprobar una prestación universal por cuidado de menores
- Reforzar el sistema de prestaciones económicas para que el mismo garantice la cobertura de necesidades básicas de todas las familias
- Restablecer la prestación por hijo a cargo menor de 18 años, y elevar su cuantía a 100 euros mensuales y actualizar la prestación conforme al IPC
- Protección de la maternidad en familias sin cotización suficiente para el acceso a la prestación por nacimiento y cuidado
- Garantizar la prestación de corresponsabilidad por el cuidado del lactante para las familias monoparentales
- Equiparar los permisos por nacimiento y lactancia de las familias monoparentales y biparentales. Revisión de otros permisos laborales dirigidos al cuidado y la atención de los menores
- Extensión de la bonificación de que disfrutaban las familias numerosas por la contratación en el régimen de empleadas de hogar (45%): a todas las familias monoparentales a las familias numerosas de categoría general en las que al menos el padre o la madre ejerza su actividad laboral fuera del hogar.
- Regulación del ingreso mínimo vital: incluir entre los beneficiarios a las familias con hijos o hijas a cargo en situación administrativa irregular y a los adolescentes ex tutelados/as elevar el umbral de ingresos en el caso de familias numerosas, y establecer un incremento de 140 € por cada hijo a partir del cuarto hijo y siguientes en el cobro de esta prestación consideración de la presencia de la discapacidad en la familia .
- Crear prestaciones autonómicas y municipales por hijos e hijas a cargo accesibles a la población en situación administrativa irregular.
- Introducir el criterio de elección en el sistema de complemento por hijos que más convenga al pensionista, y tener en cuenta a todos los hijos de la unidad familiar para el cobro del complemento en la pensión de jubilación.
- Elevar el límite máximo de la prestación contributiva por desempleo por cada hijo a partir del tercer hijo y sucesivos.

- Reforma de la legislación laboral y del empleado público, para el reconocimiento e inclusión integral de la heterogeneidad del hecho familiar.
- Estrategias activas de empleo que desarrollen las habilidades y competencias de las madres solas y que mejoren su empleabilidad.
- Avanzar en medidas de apoyo a la conciliación y la corresponsabilidad parental, Conciliación laboral con el cuidado de menores, en el régimen de las prestaciones que cubren el ejercicio de los derechos de conciliación, la normativa debería prever el disfrute compartido de estos permisos a otros familiares si los padres así lo desean. Regular e implementar la flexibilidad horaria, así como fomentar el teletrabajo como mecanismo de conciliación.
- Transposición del permiso para cuidadores de 5 días laborables al año por trabajador contemplado en la Directiva UE 2019/1158, que ha de transponerse al ordenamiento jurídico español no más tarde del 2 de agosto de 2022
- Fomentar la contratación laboral de ascendientes con menores a cargo a través de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social
- Fomentar salarios dignos, luchar contra la brecha salarial de género y la precariedad laboral
- Aplicar reducciones del coste de las tarifas de acceso a internet a familias vulnerables.
- Proveer de accesos a internet a los centros y pisos residenciales, crear estándares de acceso y uso de los dispositivos.
- Redes: creación de herramientas que permitan convertirse en puntos de encuentro y desarrollo familiar.
- Creación de un Observatorio de la Familia, para garantizar el cumplimiento de todas las medidas protectoras de las familias
- Mejorar la eficacia de las iniciativas legales del Estado y algunas Comunidades Autónomas de anticipar el pago de alimentos a los hijos en caso de que el progenitor no custodio haya incumplido tales obligaciones
- Regulación de una ley estatal específica para parejas de hecho
- Inclusión de los principios de diseño para todos y accesibilidad universal en el diseño de todo tipo de servicios y recursos de apoyo a las familias
- Asegurar que las familias en situación de vulnerabilidad económica o social, o con personas en situación de dependencia, tengan una protección especial
- Reforzar el sistema público de servicios sociales
- El acceso universal y realmente precoz a una atención temprana al desarrollo infantil de calidad
- Contribuir a la redistribución de la renta y la riqueza de las familias
- Dotar de beneficios fiscales y/o económicos a las empresas que apuesten por una real conciliación de vida familiar y laboral, fomentando el teletrabajo y la jornada laboral flexible adecuada a las características de cada familia
- La definición legal a nivel estatal de las situaciones familiares no reconocidas actualmente (al menos de forma homogénea), especialmente en el caso de las familias monoparentales
- Reconocer el derecho subjetivo a los servicios de intervención familiar que aborden de forma preventiva e integral las situaciones que pueden generar la separación de los niños, niñas y adolescentes de su entorno de origen (Preservación y Reintegración Familiar).
- Incluir en la Ley de Extranjería una mención expresa a que todos los niños y niñas se considerarán regulares, como se prevé con la infancia no acompañada y tutelada por los sistemas de protección autonómicos en el Art 35.7 LOEX.
- Alinear la política familiar de España a las estrategias europeas y atender las necesidades de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, atendiendo a su interés superior
- Necesidad de impulsar medidas encaminadas a apoyar la parentalidad positiva
- Equiparar los derechos subjetivos de las parejas de hecho registradas, con independencia del sexo de ambos, a los derechos de las uniones matrimoniales.
- Modificación de la legislación relativa a las familias numerosas al objeto de que las familias monoparentales con dos hijos sean consideradas familias numerosas.

- Reconocer como familias numerosas de categoría especial a las familias con cuatro hijos, cuyos ingresos anuales divididos por el número de miembros de la familia, no superen en cómputo anual el 100 % del IPREM vigente
- En caso de separaciones o divorcios con custodia compartida permitir que el título de familia numerosa lo ostenten el padre y la madre, con objeto de que puedan acogerse ambos a los beneficios por familia numerosa
- Mantener la categoría especial de familia numerosa hasta que el último de los hijos salga del título con efectos retroactivos desde el 17 agosto de 2015.
- Modificación de la ley de familias numerosas para que tengan consideración de familias numerosas.
- El reforzamiento e incremento de los mecanismos y servicios de orientación y mediación familiar
- Necesidad de incorporar la perspectiva de ruralidad
- Incorporar un sistema articulado de prestaciones de servicios para la persona con TEA (trastornos del espectro autista) y su familia, que genere una utilización eficiente y rentable de los recursos, y que proporcione igualdad de oportunidades a todas las familias
- Equiparar los beneficios de las familias múltiples con los ya reconocidos a familias numerosas
- Descuentos en el transporte para familias múltiples
- Prestar especial atención a la situación de las familias homoparentales, para detectar posibles formas de discriminación y prevenirlas
- Garantizar los derechos de las familias con personas sordas
- Reconocer y difundir la labor de las familias de acogida prestándoles desde las administraciones públicas todos los apoyos que éstas requieren
- Orientación a los progenitores de colectivos LGTBI, con el objetivo de ofrecer un entorno de bienestar que garantice el equilibrio socioemocional a los hijos en común
- Pueblo gitano: oportunidades de desarrollo académico, formativo y profesional, especialmente en el caso de las mujeres
- Incremento del límite de ingresos computables para el acceso a viviendas protegidas para familias monoparentales
- Adjudicación de viviendas protegidas, estableciendo una superior puntuación en los baremos aplicables o, en su caso, un cupo reservado de viviendas en las promociones públicas para familias monoparentales
- Acceso preferente a préstamos cualificados concedidos por entidades de crédito públicas o privadas para familias monoparentales
- Introducir bonificaciones en el consumo de suministros básicos del hogar, como el caso del agua, para evitar que, ante un mismo consumo per cápita, paguen más caro el precio del suministro las familias numerosas
- Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad, en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados.
- Planes de contingencia frente a desahucios cuando hay residiendo personas menores de edad
- Pueblo gitano: medidas de apoyo en el acceso a una vivienda
- Mejorar la fiscalidad de las familias con menores o con personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia
- Dotar de beneficios fiscales y/o económicos a las empresas que apuesten por una real conciliación de vida familiar y laboral, fomentando el teletrabajo y la jornada laboral flexible adecuada a las características de cada familia
- Contribuir a la redistribución de la renta y la riqueza de las familias
- Aumento de la inversión en infancia, avanzar hacia un modelo fiscal de deducciones reembolsables por hijo o hija a cargo

- Disminución del IVA en productos básicos, sobre todo en productos de primera crianza y escolarización obligatoria
- A efecto de derechos y obligaciones se considerará a la pareja de hecho de la persona contribuyente en los impuestos personales y reales del sistema tributario, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y otros, incluyendo los relacionados con el Código de Comercio

50 asociaciones:

Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI)

- Condiciones de trabajo: adaptación del tiempo de trabajo, reducción de jornada para el cuidado de hijos que precisen cuidados de manera directa sin hospitalización.
- Extensión a las personas con discapacidad del convenio especial con seguridad social
- Modificación de la normativa de clases pasivas para mejorar la prestación de orfandad.
- reducción de la edad de jubilación de funcionarios con discapacidad igual o superior al 65% o con discapacidades en grado igual o superior al 45% que determine una reducción de la esperanza de vida.
- Mejoras en la regulación de las familias numerosas
- Revisiones en las deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
- Fomentar el teletrabajo a través del impuesto de sociedades.

Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS):

- Recuperación e incremento de las prestaciones por hijo a cargo
- Incremento del límite de rentas para tener derecho a las asignaciones económicas por hijo a cargo. Incluida la Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad.
- Protección de la maternidad en familias sin cotización suficiente para el acceso a la prestación por nacimiento y cuidado: ampliación de la prestación no contributiva para familias monoparentales sin recursos que no hayan cotizado los mínimos exigidos.
- Igualar la duración de la Prestación por nacimiento y cuidado a la de las familias biparentales
- Garantizar la Prestación de corresponsabilidad por el cuidado del lactante para las familias monoparentales
- Aplicación de la bonificación de que disfrutaban las familias numerosas por la contratación en el régimen de empleadas de hogar (45%) a todas las familias monoparentales.
- Ampliación del periodo de reserva del puesto de trabajo y de su consiguiente consideración como período de cotización efectiva en supuestos de excedencia por cuidado de hijos/as disfrutados por trabajadores madres o padres de familia monoparental.
- Mayor cobertura económica en casos de desempleo, pudiéndose posponer el paso a la situación legal de desempleo, sin descontar de la prestación que corresponda el tiempo que se permanezca en situación de maternidad
- Reivindicaciones en materia de Ingreso Mínimo vital
- Revisión de permisos laborales
- Establecimiento de programas específicos de empleo para madres monoparentales y ayudas para personas progenitoras sustentadoras de familias monoparentales y emprendedoras
- Oferta de plazas infantiles en 0 años, y obtención de puntos adicionales por familia monoparental para el acceso a escuelas infantiles y centros educativos
- Promover la educación inclusiva teniendo en cuenta la multidiversidad familiar de la sociedad actual
- Adjudicación de viviendas protegidas, estableciendo una superior puntuación en los baremos aplicables o, en su caso, un cupo reservado de viviendas en las promociones públicas.
- Revisión de los criterios en materia de Registro Civil: Eliminar las diferencias entre las parejas registradas por matrimonio civil, parejas de hecho registradas en registro de parejas de hecho y familias no registradas, pero en situación análoga al matrimonio.

- Mejora de la atención sanitaria y desarrollo de programas específicos que favorezcan la salud física y mental de las mujeres y de los/as menores

Comité reivindicativo y cultural de lesbianas (CRECUL):

- Reforma de la legislación laboral y del empleado público, para el reconocimiento e inclusión integral de la heterogeneidad del hecho familiar, así como la conciliación laboral con el cuidado de menores.
- Se solicitan valoraciones de idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar exentas de discriminación por motivos de pertenencia a grupo familiar.
- Necesario incluir en la normativa, a la persona unida en pareja de hecho con persona separada no divorciada.
- Diversas modificaciones en el IRPF y en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones para eliminar discriminaciones fiscales por razón de la heterogeneidad de las familias monomarentales/monoparentales.

Confederación Española de Familias de personas Sordas (FIAPAS) y Confederación Estatal de personas Sordas (CNSE):

- Considerar la presencia de la discapacidad en la familia en la regulación del ingreso mínimo vital.
- Ampliación de los permisos retribuidos en el caso de hijos e hijas con discapacidad recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los Convenios colectivos, así como el establecimiento de otras medidas de conciliación y flexibilización para aquellos/as trabajadores con un miembro con discapacidad en la familia.
- Se propone una modificación de la ley de Familias Numerosas para que tengan consideración de familias numerosas aquellas familias con un descendiente con discapacidad y aquellas con un descendiente en el caso de que los dos ascendientes sean personas con discapacidad. También en el caso de que se trate de un solo ascendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
- Potenciación de la coordinación interadministrativa e intersectorial entre los ámbitos de sanidad, servicios sociales y educación para el abordaje integral de las necesidades de las familias con miembros con discapacidad
- En materia fiscal: Incremento de las deducciones fiscales existentes por ascendiente y/o descendiente con discapacidad e incremento del mínimo por discapacidad en el caso del contribuyente.
- Establecimiento del tipo superreducido de IVA en la adquisición de productos ortoprotésicos y productos, tecnologías de apoyo y acceso a viviendas adaptadas y ayudas económicas
- Avance en la corresponsabilidad y en la disposición de tiempo para su dedicación a la crianza de aquellas familias con miembros personas sordas y al cuidado en el ámbito familiar.
- Establecimiento de medidas para garantizar los derechos de las familias en ámbitos como la educación, la cultura, la solidaridad intergeneracional, la promoción de la mujer sorda y la protección de los niños y adolescentes sordos, la ocupación y el derecho al trabajo, el medio ambiente, la vivienda, el consumo, la salud y la sanidad pública para las personas sordas
- Garantizar el acceso a la infancia sorda y sus familias a aprender y utilizar la lengua de signos en los ámbitos anteriormente mencionados, mediante profesionales adecuados según precise la familia

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

- Dotar de beneficios fiscales y/o económicos a las empresas que apuesten por una real conciliación de vida familiar y laboral, fomentando el teletrabajo y la jornada laboral flexible adecuada a las características de cada familia

- Reforzar el sistema de prestaciones económicas para que el mismo garantice la cobertura de necesidades básicas de todas las familias, asegurando una prestación por hijo a cargo, que considere las necesidades de la diversidad de familias
- Asegurar que las familias en situación de vulnerabilidad económica o social, o con personas en situación de dependencia, tengan una protección especial, reforzando el sistema público de servicios sociales
- Mejorar la fiscalidad de las familias con menores o donde existan personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia
- Favorecer y facilitar la escolarización, apoyo, refuerzo educativo, orientación de los alumnos con necesidades específicas de atención educativa, así como apoyo y asesoramiento a sus familias, impulsando y desarrollando servicios de mediación familiar y escolar como herramientas de intervención ante la presencia de conflictos o situaciones familiares complejas.

Confederación Española Personas con discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y Confederación ASPACE:

- Extensión de la consideración de familia numerosa a aquellas familias monoparentales formadas por un solo progenitor o progenitora y un niño o niña, así como a aquellas familias formadas por los dos progenitores/as y dos niños o niñas.
- Impulsar la corresponsabilidad en los cuidados no profesionales de personas con parálisis cerebral, que garanticen la cotización de las cuidadoras no profesionales.
- Extensión de la prestación CUME a mayores de 18 años con discapacidad severa (> 65%).
- Incrementar las prestaciones sociales para familias de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades, y ampliar los permisos retribuidos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los Convenios Colectivos, a los trabajadores con hijos/as con discapacidad.
- En términos de conciliación laboral es ineludible regular e implementar la flexibilidad horaria, así como fomentar el teletrabajo como mecanismo de conciliación
- Disminuir el impacto fiscal en las familias de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo
- Protección ante situaciones de violencia en las familias que tengan algún miembro con discapacidad
- Incremento de la protección de los derechos para las familias con personas con discapacidad en el ámbito de la educación, y apoyos prioritarios a dichas familias en el acceso a una vivienda.

Coordinadora de Asociaciones de adopción y acogimiento (CORA) y Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF):

- Proteger a las familias acogedoras de urgencia y, en el caso de acogimiento familiar especializado, a la persona acogedora en los ámbitos de la acción protectora de la Seguridad Social
- Ajuste de los permisos de maternidad y paternidad, desde el momento de la sentencia judicial de acogimiento
- Considerar como hijos de las familias acogedoras, a todos los efectos, a los y las menores y adolescentes acogidos, así como los y las jóvenes que fueron acogidos y han llegado a la mayoría de edad
- Humanización de los procesos de adopción/acogimiento en AN. Promoción real de la adopción abierta como medida de protección que respeta los derechos de vinculación del/de la menor

2 entidades Públicas:

- Consejería de Familia, Juventud y política social de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, regulación del reconocimiento y acreditación de la condición de familia monoparental que permita desarrollar medidas específicas de protección para estas familias, así como la necesaria y urgente reforma de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
- Dirección General de Derechos de Personas con discapacidad- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se informa de principales necesidades y demandas de las familias con miembros con discapacidad y las identificadas por los profesionales

2 consejos Generales:

Consejos Generales de Colegios Oficiales de Psicólogos y del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales.

- Consejo General de colegios oficiales de Psicólogos: abogan por que se prevean medidas de apoyo a la familia como la atención psicológica, tanto para desarrollar una parentalidad positiva como para prevenir situaciones de exclusión social, así como garantizar por parte de las autoridades públicas que todas las personas responsables de educar a los niños tengan acceso a recursos materiales, sociales, psicológicos y culturales adecuados.
- Consejo General de colegios oficiales de Educadores y Educadoras Sociales: Se insiste que en la normativa se recoja la composición de los equipos profesionales que deben intervenir en el trabajo autonómico y local con las familias, en los que debe estar presente la figura del/ de la Educador/a social, correspondiendo al sistema educativo ser el gran impulsor de esta línea de trabajo, con una clara planificación anual con niveles que desarrollen en las aulas y en las familias estos contenidos y con la incorporación de nuevas figuras Educativas.

Medidas y mecanismos de prevención e intervención de la violencia de género en el ámbito familiar. Adopción de un paquete de medidas de protección para las familias monoparentales compuestas por mujeres víctimas de Violencia de Género.

ANEXO II

TABLA OBSERVACIONES SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE FAMILIAS EN TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

REFERENCIA	ENTIDAD	EXTRACTO DE LA OBSERVACIÓN	DECISIÓN
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Entidades Públicas			
Asociaciones			
Ciudadanos			

ANEXO III

**TABLA OBSERVACIONES MINISTERIOS E INSTITUCIONES SOBRE EL
ANTEPROYECTO DE LEY DE FAMILIAS**

REFERENCIA	EXTRACTO DE LA OBSERVACIÓN	DECISIÓN
-------------------	-----------------------------------	-----------------